

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
DE ALIMENTOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE
FAMILIA DE PIURA”**

Presentada por:

Bach. ANA LUCIA VARGAS VALLADARES

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Línea de Investigación: Legislación y Ciencias Políticas
Sub línea de Investigación: Derecho Civil: Nuevas Tendencias

PIURA – PERÚ
2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
DE ALIMENTOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE
FAMILIA DE PIURA”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Bach. ANA LUCIA VARGAS VALLADARES
Ejecutora

Dra. JACQUELINE SARMIENTO ROJAS
Asesor

Línea de Investigación: Legislación y Ciencias Políticas
Sub línea de Investigación: Derecho Civil: Nuevas Tendencias

PIURA – PERÚ
2019

**DECLARACIÓN JURADA
DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION**

Yo: **ANA LUCIA VARGAS VALLADARES** identificada con DNI N° **76155338**, en la condición de Egresada, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS** y domiciliada en **AV. SULLANA NORTE N° 208 AA.HH. PACHITEA**, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: **973387222**, Email: **fabiola327@hotmail.com**.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



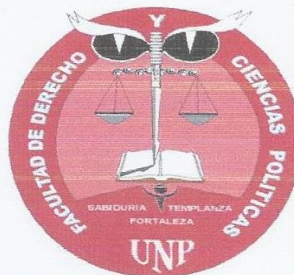
Piura 29 de Junio del 2019

DNI N° 76155338

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS
DE ALIMENTOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE
FAMILIA DE PIURA”**

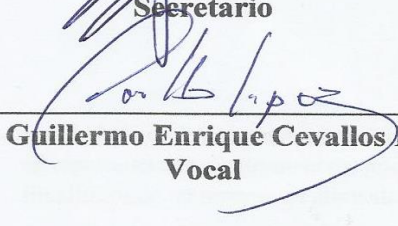
TESIS REVISADA Y APROBADA POR EL JURADO



Dr. Roberto Palacios Marquéz
Presidente



Dr. Deiver Vilcherrez Vilela
Secretario



Mag. Guillermo Enrique Cevallos López
Vocal

PIURA – PERÚ
2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
095-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada "LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE PIURA" presentada por la Bachiller VARGAS VALLADARES ANA LUCIA para optar el Título Profesional de Abogado, con el asesoramiento de la Dra. Jacqueline Sarmiento Rojas oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA ☒ (X)

DESAPROBADA ☐ ()

Con la mención de:


Sobresaliente

- (X) En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 14 de diciembre de 2019


DR. ROBERTO PALACIOS MARQUEZ
PRESIDENTE


DR. DEIVER VILCHERREZ VILELA
SECRETARIO


MAG. GUILLERMO ENRIQUE CEVALLOS LOPEZ
VOCAL

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación está dedicado a todas las madres que, en representación de sus menores hijos, día a día se enfrentan a los ritualismos de un proceso de alimentos meramente escrito.

A mi adorado papá Ramón por esforzarse todos los días para sacarme adelante y al amor de mi vida, mi adorada mamá Fabiola, quien es la luz de mi vida.

AGRADECIMIENTO

A Dios por ser mi guía durante toda mi carrera y otorgarme la sabiduría para lograr cada una de mis metas.

A toda mi familia, en especial a mis tías Amalia e Isabel, mi tío Juan y mis primos Juan Luis y Ronny, por brindarme su amor y apoyo incondicional.

Finalmente, a la Dra. Mary Meca Querevalú, por hacerme partícipe de su proyecto de Implementación de las Audiencias Orales en los Procesos de Alimentos, y por su apoyo constante en la realización de este trabajo de investigación.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA	16
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	16
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	17
1.2.1. Problema General	17
1.2.2. Problema Específico	17
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.4. OBJETIVOS	18
1.4.1. Objetivo General	18
1.4.2. Objetivo Específico	18
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	18
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	19
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	19
2.1.1. Antecedentes Internacionales	19
2.1.2. Antecedentes Nacionales	19
2.2. BASES TEÓRICAS	20
2.2.1. Alimentos	20
2.2.2. Derecho alimentario	20
2.2.3. Proceso de alimentos	21
2.2.4. Lineamientos en temas de familia según el Tercer Pleno Casatorio en Materia Civil	21
2.2.5. Sistema de Escritura en los Procesos de Familia	23
2.2.6. Sistema de Oralidad en los Procesos de Familia	23
2.2.7. Sistema Mixto en los Procesos de Familia	24
2.2.8. Audiencias Orales	25
2.2.9. Interés Superior del Niño	25
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS	26
2.4. MARCO REFERENCIAL	27
2.4.1. ALIMENTOS	27
2.4.1.1. Definición	27
2.4.1.2. Derecho Alimentario	27
2.4.1.3. Fuentes de la Obligación Alimentaria	29
2.4.1.4. Clasificación de los alimentos	29
2.4.1.5. Naturaleza Jurídica	30
2.4.1.6. Características	30
2.4.1.7. Condiciones para ejercer el derecho alimentario	31

2.4.1.8.	Sujetos de la relación alimentaria	33
2.4.2.	PROCESO DE ALIMENTOS	35
2.4.2.1.	Proceso de alimentos en el Código Procesal Civil.....	36
2.4.2.2.	Proceso de alimentos en el Código de los Niños y Adolescentes.....	38
2.4.2.3.	Modalidades de procesos de alimentos.....	39
2.4.3.	PRINCIPIOS DEL PROCESO DE FAMILIA	40
2.4.4.	LA ORALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO PERUANO	54
2.4.4.1.	Implementación de la oralidad en el Proceso Penal.....	54
2.4.4.2.	Implementación de la oralidad en el Proceso Laboral.....	56
2.4.4.3.	Implementación de la oralidad en el Proceso Civil	59
2.4.5.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DE “AUDIENCIAS ORALES” EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA	66
2.4.5.1.	Plan Piloto desarrollado en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura	66
2.4.5.2.	Plan Piloto desarrollado en el Juzgado de Paz Letrado de Paita.....	66
2.5.	HIPÓTESIS	67
2.5.1.	Hipótesis General.....	67
2.5.2.	Hipótesis Específica.....	67
	CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	68
3.1.	ENFOQUE	68
3.2.	DISEÑO	68
3.3.	NIVEL.....	68
3.4.	TIPO.....	68
3.5.	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	68
3.6.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	69
	CAPÍTULO IV: PROBANZA DE HIPÓTESIS	71
4.1.	PROBANZA JURÍDICO SOCIAL – DOCTRINAL.....	71
	CONCLUSIONES	83
	RECOMENDACIONES	84
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	85
	ANEXOS.....	88
	APÉNDICES.....	95

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexos 1. Entrevista 01	89
Anexos 2. Entrevista 02	90
Anexos 3. Matriz de Consistencia.....	91
Anexos 4. Cuadro de Cronograma de Ejecución	92
Anexos 5. Presupuesto	94

LISTA DE ABREVIATURAS

- **CSJP** : Corte Superior de Justicia de Piura
- **JPL** : Juzgado de Paz Letrado
- **Art** : Artículo
- **C** : Constitución
- **NCPP** : Nuevo Código Procesal Penal
- **NLPT** : Nueva Ley Procesal de Trabajo
- **CC** : Código Civil
- **CPC** : Código Procesal Civil
- **CNA** : Código de los Niños y Adolescentes
- **ISN** : Interés Superior del Niño

RESUMEN

La presente investigación titulada “**LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE PIURA**”, tiene por finalidad demostrar que el predominio de la escritura en los procesos de alimentos, conlleva a excesivos tardíos y la impregnación de formalismos inútiles que contravienen la naturaleza de los procesos de alimentos; generando una demora innecesaria en la administración de justicia e impidiendo a las partes procesales, quienes en su gran mayoría son personas en condición de vulnerabilidad, tener acceso a un sistema de justicia eficiente; fomentando la búsqueda de nuevos mecanismos a efecto de lograr que los procesos sean resueltos con mayor prontitud y eficacia.

Es por ello que, se realizó un análisis exhaustivo de la doctrina para poder analizar de que forma la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos garantiza una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados y determinar de qué manera el predominio de la oralidad sobre la escritura en los procesos de alimentos garantiza que estos procesos sean rápidos y expeditivos; para lo cual se consultó opiniones de los tratadistas nacionales e internacionales; llegando a la conclusión de que con la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos se coadyuvaría a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura, debido a que, lograría que se impartiera justicia de manera más oportuna y se materializaría eficazmente el derecho alimentario de los alimentistas.

Asimismo, se llegó a la conclusión de que el predominio de la oralidad en los procesos de alimentos, convertiría a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos, toda vez que, garantizarían los derechos fundamentales de las partes procesales, ello en mérito a la aplicación del Interés Superior del Niño.

PALABRAS CLAVES: Oralidad, Procesos de alimentos, Audiencia Única, Interés Superior del Niño.

ABSTRACT

The present investigation titled “THE IMPLEMENTATION OF THE ORALITY IN THE FOOD PROCESSES OF THE COURTS OF PEACE LETTERED OF FAMILY OF PIURA”, Its intended to demonstrate that the predominance of writing in food processes leads to late excesses and the impregnation of useless formalisms that contravene the nature of food processes themselves; generating an unnecessary delay in the administration of justice and preventing the procedural parties, who are mostly people in a condition of vulnerability, have access to an efficient justice system; promoting the search for new mechanisms in order to ensure that the processes are resolved more promptly and effectively.

That is the main reason why, an exhaustive analysis of the doctrine was carried out in order to analyze how the implementation of orality in food processes guarantees a prompt and effective administration of justice in the Courts and determine how the predominance of orality about writing in food processes ensures that these processes are fast and expeditious; for which opinions of national and international writers were consulted; coming to the conclusion that with the implementation of orality in the food processes would contribute to a prompt and effective administration of justice in the Family Justice Courts of Piura, because, it would achieve that justice was imparted more timely and would effectively materialize the food right of the foodists.

Also, it was concluded that the predominance of orality in food processes would make these processes fast and expeditious procedural instruments, since they would guarantee the fundamental rights of the procedural parties, in merit of the application. of the Best Interest of the Child.

KEY WORDS: Orality, Food Process, Unique Audience, Best Interest of the Child

INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada **“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE PIURA”**, tuvo por finalidad, demostrar que, en la actualidad, nuestra administración de justicia atraviesa una preocupante realidad, conllevando a que la población pierda la confianza en el Poder Judicial, teniendo como uno de sus principales factores, la demora en los procesos judiciales debido a la excesiva carga procesal que existe. Es así que, centrándonos específicamente en los procesos de alimentos, pudimos advertir que estos procesos tienden a ser tradicionalmente escritos, retrasando enormemente que sigan su curso y que se pueda llegar a una solución rápida de la controversia. Es por ello, que es necesario implementar un cambio en el sistema judicial para establecer medidas necesarias que consigan que los procesos de alimentos, garanticen una pronta y eficaz administración de justicia y se materialice los derechos fundamentales de sus beneficiarios, situación que se logra con la implementación de la oralidad en estos procesos, convirtiéndolos en procesos rápidos y eficaces, que permitirán una pronta satisfacción de las necesidades básicas de los alimentistas.

La oralidad constituye un sistema acorde con las exigencias constitucionales, ya que en éste se cumple los principios constitucionales de concentración, inmediación, celeridad y economía procesal, posibilitando un debate inmediato, a través del cual, el juez está habilitado para conocer y valorar de manera directa los argumentos de las partes, así como sus pruebas. De igual manera, facilita un trámite concentrado, pues hace viable que el debate se realice en una sola comparecencia, coadyuvando a mejorar cualitativamente el juzgamiento, permitiendo la celeridad en los despachos y satisfaciendo los reclamos sociales permanentes respecto a la administración de justicia.

Es así, que la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos, implica un cambio profundo en la comprensión de este instituto, específicamente, en la manera en que el proceso debe ser tramitado, con la finalidad de elevar los niveles de eficacia y eficiencia en la impartición de justicia. En el contexto jurídico, se hace de vital importancia la oralidad como tal, conforme se ha venido implementando en la actualidad en los procesos judiciales peruanos (procesos penales, laborales y civiles), permitiendo que en estos procesos exista una justicia pronta, legítima, segura y confiable para todos los ciudadanos conforme lo determina nuestra Carta Magna.

Es por eso que la presente investigación, tiene como finalidad demostrar que la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos garantizará una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Piura, logrando impartir justicia de manera más oportuna y materializando el derecho alimentario de los alimentistas, ello en mérito a la aplicación del Interés Superior del Niño y del Adolescente.

Para poder arribar a una conclusión final y una mejor comprensión, el presente trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes capítulos:

En el primer capítulo, se expuso los aspectos de la problemática, realizándose una descripción de la problemática que se centra en la demora en la tramitación de los procesos de alimentos en los Juzgados de Paz Letrado de Piura; además se elaboró la formulación del problema y se señaló de manera específica el problema general y específico. Por último, se detalló la justificación e importancia de la investigación, el objetivo general y específico que se logró, y finalmente la delimitación de la investigación realizada.

En el segundo capítulo, referente al marco referencial, en primer lugar, se procedió a realizar los antecedentes de la investigación, divididos en internacionales y nacionales; posteriormente se desarrolló de manera general las bases teóricas del trabajo de investigación, siendo estas: los alimentos, el derecho alimentario, los procesos de alimentos, el Tercer Pleno Casatorio, Sistemas de escritura, oralidad y mixto en los Procesos de Familia, Audiencias Orales y el Interés Superior del Niño.

Finalmente, se desarrolló de manera detallada todo lo referente a los alimentos, proceso de alimentos, principios del derecho de familia, todo lo que implica la oralidad tanto como principio y como sistema, su tratamiento en la normativa nacional y en el Derecho Comparado y la implementación de los Plan Piloto de las Audiencias Orales en el Distrito Judicial de Piura.

La Autora.

CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

De acuerdo con el estudio demográfico del año 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), en el Perú existen 9,204,329.00 niñas, niños y adolescentes, siendo el 50,9% (4,670.603) varones y el 41,1% (4,533.726) mujeres. Por otro lado, el INEI detalló que, según el grupo de edad; el 23,7% (3,000,000) tienen de 0 a 5 años; el 34,5% (3,100,000) entre 6 y 11 años; mientras que el 32,8% restante (3,080,000) son adolescentes; y si nos centramos específicamente de Piura, apreciamos que tiene una población de niñas, niños y adolescente según el grupo de edad: de menos de 1 año de 33,014; de 1 a 4 años de 146,766; de 5 años de 37809; de 6 a 11 años de 228,534; de 12 a 17 de 204,246 y de 18 a más de 1,206,440.

Asimismo, concordante con el Informe N° 001-2018-DP/AAC denominado “El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos”, presentado por la Defensoría del Pueblo el 27 de julio de 2018; se recomienda aplicar el principio del interés superior del niño respecto de las formalidades que exige la norma procesal, ya que conforme se aprecia en su segundo capítulo relacionado a los beneficiarios de las pensiones de alimentos, el 89% de las demandantes solicitaron alimentos para sus hijos e hijas, mientras que el 5,4% lo solicitaron para sí mismos y el 5,1% para sí y para sus hijos conjuntamente; revelando así que los hijos e hijas (en su gran mayoría niños y adolescentes) son los principales beneficiarios de los procesos de alimentos.

Ahora bien, como sabemos, los procesos de alimentos son ventilados en los Juzgados de Paz Letrado, existiendo actualmente en la Corte Superior de Justicia de Piura, 3 Juzgados de Paz Letrado con competencia exclusiva en materia de familia; el 1° y 3° Juzgado de Paz Letrado de Piura donde se ventilan procesos en trámite y en ejecución, siendo estos Juzgados los que admiten las demandas, y el 7° Juzgado de Paz Letrado de Piura donde se ventilan sólo procesos de ejecución; los mismos que cuentan con una excesiva carga de procesos de alimentos en trámite y en ejecución, pues conforme a las estadísticas de ingresos de demandas, en el 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 ingresaron 868 demandas y en el 2018 ingresaron 987 demandas; en el 3° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 ingresaron 1046 demandas y en el 2018 ingresaron 982 y en el 7° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 ingresaron 358 demandas y en el 2018 ingresaron 819 demandas; por lo que, la sumatoria total de demandas ingresadas en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 sería de 2272 demandas y en el 2018 de 2788 demandas, evidenciando así la excesiva carga procesal con la que cuentan estos Juzgados.

La situación anteriormente descrita, fue constatada de manera personal en el año 2018, cuando tuve la oportunidad de integrar el programa SECIGRA 2018, designada al Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, donde una de las mayores dificultades que enfrentan estos Juzgados para efectuar una correcta administración de justicia, es la abundante carga procesal con la que cuentan, generando así que los procesos de alimentos se prolonguen por encima de los plazos previsto en la ley.

Dificultades reflejadas, por ejemplo, en el excesivo periodo que transcurría desde la admisión de la demanda hasta la realización de la audiencia única, siendo un periodo aproximado de cinco meses, pues actualmente el desarrollo de las audiencias únicas en los procesos de alimentos ha desnaturalizado la correcta aplicación de los principios de oralidad, intermediación y celeridad procesal, por cuanto los magistrados se han convertido en transcriptores (en audiencia) de los documentos obrantes en el expediente judicial y de lo que alegan las partes en audiencia; y las demandantes y demandados en simples espectadores de dichas transcripciones, generando una demora innecesaria

en la realización de las audiencias (esto es de una hora), lo que conlleva a programar sólo 06 audiencias diarias, y peor aún, frustrar las ya programadas, generando así que el libro de audiencias esté constantemente saturado y se extienda el plazo para fijar las fechas de audiencias, desnaturalizando así la figura de los procesos de alimentos, pues estos deben ser un instrumento procesal rápido y expeditivo que permita la pronta satisfacción de las necesidades básicas de los alimentistas.

Esta deficiencia en la administración de justicia, fue superada en gran parte, cuando la Juez a cargo del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, Mg. Mary Mercedes Meca Querevalú, presentó ante la Corte Superior de Justicia de Piura, una propuesta para la realización de audiencias orales en los procesos de alimentos, implementándose así mediante Resolución Administrativa N° 944-2018-P-CSJPI/PJ, el Plan Piloto del “Proyecto de Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión del Despacho Judicial en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura”, iniciado en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, desde el 01 de diciembre de 2018, y en el Juzgado de Paz Letrado de Paita desde el 21 de enero de 2019; generándose así, cambios positivos en los procesos de alimentos, porque las audiencias orales tienen una duración de 30 minutos, permitiendo así programar entre 9 a 10 audiencias diarias, acortando el plazo que transcurría desde la admisión de la demanda hasta la realización de la audiencia, siendo este de sólo 2 meses y no de 5 meses como ocurría anteriormente, conservando así los procesos de alimentos su calidad de instrumento rápido y eficaz para cautelar los derechos de los alimentistas.

En resumen, conforme a lo descrito anteriormente, los procesos de alimentos presentan dificultades y deficiencias, que en la actualidad, conllevan a que las demandantes, en su mayoría madres solteras, se enfrenten a los ritualismos de un procedimiento meramente escrito, donde no se materializa de manera efectiva sus derechos fundamentales y que con la implementación de la oralidad, se logró que los procesos de alimentos concluyan en tiempo y forma oportuna, garantizando el cumplimiento de las prestaciones y teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y adolescentes, lo que además, obliga al Estado a contar con una regulación que garantice la vigencia efectiva de sus derechos y contribuya a su normal desarrollo, conforme lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y el art. 6° de la Constitución Política del Perú¹.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

¿La implementación de la oralidad en los procesos de alimentos coadyuva a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura?

1.2.2. Problema Específico

¿El predominio de la oralidad en los procesos de alimentos convierte a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos?

¹ Art. 6 de la C.: “La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos u deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se justificó social y jurídicamente, porque al ser los procesos de alimentos, procesos donde predomina la escritura, conlleva a excesivos tardíos y la impregnación de formalismos inútiles que contravienen por sí mismos la naturaleza de los procesos de alimentos; generando una demora innecesaria en la administración de justicia e impidiendo a las partes procesales, quienes en su gran mayoría son personas en condición de vulnerabilidad, tener acceso a un sistema de justicia eficiente; fomentando la búsqueda de nuevos mecanismos a efecto de lograr que los procesos sean resueltos con mayor prontitud y eficacia.

Por lo que, con la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos desarrollados en los Juzgados de Paz Letrado de Piura se logró procesos donde se enfatice la oralidad por sobre la escritura, garantizando una pronta administración de justicia y que se materialice de manera eficaz los derechos fundamentales de los beneficiarios.

Asimismo, teniendo en cuenta la marcada tendencia de que todos los procesos judiciales deben estar orientados por la oralidad, como actualmente se viene desarrollando con el Nuevo Código Procesal Penal y la Nueva Ley Procesal de Trabajo, que ventilan derechos sociales; surge la interrogante de ¿cómo no podría implementarse la oralidad en los procesos de alimentos que ventilan derechos fundamentales?; siendo que esta buena práctica, permite reducir el tiempo de los actos procesales, promoviendo una gestión más eficiente del despacho judicial e impartiendo justicia de manera más oportuna.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

1.4.1.1. Analizar de que forma la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos garantizará una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura.

1.4.2. Objetivo Específico

1.4.2.1. Determinar de qué manera el predominio de la oralidad sobre la escritura en los procesos de alimentos garantizará que estos procesos sean rápidos y expeditivos.

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. ESPACIAL: La Investigación se encuentra delimitada al análisis de los procesos de alimentos desarrollados en los Juzgados de Paz Letrado de Piura.

1.5.2. TEMPORAL: En cuanto al tiempo se hace referencia desde el momento que se implementó el Plan Piloto del Proyecto de “Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión del Despacho Judicial en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura”, iniciado en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, desde el 03 de diciembre de 2018.

1.5.3. ECONÓMICA: Esta delimitación está supeditada a que los recursos son por cuenta propia de la investigadora.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes Internacionales

PULIDO CARDONA (2016) En su tesis para obtener el grado de magister, titulada “Impacto de la Oralidad Civil y de Familia en los Derechos Fundamentales de los Intervinientes, en el Distrito Judicial de Manizales, entre los años 2011 y 2014” tuvo como objetivo analizar el impacto que genera la aplicación del principio de oralidad en las áreas civil y familia en los derechos fundamentales de los intervinientes, dentro del Distrito Judicial de Manizales entre los años 2011 y 2014, señalando que el cambio constante de pensamiento jurídico ha generado que el proceso civil y de familia haya tenido diferentes escenarios por medio de los cuales se desarrolla; por lo que en la actualidad, el principio de oralidad es la base fundamental del desdoblamiento de las audiencias dirigidas por el Juez y de la sentencia como fin mismo del proceso. Concluyendo que, la oralidad emerge en la actualidad como un “principio” rector del desarrollo del proceso civil y de familia, que comprende y contiene los criterios esenciales de la “dialéctica” para efectos de comunicar y exteriorizar el razonamiento y el pensamiento de los intervinientes en el juicio, habiendo el principio de oralidad irradiado toda la normatividad del Estado Colombiano, incluyéndose en todos los campos y órbitas de las diferentes áreas del derecho, esto es, lo que corresponde al derecho penal, laboral, civil, familia, disciplinario y tributario.

CAMPOY ROBLES, RODRIGUEZ VALERA, & CABADA JACOBO (2016) En su artículo jurídico “Hacia los Juicios Orales en Materia Familiar en Sonora” refieren que una de las aspiraciones de justicia más preocupante en la actualidad en Sonora son los procesos con mayor agilidad y consecuentemente rapidez en su trámite, sin dejar de lado la certeza y seguridad jurídica, ya que los procesos de familia se desarrollan con base en la lentitud e ineficacia, evitando así una pronta solución a los conflictos familiares, por lo que proponen la implementación de los procesos familiares con tendencia hacia la oralidad, para que a través de este medio se protejan mejor los derechos del menor, ya que un juicio con tendencia hacia la oralidad, es aquella forma de llevar a cabo el proceso consistente en privilegiar la palabra hablada por encima de la escritura, aunque no implica que esta sea erradicada por completo del proceso, ya que su uso moderado ofrece la certeza y la seguridad jurídica con que debe contar el debido proceso.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

REYNA VARGAS (2017) En su tesis para obtener el título de abogado, titulada “La Oralidad en el Proceso Civil Peruano” tuvo como objetivo aclarar en qué consiste la oralidad en el proceso judicial y determinar por qué no fue exitoso el modelo propuesto originalmente en el Código Procesal Civil, tratando la evolución y posterior involución de la oralidad en el proceso civil peruano, señalando que la falta de preparación de los operadores jurídicos, la reticencia al cambio y la falta de una implementación adecuada llevó a un mal uso de las herramientas orales que proporcionaba el Código Procesal Civil, de manera que las audiencias se convirtieron en momentos de declamación de resoluciones escritas, por lo que se incluyó elementos marcadamente escritos. Llegando así a la conclusión de que la oralidad es decididamente superior a la escritura desde un punto de vista teórico, señalando que el éxito de una reforma procesal que pretenda adoptar la oralidad para el proceso civil requerirá del apoyo concurrente de los legisladores, políticos, académicos, jueces y abogados, por lo que anexa a su tesis una propuesta legislativa para la recuperación de la oralidad en el proceso civil.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Alimentos

De los seres vivientes que pueblan la tierra, uno de los que vienen al mundo en situación de incapacidad y se mantiene en ese estado por un buen periodo de su existencia, es el ser humano; ahora bien, esta etapa de insuficiencia debe ser cubierta pues de lo contrario perecerá, y los llamados a cubrir tal estado de insuficiencia son sus progenitores, quienes lo trajeron al mundo, resultando por ende los primeros obligados a asistirlo; obsérvese en ello un deber natural de socorro. Esta incapacidad, también aparece en circunstancias excepcionales cuando el ser humano por su edad cronológica ya no debería ser dependiente, sino todo lo contrario; sin embargo, situaciones de enfermedad, accidente, entre otras, hacen caer a estas personas en estado de necesidad que debe ser cubierta urgentemente, surgiendo en sus parientes la obligación natural de asistencia. AGUILAR LLANOS (2016)

En derecho el término alimentos tiene mayor alcance que el que se da en la terminología popular, pues no solo comprende el sustento diario, sino que igualmente abarca otros conceptos vitales para el ser, conforme lo establecido en el art. 472° de nuestro Código Civil².

Es así que, podemos definir a los alimentos como todo lo necesario para atender la subsistencia, es decir, aquello que es indispensable para lograr el desarrollo integral del niño y/o adolescente; sin embargo, hay que tener en cuenta que, los alimentos no solo cubren la alimentación o comida del menor, dependiente, cónyuge u otro; sino que va mucho más allá, por ejemplo, salud, vivienda, y en caso de menores de edad, educación, recreación, entre otros. ARRUNÁTEGUI CHÁVEZ (2011)

2.2.2. Derecho alimentario

El derecho alimentario es un derecho fundamental de la persona porque simplemente sin los alimentos adecuados, las personas no podrían llevar una vida saludable y con proyección futura positiva.

El derecho alimentario goza de características especiales como: personal, intransferible, irrenunciable, imprescriptible, incompensable, intransigible, inembargable, recíproco y revisables, mientras que su correlato, la obligación alimentaria participa de alguna de las características citadas, tales como personal, intransferible, imprescriptible, incompensable, intransigible, recíproco, revisable y además divisible.

Actualmente, el derecho alimentario atraviesa la totalidad de los derechos humanos, su satisfacción es esencial para combatir la pobreza, de ahí la preocupación de todos los estados en el mundo y en especial de nuestro país para que desaparezca el hambre, especialmente de los niños, es por ello, que el Congreso de la República emite leyes para que los niños y adolescentes tengan un trámite más ágil y se garantice la materialización de los derechos fundamentales de los alimentistas. ARRUNÁTEGUI CHÁVEZ (2011)

² Art. 472° del CC.: Definición de Alimentos: "Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, institución y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa postparto".

2.2.3. Proceso de alimentos

Los procesos de alimentos, teniéndose en cuenta sus diversas figuras procesales o modalidades como es la de fijación, aumento, reducción, exoneración, extinción, prorrateo, etc., son aquellos de los procesos más comunes y numerosos en los distintos distritos judiciales de la República, siendo entre ellos los más frecuentes los casos en los cuales quienes demandan alimentos es el hijo extramatrimonial.

Las causas del gran incumplimiento de la obligación alimentaria son de diversa índole, tales como: el deterioro de la relación paterno filial cuando no hay convivencia entre los progenitores, la falta de entereza y sentido de responsabilidad de los padres, la estrechez económica del demandado y la insuficiencia de la madre para hacerse cargo por sí sola de la alimentación del hijo, entre otros. Dichos factores, hacen que el no cumplimiento de la obligación alimentaria sea más que un problema jurídico, por lo tanto, se convierta en un problema de carácter socioeconómico.

Mediante esta institución se fija la relación obligacional alimentaria, determinando al acreedor y deudor alimentario y las condiciones en las que opera el derecho.

En el Derecho de Familia, el derecho de alimentos es uno de los más importantes y trascendentes, y a no dudarlo uno de los más pretendidos, bastando para ello verificar el volumen de procesos sobre alimentos que se tramitan a través de las instancias judiciales. ARRUNÁTEGUI CHÁVEZ (2011)

2.2.4. Lineamientos en temas de familia según el Tercer Pleno Casatorio en Materia Civil

Actualmente, como bien cada uno de nosotros lo puede constatar, las relaciones familiares son de por sí complejas y muy sensibles; y cuando surgen problemas en el entorno familiar, las familias no buscan resolver sus diferencias internamente, sino que, por el contrario, optan por iniciar un proceso en los Juzgados de Familia, generando así que actualmente exista una excesiva carga en estos Juzgados.

El magistrado de familia al conocer estos casos, no debe circunscribirse a aplicar la ley como un simple operador, sino que debe analizar el tema, más que como un problema legal, como un problema humano contando con la colaboración de su equipo interdisciplinario; por lo que, orientado de esta forma su análisis, garantizará que la solución que dé, será la más oportuna a los intereses de la familia, primando antes que los intereses particulares que puedan tener los miembros de la familia. AGUILAR LLANOS (2016)

En el Derecho de Familia, tuitivo por excelencia, a diferencia de lo que ocurre con otras ramas del derecho, observamos un interés que termina priorizándose a otros intereses, nos estamos refiriendo al interés familiar que descansa en la protección familiar por parte del Estado, tal como se establece en el artículo 4° de la Carta Magna³. El interés familiar no es algo indeterminado, abstracto, sino algo concreto y que se puede visualizar en normas concretas que aparecen en el libro de familia. AGUILAR LLANOS (2016)

³ Art. 4° de la C.: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. (...)”

Es por ello, que, conforme lo establecido en el Tercer Pleno Casatorio: “El Derecho Procesal de Familia se concibe como aquél destinado a solucionar con prontitud los conflictos que surjan dentro de la esfera de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ya sea se trate de hijos, padres, cónyuges, hermanos, etc., de allí que se diferencie del proceso civil en razón a la naturaleza de los conflictos a tratar, y que imponen al Juez una conducta conciliadora y sensible, que supere los formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la confrontación como última ratio”. En consecuencia, la naturaleza del derecho material de familia, obliga al legislador y al Juez a fomentar y desarrollar procesos que tengan una estructura con componentes flexibles, evitando principalmente los excesivos ritualismos y la ineficaz administración de justicia.

Asimismo, el Tercer Pleno Casatorio desarrolla de manera oportuna la flexibilización de los principios de congruencia, preclusión, y la acumulación de pretensiones en los procesos de familia, señalando así:

Acerca del principio de preclusión. -

El principio de preclusión va a permitir que el proceso tenga cierto orden, dividiéndolo en etapas, con la finalidad que estas se vayan cumpliendo ordenadamente hasta llegar a la resolución final, cuidando que no exista un retroceso en la fase evolutiva del proceso, salvo excepciones o defectos insuperables que terminan afectando derechos constitucionales. En pocas palabras, el principio de preclusión impone orden en el debate y posibilita el progreso del proceso para alcanzar sus fines.

En el Derecho de Familia, sus temas son muy sensibles, por ello que suelen surgir conflictos familiares, en los que no siempre lo que se demanda (pretensión) contiene todos los petitorios, y por ello, las pruebas ofrecidas para acreditar los hechos invocados terminan siendo insuficientes; en este orden de ideas el Tercer Pleno Casatorio establece que este principio de preclusión no puede aplicarse rígidamente y más bien ser permisivos en cuanto a las pruebas y la oportunidad de las mismas para su presentación, lo que implica, que si dentro de la etapa postulatoria quien ha demandado un tema de familia, y no ha ofrecido todas las pruebas conducentes a acreditar los hechos que sustenta su pretensión, pueden hacerlo aun cuando ya se encuentre en otra etapa del proceso, que puede ser el de la audiencia, e incluso antes de la sentencia; claro está que tendrá que respetarse el derecho de defensa de la otra parte procesal, a quien debe notificársele con el ofrecimiento de la prueba tardía. AGUILAR LLANOS (2016)

Acerca del principio de congruencia. -

Por el principio de congruencia el Juez debe respetar el *thema decidendum* propuesto por las partes, limitando su pronunciamiento a las alegaciones introducidas en los escritos tales como demanda, contestación, etc., por lo que el Juez no puede pronunciarse más allá de lo solicitado, sino que tiene resolver sobre lo expresamente pedido, de no hacerlo es atentar contra este principio.

Siendo así, el Tercer Pleno Casatorio, establece que no es faltar al principio de congruencia cuando el juez de familia decide sobre pedidos o petitorios implícitos, en tanto que considera que los asuntos de familia son a veces muy íntimos y personales y por ello no se exponen libremente. Esta flexibilización del principio de congruencia, no debe violentar el derecho de defensa de la otra parte procesal, en tanto queda obligado al juez, al considerar un pedido que no aparece en la pretensión principal, pero que a lo largo del proceso se ha decantado con algunos indicios o señales, o escritos en donde implícitamente aparecen pedidos concretos, entonces debe correr traslado a la otra parte, para que haga uso de su derecho de defensa. AGUILAR LLANOS (2016)

Acerca de la acumulación de pretensiones. -

El Tercer Pleno Casatorio ha señalado: “Se ha establecido como característica de los procesos de estado de familia el de ser una excepción al principio dispositivo o de iniciativa de parte, y que en tal sentido se le otorgan facultades extraordinarias al juzgado para concretar las finalidades del proceso y dar solución efectiva al caso. Una de las potestades es precisamente la de integrar el petitorio con pretensiones sobre las cuales es necesario emitir un pronunciamiento porque afectan a los hijos o al régimen patrimonial que se pretende disolver...”. En consecuencia, el Juez de familia está facultado, en principio, para integrar la demanda con las pretensiones accesorias previstas expresamente por la ley, tales como demanda de alimentos para el caso de menores, ejercicio de la tenencia o liquidación de la liquidación de gananciales; en este sentido podrá hacerlo hasta el momento de fijar los puntos controvertidos.

Sobre lo descrito anteriormente, el Tercer Pleno Casatorio, en el punto 14 de la sentencia señala lo siguiente: “Estos principios de congruencias, preclusión y eventualidad procesal reclaman que el juez se pronuncie solamente sobre los hechos y petitorios formulados por las partes en sus actos postulatorios respectivos. Igualmente, estos principios imponen a las partes que todas sus pretensiones y medios de defensa que convengan a sus intereses se formulen también en la etapa postulatoria ya sea en forma alternativa, subordinada o accesorio. Pero como veremos estos principios deben aplicarse en forma flexible en los procesos de familia...”.

2.2.5. Sistema de Escritura en los Procesos de Familia

El procedimiento escrito fue el que predominó en el proceso común europeo del siglo XII al siglo XVIII, se caracterizó por la falta de relaciones inmediatas entre el juzgador y las partes, la falta de publicidad, la secuencia muy prolongada de plazos y la valoración de las pruebas. En otros términos, el procedimiento escrito tuvo como características la falta de intermediación, el secreto, la dispersión de los actos procesales y el sistema de la prueba legal. CAPPELLETTI (1972)

Basado en que todo el proceso de familia actualmente es de forma escrita, es decir, que todas sus fases se desarrollan bajo este sistema, se podría decir que el proceso de familia se desarrolla por una serie de actos, plazos y actas, en el cual, el proceso se da de una forma ordinaria, ya que se interpone la demanda, se corre traslado al demandado, se recepciona la contestación de demanda y se lleva a cabo la Audiencia Única, siendo todo eminentemente escrito y dejando constancia de todo.

Es por ello que el proceso escrito, es un proceso lento, pesado, burocrático y alejado de la realidad, ya que si bien es cierto se debe dejar constancia de todo lo actuado dentro del proceso, se llega hasta de dejar de aplicar los principios procesales, los cuales han existido desde tiempos inmemorables, a los que no se les ha dado la relevancia e importancia debida, pero no por ello se considera que los principios sean existentes.

Dentro de este sistema existe por parte de las personas una condición económica y cultural que no se encuentra en condiciones de afrontar los costos, formalismos y la duración excesiva de este proceso y esto conspira contra la propia administración de una justicia rápida y eficiente.

2.2.6. Sistema de Oralidad en los Procesos de Familia

CAPPELLETTI (1972) en su libro “La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil” señala que, a fines del siglo XVIII, la legislación procesal penal surgida de la Revolución Francesa, buscaba la superación del procedimiento inquisitivo, escrito y secreto, por medio de un proceso acusatorio,

predominantemente oral, público, con intermediación entre los sujetos procesales, concentración de los actos del proceso y valoración de la prueba conforme a la íntima convicción. CAPPELLETTI (1972)

Es por ello que las grandes reformas procesales civiles que se inician a partir del siglo XIX también se orientan hacia un proceso en el que predomine el principio de oralidad, con todas sus características.

Conforme lo expresado, el principio de oralidad, bajo cuya orientación se ha llevado a cabo las grandes reformas procesales, no implica sólo el predominio del elemento verbal, sino también el prevalecimiento de los principios de intermediación, concentración, publicidad y libre valoración de la prueba, siendo que el procedimiento por escrito no excluye absolutamente los informes orales. Asimismo, debe consignarse que tampoco el oral, aún llevado a su extremo rigor, no supone la ausencia completa de la escritura.

Así pues, se le denomina procedimiento oral porque en él predominan los informes orales en lugar de los escritos, porque se da más importancia en él a la alegación de viva voz y en pública audiencia, que a las escrituras. Al tratarse del procedimiento escrito en el estricto sentido de la palabra, no puede afirmarse que toda gestión sea puramente escrita. Lo mismo debe decirse respecto del procedimiento oral en los presentes tiempos, donde desde las citaciones para el juicio, hasta la sentencia definitiva que le pone término, se consignan por escrito; también a través de la escritura se hacen constar otras diligencias, se redactan los procesos verbales y las actas de los debates, y deben aparecer también en muchos casos las pruebas.

Es por ello que la oralidad del procedimiento y del juicio no se halla caracterizada por la ausencia total de la escritura, sino por el predominio de la palabra hablada en los dos elementos principales de la contienda judicial, es saber, en las alegaciones de las partes y en las pruebas.

2.2.7. Sistema Mixto en los Procesos de Familia

El proceso de familia se encuentra inmerso dentro del sistema mixto, el cual se ve reflejado y se realiza a través de audiencias, lo que no implica la exclusión de la escritura, ya que existen varios actos procesales, como la demanda, contestación, sentencias, recursos, etc., los cuales deben ser necesariamente escritos. Es por ello, que la oralidad se define como aquella que, por oposición al principio de escritura, surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz, normalmente en audiencias y reduciendo así las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA (2010)

VÁSQUEZ LÓPEZ (2001) en su libro “Formulario Práctico de Familia” expone que: “Algunos actos procesales ganan espontaneidad y rapidez mediante la expresión oral, como la prueba, alegatos, etc., y sobre esta base se ha concebido la oralidad en el proceso de familia, de manera que establece el uso de la palabra hablada en los actos susceptibles de esta forma de expresión y la escritura en los que quieren mayor expresión y permanencia para cumplir mejor la finalidad en el proceso (...)”

Es por ello que, es importante señalar entonces que la oralidad es un mecanismo por medio del cual se establece una forma de comunicación procesal que no es otra que la verbal; y si bien existe la discusión si la oralidad es un principio o un sistema, hay que tener claro que la oralidad es la que vuelve operativos y eficientes todos los demás principios rectores del proceso, siendo sólo la oralidad la que permite la intermediación, pues los sujetos para comunicarse deben estar presentes y analizar en tal forma la prueba; y siendo sólo la oralidad la que permite la publicidad pues estando

presente los sujetos, fluye la información de formas más ágiles y más eficaces, y por lo tanto más económico.

2.2.8. Audiencias Orales

La implementación de la oralidad en el proceso de alimentos implica un cambio profundo en la comprensión de este instituto, específicamente, en la manera en que el proceso debe ser tramitado con el fin de elevar los niveles de eficacia y eficiencia en la impartición de justicia. La forma en que el juzgador se relacionará con las partes, sus argumentos y pruebas cambia por completo respecto a la manera que tal relación se desarrolla con la escritura. La oralidad posibilita un debate inmediato, a través del cual, el juez está habilitado para conocer y valorar de manera directa los argumentos de las partes, así como sus pruebas.

Por lo que, en vista de que la adopción de la oralidad procesal implica mucho más que la mera realización de actuaciones orales, las cuales bien pueden producirse en un esquema escrito, la doctrina considera que para referirse a estos procesos es más exacto el término “proceso por audiencias”.

Esta postura se ve reforzada por la inexactitud del término “proceso oral”, puesto que este no revela la total extensión del concepto, que incluye otros principios procesales y además que en un modelo oral es necesaria la intervención de la escritura.

Concluyendo así, que, el proceso por audiencias es aquel que ha adoptado la oralidad en sentido pleno o, dicho de otro modo, se trata del proceso judicial que ha acogido la oralidad como principio de procedimiento y que, por tanto, sin desprestigiar el auxilio de la escritura cuando sea necesario, realiza su actividad procesal en audiencia de manera oral, siendo verdaderamente lo actuado y no el acta que lo documenta, logrando así la realización de los principios de inmediación, concentración, economía, celeridad y publicidad con miras a un proceso más justo.

2.2.9. Interés Superior del Niño

La Convención de los Derechos del Niño, sienta el principio de que en toda actuación judicial debe velarse por el interés superior del niño, fórmula que opera en causas, “tanto concernientes al derecho de familia como ajenas a dicha materia”, sea que aquel intervenga en calidad de parte procesal o ya sea como simple tercero, más allá de que el mismo pueda verse, no obstante, alcanzado por el referido conflicto.

Es así que, en 1992 se promulgó el Código de los Niños y los Adolescentes que derogó al entonces vigente Código de Menores de 1962. A través de este código se incorporó en nuestra legislación los nuevos conceptos y directrices sustentadas en la nueva doctrina de la protección integral, superando a la anterior de la situación irregular del menor. El 21 de julio de 2000 el Congreso de la República, mediante Ley N° 27337 aprobó el Nuevo Código de los Niños y los Adolescentes en el cual se consagra una vez más el principio del interés superior del niño. Así, en el artículo IX del Título Preliminar se encuentra regulado este principio, cuyo tenor refiere: “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes, del Ministerio Público, Los Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”.

Siendo así, el interés superior del niño, se constituye de tal suerte en una valiosa y esencial herramienta para la resolución de los conflictos judiciales que pudiese comprometer o afectar a las

personas, derechos e intereses de los menores, con una virtualidad y extensión que, a la par de encontrarse en permanente evolución, se vislumbra de una riqueza incommensurable, sin perder de vista su incidencia en nuestro ordenamiento sustantivo.

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS Consejo General del Poder Judicial (2016), CABANELLAS DE TORRES (1972), CABANELAS DE TORRES (2003), BERMUDEZ (1995), UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA (2010)

- **ADOLESCENTE:** Persona que se encuentra en el periodo vital comprendido entre el inicio de la pubertad y el inicio de la edad adulta.
- **AUDIENCIA:** Trámite para aducir razones o valorar pruebas que se ofrece a un interesado en un proceso o en un expediente administrativo.
- **CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO:** Documento, adoptado y abierto a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, donde se estipula acerca de las medidas concernientes a niños, niñas y la preeminencia de su interés superior, del compromiso de asegurar a la persona menor de edad la protección y el cuidado necesario para su bienestar; y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales dispuestas para garantizar sus derechos.
- **NIÑO:** Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad.
- **PRINCIPIO DE CELERIDAD:** Es el principio en virtud el cual el proceso debe gozar de la mayor agilidad de plazos y sencillez en su tramitación, implicando plazos más cortos, preeminencia de actuaciones orales sobre escritas y mecanismos alternativos de solución de conflictos.
- **PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN:** Principio procesal en virtud del cual los actos del juicio deben realizarse con la máxima aproximación posible en el tiempo contribuyendo de esta forma a la más rápida solución del conflicto que motiva el proceso.
- **PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN:** Hace referencia a la comunicación que debe existir entre el juez y las partes del proceso además de los hechos parte del asunto.
- **PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN:** Este principio obra con referencias a los actos de las partes, que son los únicos susceptibles de ineficacia, excluidos, por tanto, los del Juez, pues a este le corresponde fijar, directa o indirectamente, las distintas etapas.

2.4. MARCO REFERENCIAL

2.4.1. ALIMENTOS

2.4.1.1. Definición

Existen diversas definiciones acerca de esta institución, unas conceptuales, otras descriptivas; pero todas ellas apuntan a cubrir un estado de necesidad existente en el acreedor alimentario.

La definición de alimentos en un sentido general, es una institución jurídica, por lo cual determinadas personas tienen el derecho de exigir que otra cubra sus necesidades básicas, en contrario sensu, otras personas tienen la obligación, frente a sus familiares, de cubrir las necesidades básicas de quienes los necesitan.

En sentido más estricto, y recogiendo nuestra realidad, los alimentos resultan ser una pensión dineraria que logra cubrir en todo o en parte, las necesidades básicas de quien lo necesita, estos alimentos comprenden no solo la alimentación sino vestimenta, atenciones de salud, educación en todos sus niveles, recreación, incluso los gastos que se irrojen en la etapa de embarazo.

Asimismo, nuestra legislación establece una definición legal respecto a alimentos, es así que, el art. 472° del Código Civil prescribe: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.

Por otro lado, el art. 92° del Código de los Niños y Adolescentes establece que: “Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.”

Es así que, para nuestra legislación, los alimentos son considerados todo lo indispensable para la manutención, conservación, perpetuación y evolución, ellos constituyen un derecho natural y frente al incumplimiento se ha tratado de superar cualquier dificultad. Es allí donde se solicita que la justicia brinde una respuesta pronta, fijando un monto para atender este derecho fundamental y es el juez el que asume este compromiso, siendo además, preocupante la demora excesiva en la tramitación de los procesos de alimentos. AGUILAR LLANOS (2016)

2.4.1.2. Derecho Alimentario

El derecho alimentario se fundamenta en la relación paterno-filial, indiscutiblemente, se puede hablar, por un lado, del deber de los padres de velar por el bienestar de sus hijos a través del otorgamiento de los alimentos, y, por otro lado, el derecho de los hijos a recibirlos.

El derecho alimentario debe ser tratado como instituto jurídico que comprende un conjunto de normas que garantizan el derecho de subsistencia del menor, que es un derecho fundamental que le corresponde como persona. La importancia del derecho alimentario está en el fin que persigue, el cual consiste en cubrir un estado de necesidad de quien lo solicita, por eso se le llama derecho de urgencia porque sin los alimentos adecuados las personas no podrían sobrevivir.

Según BERMÚDEZ TAPIA (2015) “El derecho alimentario no se agota en los alimentos propiamente dichos, sino que contempla una variedad de beneficios del menor que son

indispensables para su subsistencia, que se protegido por el deber impuesto a los padres de velar por su desarrollo físico e integral”. BERRÍOS RODRÍGUEZ (2018)

Es por ello que, este derecho está reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico mediante normas especiales como a continuación señalaré brevemente.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, reconoce el derecho a la alimentación en el artículo 27°, señalando: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. (...)”

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recoge este derecho en su artículo 1, señalando: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para así y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento (...)”.

Dicha protección brindada por la sociedad internacional está basada en el Principio del Interés Superior del Niño, el cual busca el desarrollo integral del menor debiéndose entender este como lo necesario para su desarrollo, en la alimentación, vestido, salud, recreo entre otros.

De la misma forma, nuestro ordenamiento jurídico reconoce este derecho en el art. 6° de nuestra Constitución al señalar: “(...) Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres (...)”, asimismo, las normas infra – constitucionales peruanas también regulan la figura de alimentos en el art. 472° del Código Civil, el cual se complementa con el art. 92° del Código del Niño y del Adolescente, como ya lo he señalado anteriormente.

En todas estas normas se hace alusión no solo al derecho alimentario que tiene el menor, sino también a la obligación que tienen los padres para con sus hijos, porque esta obligación está basada en la relación paterno filial, la que se deriva del acto natural de la procreación y no de la patria potestad, pues, aunque los padres estén privados de esta, la obligación subsiste. BERRÍOS RODRÍGUEZ (2018)

En síntesis, el derecho de alimentos, es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios, y enfocándonos principalmente en el desarrollo de esta investigación definiríamos al derecho de alimentos como derecho fundamental y personal que protege al menor de edad, niño o adolescente, en cuanto a su alimentación, sea esta entendida desde su amplia definición que abarca además de los alimentos propiamente dichos, a la vestimenta, habitación, salud, educación, recreación y todo lo necesario para sobrevivir adecuadamente.

2.4.1.3. Fuentes de la Obligación Alimentaria

Encontramos como origen de la obligación principalmente el parentesco y el matrimonio; por lo que, se deben alimentos recíprocamente los ascendientes y descendientes, los hermanos y los cónyuges. Esta obligación natural de asistirse y que ha sido llevada al plano de obligación civil, se encuentra establecida en nuestro Código Civil en el art. 474°, por lo tanto, en este caso la fuente de los alimentos se encuentra en la relación familiar y su sustento está en la Constitución Política del Perú, cuando en su art. 6° refiere que es deber de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y a nivel legislativo el Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes que regulan el instituto jurídico de los alimentos; sin embargo, también debemos señalar la existencia de otra fuente distinta a ley, pues como sabemos, la obligación nace de la libre determinación de una persona de otorgar alimentos a otra porque así lo desea, sin que nadie se lo haya impuesto, por lo que podríamos decir que la fuente radica también en la voluntad de la persona de asistir a otra, sin tener obligación alguna, demostrando con ello una solidaridad social para quien lo necesita. AGUILAR LLANOS (2016)

La principal fuente de esta obligación alimentaria la encontramos en la ley, principalmente en el vínculo parental, y por excepción la ley obliga a darse alimentos entre personas extrañas entre sí, es decir, personas que no les une vínculo de parentesco alguno, como es el caso de los concubinos, a los hijos alimentistas. AGUILAR LLANOS (2016)

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar como otra fuente de la obligación alimentaria a la voluntad de determinadas personas, manifestada a través de su testamento, cuando instituyen el legado de los alimentos, tal como lo establece el art. 766° del Código Civil textualmente “El legado de los alimentos, si el testador no determinó su cuantía y forma de pago se cumple, asignando al legatario una pensión que se regirá por lo establecido en las disposiciones de los art. 472° a 487°”; normas que regulan el instituto jurídico de los alimentos. AGUILAR LLANOS (2016)

2.4.1.4. Clasificación de los alimentos

a) Legales: Estos alimentos no sólo son los impuestos por la ley, sino que además son aquellos que se cumplen por mandato contractual o por resolución judicial, los mismos que se basan en vínculo parentales, en la solidaridad humana o en la reciprocidad. Estos alimentos se dividen en congruos y necesarios; los primeros significan conveniente, oportuno y si bien es cierto que nuestro Código Civil expresamente no trata el tema, tácitamente sí se ocupa de ellos, cuando alude a la posición social de la familia, siendo que los alimentos congruos, también llamados vitales, habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo que corresponda a su posición social. Con respecto a los alimentos necesarios, podemos señalar que son los que se dan al alimentado para sustentar la vida, comprendiendo lo preciso para la subsistencia. En la legislación peruana sí encontramos el concepto de alimentos necesarios, reduciéndolos a lo estrictamente necesario para subsistir, cuando el acreedor alimentario se encuentre en estado de necesidad por su propia inmoralidad (art. 473° segundo párrafo del Código Civil⁴) o cuando ha incurrido en causal de indignación o desheredación (art. 485° del Código Civil⁵). Cabe señalar que los alimentos necesarios se aplican sólo para los acreedores mayores de edad, y que no se extiende cuando quien pide alimentos es un ascendiente respecto de su descendiente. AGUILAR LLANOS (2016)

⁴ Art. 473° del CC.: Alimentos al mayor de dieciocho años: “(...) Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, sólo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir.”

⁵ Art. 485° del CC.: Alimentista indigno: “El alimentista que sea indigno de suceder o que pueda ser desheredado por el deudor de los alimentos, no puede exigir sino lo estrictamente necesario para subsistir.”

b) Voluntarios: Los alimentos surgen por propia iniciativa y deseo de una persona de atender las necesidades de otra, con quien no está obligado; siendo un acto libre y voluntario donde se compromete a alimentarla. AGUILAR LLANOS (2016)

2.4.1.5. Naturaleza Jurídica

Al tratar de ubicar al derecho y la obligación alimentaria como patrimonial o personal encontramos que la doctrina está dividida; algunos consideran que tiene un carácter patrimonial en tanto que los alimentos se materializan en dinero o especies con valor económico, se concretiza en algo material; sin embargo, esto se contradice con las características de irrenunciabilidad y no transferencia de los alimentos, pues si fuera patrimonial se podría transferir o renunciar al derecho.

Otra parte de la doctrina señala que es un derecho personalísimo, pues nace con la persona y se extingue con ella, de allí su carácter de intransmisible e irrenunciable; sin embargo, esta teoría también se objeta por cuanto los alimentos como derecho personal, sí tienen una valoración económica y una concreción económica, lo que no sucede con los derechos típicamente personales.

Por otro lado, la teoría mixta recogida en el Perú por CORNEJO CHÁVEZ, señala que el derecho alimentario es un derecho que tiene contenido económico por lo que tiene rasgos del derecho patrimonial porque las personas involucradas en esta relación no comprenden a toda la sociedad sino a algunas cuantas; pero al ubicarse los alimentos dentro del ámbito familiar, tiene características propias del derecho personal. AGUILAR LLANOS (2016)

En conclusión, podemos decir, que el derecho alimentario tiene una naturaleza mixta, pues es un derecho personal – patrimonial que nace con la persona, que es su titular, y se extingue cuando esta muere; además, a pesar de que es un derecho patrimonial, no es un derecho patrimonial real, pues no goza de la característica de ser *erga omnes* (frente a todos) sino que es obligacional porque sólo involucra al acreedor y al deudor y no a toda la sociedad.

2.4.1.6. Características

Los alimentos tienen una doble connotación, tanto como derecho y obligación, por consiguiente, sus características atenderán al derecho alimentario y a la obligación alimentaria.

En el derecho alimentario tenemos las siguientes características:

a) Es personal, pues nace y se extingue con la persona, es inherente a ella, por lo tanto, sólo el alimentario tiene derecho a disfrutarlos. La obligación alimentaria es personal por cuanto es asignada a una persona determinada en virtud de un vínculo jurídico que tiene con el acreedor o alimentista con el objetivo de proveerle los elementos necesarios para su supervivencia.

b) Es intransferible, pues este derecho no puede cederse, ni transmitirse, ni intervivos ni mortis causa. Acompaña a la persona en tanto se encuentre en estado de necesidad; sin embargo, esta persona no puede considerarlo como un activo de su patrimonio del cual puede desprenderse, en tanto que es de ella y de nadie más. AGUILAR LLANOS (2016)

c) Es irrenunciable, pues teniendo en cuenta que el Estado protege la vida humana, y siendo que, los alimentos contribuyen a la supervivencia, no puede renunciarse a este derecho, salvo que la persona titular de este derecho no se encuentre en estado de necesidad. Se puede renunciar al derecho

de ser alimentado; sin embargo, la obligación de alimentar pertenece al orden público, razón por la cual está prohibida su renuncia.

d) Es imprescriptible, teniendo en cuenta que los alimentos sirven para supervivencia cuando hay un estado de necesidad, mientras subsista este estado de necesidad, estará activado o vigente el derecho para accionar por ello. El derecho a reclamar alimentos es imprescriptible en razón de que la obligación alimentaria se renueva día a día en la medida en que nacen diariamente la necesidad del alimentario.

e) Es intransigible, porque el derecho a los alimentos no puede ser objeto de transacciones, y ello responde al destino final de los alimentos que es conservar la vida; sin embargo, esto no quiere decir que el monto o porcentaje de los alimentos pueda ser objeto de transacción, esta transacción puede hacerse por acuerdo de las partes con documento con firma legalizada que elevan al juez para su aprobación, o en los centros de conciliación, cuando interviniendo el conciliador, ambas partes se ponen de acuerdo sobre el monto o porcentaje de los ingresos del obligado destinados a cubrir la prestación alimentaria. AGUILAR LLANOS (2016)

f) Es inembargable, ya que el derecho como tal resulta inembargable; sin embargo, esta característica esta direccionada a indicar que la pensión por alimentos es inembargable, pues así se encuentra establecido por mandato expreso en la ley.⁶

g) Es recíproco, porque teniendo en cuenta que los alimentos se prestan entre parientes y/o cónyuges, en determinadas oportunidades una persona puede resultar siendo acreedor alimentario, y luego deudor alimentario.

h) Es revisable, ya que la pensión por alimentos que se pueda fijar en un determinado año, con el transcurrir del tiempo, puede ser objeto de aumento o reducción conforme lo establecido en la ley.⁷

En cuanto a la obligación alimentaria, tenemos las siguientes características:

a) Es intransferible, porque la obligación que tiene una determinada persona a prestar alimentos no puede otorgársela a otra, es personal, y sólo se extingue con él.

b) Es divisible, ya que de haber dos o más obligados alimentarios, y con el fin de cubrir las necesidades básicas del alimentario, el pago de la pensión por alimentos puede ser dividida para que entre todos los deudores alimentarios cubran el pago de dicha pensión conforme lo establecido en la ley.⁸

2.4.1.7. Condiciones para ejercer el derecho alimentario

Los presupuestos básicos o condiciones para ejercer el derecho alimentario son tres: estado de necesidad en quien lo solicita, posibilidad económica del deudor u obligado alimentario, y una norma legal que establezca esta obligación. A continuación, se ha realizado un análisis de cada una de ellas:

⁶ Art. 648° del CPC.: Bienes inembargables: “(...) 3. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia. (...)”

⁷ Art. 482° del CC.: Reajuste de la pensión alimenticia: “La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. (...)”

⁸ Art. 477° del CC.: Prorrato de la pensión alimenticia: “Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. (...)”

a) Estado de necesidad del acreedor alimentario. -

Desde la antigüedad existía la obligación de alimentar a los necesitados, tal y como lo ocurrido en Roma; y progresivamente fueron apareciendo normas de protección que imponían la obligación de los padres de proveer al sustento de sus hijos que se encontraban en estado de necesidad frente a padres con suficientes medios económicos, estableciéndose como premisas fundamentales de la prestación alimentaria el estado de necesidad del solicitante frente a la capacidad económica del demandado. Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" (2007)

La persona que solicita alimentos no debe encontrarse en posibilidades de atender sus necesidades con sus propios recursos pues carece de ellos, lo que significa que el necesitado carece de ingresos derivados de cualquier fuente; esto nos lleva a analizar la situación de los diversos acreedores, pues no todos están en la misma situación; por ejemplo, si se trata de un acreedor alimentario menor de edad, por razones de orden natural, se presume su estado de necesidad, en este caso al acreedor solo le bastará acreditar la relación de parentesco exigida por ley, para gozar del derecho sin necesidad que demuestre pobreza; pero si se trata de un acreedor mayor de edad, aquí no se presume nada, sino que el actor tiene que demostrar que no tiene recursos para atender sus necesidades, y ello puede ser carecer de un trabajo que le posibilite ingresos, por la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo por razones de salud.

b) Posibilidad económica del que debe prestarlo. -

Se refiere al deudor de los alimentos; pero aquí también intervienen una serie de elementos que califican o no esta posibilidad económica; en primer lugar, no debemos entender posibilidad económica como la situación económica inmejorable, abundante, e incluso que le permite gastos superfluos, pues si ello fuera así, creemos que la mayoría de la población peruana no se encontraría en situación de atender los alimentos de otra persona.

Debe tenerse en consideración sus ingresos y porque no, también la posibilidad de obtener mayores ingresos. Debe considerarse todos los ingresos independientemente de la fuente que los origina. También debe considerarse el capital que pueda tener pues ello igualmente es una posibilidad real de obtener recursos.

Para calificar al deudor alimentario también debe tenerse en cuenta las propias necesidades de éste, pues ello disminuiría sus posibilidades, y así deberá considerarse su estado de salud, las cargas familiares que tiene.

En nuestro país, donde predomina la informalidad, y con un sub-empleo cada vez más creciente, resulta difícil acreditar verosímilmente los ingresos de los demandados trabajadores independientes; en tal mérito, considero acertada la norma mencionada que señala “no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar los alimentos”, bastándole al Juez para declarar el derecho y fijar la pensión, otras pruebas indiciarias que le permitirán apreciar razonadamente la necesidad del acreedor y la urgencia de atender estas necesidades. AGUILAR LLANOS (2016)

c) Norma legal que señala la obligación alimentaria. -

Recordemos que se trata de obligaciones civiles y por lo tanto, debe estar claramente establecido, quienes son los acreedores alimentarios y quienes son los deudores, en este sentido, es clara la norma contenida en el art. 474° del Código Civil, pero ella no agota todas las posibilidades, como a continuación señalaré:

Los alimentos entre ascendientes y descendientes es ilimitado, y entre los hermanos, cubren no solo a los hermanos de padre y madre, sino también a los medios hermanos aquellos que solo son de padre o solo de madre; ahora bien, esta relación de acreedores y deudores alimentarios debe ser considerado a la luz de los mayores de edad en estado de necesidad, teniendo como deudores a los que fija el Código Civil, esto es, al cónyuge, al abuelo respecto de su nieto, al padre respecto de su hijo, y por cierto al hermano necesitado que se los pide al otro hermano. AGUILAR LLANOS (2016)

Otros casos de obligados a dar alimentos, encontramos en el art. 414° del Código Civil, los alimentos de la madre extramatrimonial; los alimentos de quienes hayan vivido a costas del causante art. 870° del Código Civil⁹; el cónyuge del ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes de él, art. 58° del Código Civil.¹⁰; la madre del concebido, cuyos derechos no se parten hasta su nacimiento, entre tanto la madre tiene derecho de alimentos, cuyo costo será cargado a la masa hereditaria, art. 856° del Código Civil. En estos supuestos, en algunos casos, estaremos ante alimentos entre extraños, en tanto que no existe un vínculo jurídico que una al acreedor con el deudor, y en otros casos los alimentos se tomarán del patrimonio del ausente, o de la masa hereditaria.

Habiéndose demostrado el estado de necesidad del acreedor o la incapacidad física o mental del acreedor mayor de edad, y, por otro lado, la existencia del deudor de los alimentos establecido por la ley y su posibilidad económica; ahora bien, resulta pertinente detallar las diversas circunstancias en las que se encuentran los diversos acreedores alimentarios, así como los deudores, por ello pasaré a analizar a cada uno de estos sujetos del Derecho Alimentario.

2.4.1.8. Sujetos de la relación alimentaria

- Alimentos entre cónyuges:

Entre los cónyuges no hay relación de parentesco, sin embargo, los alimentos debidos entre ellos existen en razón al principio de solidaridad, ayuda y socorro que surgen por el matrimonio.

El art. 288° del Código Civil¹¹ refiere que los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, y es precisamente este deber de asistencia el que informa el derecho alimentario, que luego es reconocido expresamente en el art. 474° del mismo cuerpo legal. El deber de asistencia implica ayuda recíproca, cooperación, deberes importantes no solo en el plano moral, espiritual, sino también en el plano material, y es que aquí donde se ubica el derecho de alimentos. La obligación es recíproca, no existiendo prioridad o preferencia del derecho y obligación respecto de uno de los cónyuges, pues tanto los debe el marido como la mujer, y tanto tiene derecho la mujer como el marido. AGUILAR LLANOS (2016)

Este deber de asistencia, que no es otra cosa que un mutuo auxilio, se traduce en la ayuda constante que deben otorgarse los casados en todos los órdenes de la existencia y en lo que toca particularmente a los alimentos, significa proveer al otro de todo lo que necesite para vivir según sus posibilidades. AGUILAR LLANOS (2016)

⁹ Art. 870° del CC.: Extensión de beneficios: “Las personas que hayan vivido en la casa del causante o alimentado por cuenta de éste, pueden exigir al albacea o a los herederos que continúen la atención de estos beneficios con cargo a la masa hereditaria, durante tres meses.”

¹⁰ Art. 58° del CC.: Alimentos para herederos forzosos del ausente: “El cónyuge ausente u otros herederos forzosos económicamente dependientes de él, que no recibieren rentas suficientes para atender a sus necesidades alimentarias, pueden solicitar al juez la asignación de una pensión, cuyo monto será señalado según la condición económica de los solicitantes y la cuantía del patrimonio afectado. Esta pretensión se tramita conforme al proceso sumarísimo de alimentos, en lo que resulte aplicable.”

¹¹ Art. 288° del CC.: Deberes recíprocos de los cónyuges: “Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia”

- Alimentos de los hijos y otros descendientes:

El art. 6° de nuestra Constitución como ya se ha señalado anteriormente, establece que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, precisando que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos; encontrando en estos preceptos constitucionales la base jurídica del derecho alimentario de los hijos; sin embargo, si bien es cierto que todos los hijos son iguales, no todos están en la misma situación familiar, lo que condicionaría la forma de la prestación alimentaria, por lo que es importante tratar de cada uno de ellos:

i) Hijos matrimoniales. -

Como se señaló en líneas anteriores, constitucionalmente está reconocido el derecho de los hijos de ser asistidos por sus padres, y la obligación conjunta de los padres por velar por el buen desarrollo de sus hijos. Asimismo, existen normas que regulan el derecho alimentario de los hijos matrimoniales como lo establecido en los art. 287° y 316° del Código Civil¹², refiriendo como uno de los fines del matrimonio, el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos.

ii) Hijos extramatrimoniales. -

Los hijos extramatrimoniales, como su nombre lo indica, son aquellos que nacen de una unión no matrimonial, cuya filiación es ilegítima, es decir, existen casos donde los padres no están casados por la existencia de algún impedimento, ya sea por un matrimonio subsistente de alguno de ellos o por relación de parentesco entre estos, pero también se puede dar el caso que la pareja simplemente no se quiera casar.

iii) Hijos putativos. -

La palabra putativo proviene en su etimología del latín “*putativus*”, y a su vez del verbo “*putare*” que significa considerar, suponer, creer. Por lo que, se llaman hijos putativos a aquellos que, sin serlo, son tenidos por tales. Un hijo putativo no es hijo biológico de uno de los cónyuges o convivientes pero que es considerado como tal.

El matrimonio putativo es aquel que se celebró válidamente y que fue disuelto por divorcio, pues este se contrajo de buena fe, pensando que no existía ningún impedimento cuando en realidad sí existía, por lo que dicha invalidez produce efectos no solo respecto a los cónyuges si no también respecto a los hijos, en este caso en el régimen alimentario de los hijos.

En estos casos, si se comprueba que hubo mala fe por uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos a su favor, pero si a favor del otro y de sus hijos, pues será quien asuma la obligación alimentaria de los hijos. AGUILAR LLANOS (2016)

iv) Hijos adoptivos. -

Los hijos adoptivos son aquellos que sin ser hijos biológicamente de uno o de los dos padres, es su hijo legal a través de la adopción; es así que, una vez realizada la adopción, nace la relación paterno filial entre el padre adoptante y el hijo adoptivo, lo cual significa que deja de pertenecer a su

¹² Art. 287° del CC.: Obligaciones comunes frente a los hijos: “Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos.”
Art. 316° del CC.: Cargas de la sociedad conyugal: “Son de cargo de la sociedad conyugal: 1. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes. (...)”

familia consanguínea; ello implica que en cuanto a los alimentos, estos sean debidos por el padre adoptante, y no por el padre natural, quien legalmente deja de serlo; ni aun en el caso de que el padre adoptante muera, renacerá esta obligación alimentaria. Cabe señalar como una excepción para obligar al padre biológico a otorgar alimentos a su hijo adoptado, cuando habiendo muerto el adoptante y no existiendo familiares del adoptante que puedan asumir esta obligación continúa obligado a alimentar a su hijo natural, conforme lo establecido en el art. 94° del Código de los Niños y Adolescentes¹³.

v) Hijo extra matrimonial puramente alimentista. -

Nuestra legislación familiar, señala que el hijo asume esta condición a través del reconocimiento o la declaración judicial de paternidad o maternidad, si ninguna de las dos posibilidades se ha dado, entonces legalmente no hay hijo, aun cuando sabemos que natural y biológicamente el hijo si existe y si tiene padre o madre. Si no hubiera reconocimiento, cabe la posibilidad de investigar judicialmente la paternidad o maternidad, y si ello no es posible pero la madre puede acreditar trato sexual con un varón en la época de la concepción, producto de lo cual ha engendrado un hijo, entonces tiene derecho a accionar por alimentos a favor de su hijo, a aquel varón con el que tuvo relaciones sexuales.

Los alimentos de este hijo extramatrimonial se extienden hasta los 18 años y solo en forma excepcional se prolongan más allá de los 18 años cuando se encuentra incapacitado física o mentalmente; a este extramatrimonial puramente alimentista no le es de aplicación lo dispuesto en el art. 424 del Código Civil por no tratarse legalmente de un hijo.

En síntesis, el hijo extramatrimonial puramente alimentista, con respecto a sus alimentos, cubren lo necesario para su sustento, vestido, habitación, asistencia médica, y si es menor de edad (mayoría de los casos) su instrucción, educación, recreo, entre otros.

2.4.2. PROCESO DE ALIMENTOS

Nuestro ordenamiento jurídico regula dos clases de procesos de alimentos, uno que es propio de los adultos y de los simples alimentistas que se tramita por vía de proceso sumarísimo del Código Procesal Civil; y otro que es exclusivo de los niños y adolescentes que se tramita en vía de proceso único del Código de los Niños y Adolescentes.

El instrumento jurídico rector del proceso de alimentos es el Interés Superior del Niño, que viene a hacer la base de toda decisión judicial sobre temas donde está en peligro el desarrollo integral de un menor. Por tal motivo, es que este proceso se ventila en la vía del proceso único.

Como características del proceso de alimentos podemos señalar:

- Gratuidad: la demandante está exonerada del pago de todas las tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte Unidades de Referencia Procesal.
- Coercibilidad: el Juez puede prohibir al demandado ausentarse del país, mientras no esté garantizado debidamente el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria.

¹³ Art. 94° del CNA.: “La obligación alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la Patria Potestad.”

- Anticipatoriedad: según el art. 566 del Código Procesal Civil, la pensión de alimentos que fije una sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se debe ejecutar, aunque exista apelación.
- Proteccionismo: tiene como fin la protección integral del menor, en cuanto a su desarrollo y bienestar.

2.4.2.1. Proceso de alimentos en el Código Procesal Civil

El proceso de alimentos se tramita en vía de proceso sumarísimo, proceso que como su denominación lo indica, es aquel proceso de duración muy corta donde tiene lugar ciertas limitaciones que se traducen en la restricción de determinados actos procesales, lo cual está orientado, precisamente, a abreviar lo más posible el trámite del mencionado proceso, a fin de lograr una pronta solución al conflicto de intereses de que se trate.

El proceso sumarísimo tiene como finalidad la reducción de los plazos procesales y la concentración de las audiencias correspondientes en una sola, denominada audiencia única, dentro de la cual, inclusive, se produce la expedición de la sentencia (salvo que, excepcionalmente, el Juez reserve su decisión para un momento posterior).

En vía del proceso sumarísimo se ventilan, por lo general, las controversias que no revisten mayor complejidad o en las que sea urgente la tutela jurisdiccional, comprendiéndose, además, aquellas en las que la estimación patrimonial o cuantía sea mínima, como es el caso de los procesos de alimentos, para lo cual son competentes los Jueces de Paz Letrado. HINOSTROZA MINGUEZ (2012)

El trámite general del proceso sumarísimo es el siguiente: JARA & GALLEGOS (2014)

- Presentada la demanda, el Juez puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia, con arreglo a lo dispuesto en los art. 426° y 427° del Código Procesal Civil (que establecen los supuestos en los que el Juez puede declarar la inadmisibilidad o improcedencia de la demanda).
- Si el Juez declara inadmisibile la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es inimpugnable. Si el Juez declara improcedente la demanda, ordenará la devolución de los anexos presentados.
- Al admitir la demanda, el Juez concederá al demandado cinco días para que la conteste.
- Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, el Juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la que deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes de contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerla, bajo responsabilidad. Cabe indicar que, según el art. 557° del Código Procesal Civil, dicha audiencia única se regula supletoriamente por lo dispuesto en tal Código para la audiencia de pruebas. (art.202° al 211° del C.P.C).
- Al iniciar la audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas previas (las mismas que, se interponen al contestarse la demanda, permitiéndose solamente los medios de prueba de actuación inmediata), el Juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas.

- Concluida la actuación de los medios probatorios pertinentes a las excepciones o defensas previas que se hubieren deducido, si encuentra infundadas aquéllas, el Juez declarará saneado el proceso y, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba.

- A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato.

- Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el Juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten.

- Después de haber hecho uso de la palabra los abogados de las partes, el Juez expedirá sentencia. Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no excederá de 10 días contados desde la conclusión de la audiencia.

- La sentencia es apelable con efecto suspensivo, dentro del tercer día de notificada, ocurriendo lo propio con la resolución que declara fundada una excepción o defensa previa. Las demás resoluciones son sólo apelables durante la audiencia, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferidas.

En el proceso sumarísimo resultan improcedentes: La reconvenición, los informes sobre hechos, el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia y las disposiciones contenidas en los art. 428° (modificación y ampliación de la demanda), 429° (medios probatorios extemporáneos) y 440° (hechos no invocados en la demanda) del Código Procesal Civil.

Acerca de la competencia para conocer del proceso de alimentos, el art. 560° del Código Procesal Civil prescribe que corresponde el conocimiento del proceso de alimentos al Juez de Paz Letrado del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste, precisando que el Juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento a la competencia por razón de territorio.

El art. 565° del CPC ordena acompañar un anexo especial al escrito de contestación de demanda que se presente en el proceso de alimentos. Así, tenemos que el Juez no admitirá la contestación de la demanda de alimentos si el demandado no acompaña la última declaración jurada presentada para la aplicación de su impuesto a la renta o el documento que legalmente la sustituye. Si no estuviera el demandado obligado a efectuar la mencionada declaración, deberá adjuntar a su escrito de contestación una certificación jurada de sus ingresos con firma legalizada. El mencionado anexo especial, a ser aportado por el sujeto pasivo de la relación procesal, tiene por finalidad tratar de determinar el nivel de ingresos de aquél, que constituye uno de los factores a tener en cuenta para la fijación de la correspondiente pensión alimenticia, siempre que sea estimatoria la sentencia que se expida; y en caso el Juez compruebe la falsedad del anexo especial, remitir a al Ministerio Público copia certificada de los actuados pertinentes para el ejercicio de la acción penal correspondiente. HINOSTROZA MINGUEZ (2012)

Asimismo, es importante señalar que, el Juez podrá solicitar el informe del centro de trabajo del demandado para que remita información sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste.

2.4.2.2. Proceso de alimentos en el Código de los Niños y Adolescentes

a) El Proceso Único

El proceso único fue incorporado en el nuevo Código de los Niños y Adolescente mediante el Decreto Ley N° 26102, como instrumento de solución de conflictos que derivan de las instituciones familiares como los alimentos y todas aquellas contenidas en el libro segundo del Código de los Niños y Adolescentes, cuya creación se fundamenta en los principios del interés superior del niño, opinión del niño y proceso como problema humano de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. BERRÍOS RODRÍGUEZ (2018)

La finalidad del legislador ha sido eliminar aquella regulación de las instituciones procesales en función de cada institución sustantiva a proteger; tomándose como único antecedente al proceso sumarísimo del Código Procesal Civil, del que ya hemos hablado anteriormente. BERRÍOS RODRÍGUEZ (2018)

La doctrina afirma que el proceso único como todo proceso, protege tanto el interés individual como el interés social de las partes de un proceso. Entonces, el proceso único constituye una herramienta idónea para defender los derechos del niño y/o adolescente, basado fundamentalmente en el interés superior del niño, siendo su principal objetivo garantizar el desarrollo integral del menor.

Como las características más resaltantes del proceso único tenemos: a) mayor rapidez y celeridad procesal, b) Mayor intermediación y c) La introducción del principio de oralidad, reflejado en la audiencia única.

Por lo tanto, podemos señalar que el proceso único no sólo se rige por las normas establecidas en el Código de los Niños y Adolescente, sino que supletoriamente se aplican las normas del Código Procesal Civil.

b) Audiencia Única

Una vez contestada la demanda o vencido el plazo para ello, el Juez del proceso procederá a fijar día y hora para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia (entiéndase audiencia única), la cual se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes de contestada la demanda o de transcurrido el plazo para hacerlo, bajo responsabilidad.

Como bien lo explica HINOSTROZA MINGUEZ (2012), al iniciar la audiencia única, y en caso de haberse planteado excepciones procesales o defensas previas, el Juez ordenará a la demandante que absuelva tales excepciones o defensas previas, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. No se admitirá reconvencción.

Una vez que se hayan actuado los medios probatorios referidos a las excepciones o defensas previas propuestas, si el Juez considera infundadas dichas excepciones o defensas previas declarará saneado el proceso (la existencia de una relación jurídica procesal válida) y seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o adolescente conciliatoriamente. Si hay conciliación y ésta no lesiona los intereses del niño o de los adolescentes, se dejará constancia en actas. Ésta tendrá el mismo efecto de sentencia.

En caso de no llegar a ningún acuerdo conciliatorio, se continúa con la audiencia, procediendo a fijar los puntos controvertidos y a determinar los que van a ser objeto de prueba.

A continuación, el Juez rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias (tachas u oposiciones) que se susciten, resolviendo tales cuestiones probatorias de inmediato.

Habiendo hecho uso de la palabra los abogados de las partes, el Juez procederá a expedir la respectiva sentencia dentro de la audiencia única. No obstante, aquél tiene la potestad de reservar su fallo para otra oportunidad (dentro de los días de concluida la audiencia única).

2.4.2.3. Modalidades de procesos de alimentos

El proceso de alimentos no solo admite la acción de alimentos, sino todas las acciones que de ella derivan: el aumento, reducción, cambio de la forma de prestarlos, exoneración, prorratio y extinción de la obligación alimentaria, que se relacionan con la característica de dinamicidad del proceso de alimentos.

a) Reajuste de la pensión alimenticia

La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones, conforme lo establece el art. 482° del Código Civil.

b) Prorratio

Conforme lo establece el art. 477° del Código Civil: “Cuando sean dos o más los obligados a dar los alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno solo a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repetir de los demás la parte que les corresponda.”

Asimismo, conforme a lo estipulado en el art. 95° del Código de los Niños y Adolescentes, la obligación alimentaria puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del Juez, aquellos se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma individual. En este caso, los obligados pueden acordar el prorratio mediante conciliación convocada por el responsable. Esta será puesta en conocimiento del juez para su aprobación. La acción de prorratio también puede ser iniciada por los acreedores alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte inejecutable.

c) Exoneración de la obligación alimentaria

La Exoneración se produce siempre a petición del obligado en los siguientes casos:

- Cuando los ingresos económicos del obligado disminuyen de modo que no pueda cumplir con la obligación de alimentos sin poner en peligro su propia subsistencia, para ello, el obligado deberá acreditar debidamente dicha disminución.

- Cuando cesa el estado de necesidad efectiva o presunta en el alimentista, pues se sabe que los alimentos se otorgan al alimentista teniendo en cuenta su estado de necesidad, el cual se presume cuando se trata de menores de edad y se pierde cuando éste cumple la mayoría de edad, lo cual deberá ser acreditado.

- En el caso del hijo extramatrimonial no reconocido, ni declarado judicialmente y que perciba una pensión alimenticia, la que seguirá vigente hasta que el menor cumpla la mayoría de edad o hasta que el obligado pruebe que no es el padre del menor; existe una excepción a la norma que tiene que ver con el estado de necesidad del alimentista, pues si el menor ha llegado a la mayoría de edad y no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental, seguirá vigente la pensión de alimentos. BERRÍOS RODRÍGUEZ (2018)

d) Extinción de la obligación alimenticia

GRAU sostiene que “La deuda alimenticia cesa con la muerte del obligado a prestar alimentos, con la muerte del alimentista, con el cambio en los medios de fortuna del alimentista o del alimentante, cuando el alimentista está necesitado a causa de su mala conducta o falta de aplicación al trabajo y cuando incurre en alguna de las causas que dan lugar a la desheredación”. JARA & GALLEGOS (2014)

Asimismo, Baqueiro Rojas y Buenrostro Báez citado en Jara & Gallegos (2014) señalan que la obligación alimentaria cesa por:

- Dejar de necesitarlos el acreedor
- Injuria, falta o daños graves inferidos por el acreedor a quien debe proporcionárselos.
- Que la necesidad de los mismos dependa de la conducta viciosa o falta de dedicación al trabajo por parte del acreedor alimentista.
- Que el acreedor abandone, sin causa justificada, el hogar al cual ha sido incorporado.
- Que el menor deje de serlo al llegar a la mayoría de edad, y los obligados a alimentarlo sean los hermanos o parientes colaterales.

Debe señalarse que si desaparecen las causas por las que haya cesado la obligación alimentaria, ésta puede restablecerse. Así ocurre si el deudor adquiere bienes o el acreedor pierde los que tenía y vuelve a tener necesidad de los alimentos, o bien cuando cesa la conducta viciosa y persiste la necesidad. Lo contrario sucede cuando la causa es la injuria o el abandono del hogar en el que ha sido acogido el acreedor alimentista.

2.4.3. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE FAMILIA

El derecho de familia en su tramitación cuenta con principios sustanciales y además principios comunes al derecho procesal, y que concurren para darle una particular fisionomía, no tanto por las formas que lo revisten, como por la intensidad, la extensión y la generalización con que aparecen reunidos y aplicados, todo lo cual contribuye a conformar un proceso singular que goza, además, de una incipiente autonomía legislativa.

a) Principios Sustanciales

- Principio *Iura Novit Curia*

El art. VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, concordante con el art. VII del Título Preliminar del Código Civil (que dispone que los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda), versa sobre el principio o aforismo <<*Iura Novit Curia*>>, según el cual el juzgador está obligado a aplicar el derecho que corresponda a la materia controvertida o a la situación ventilada en juicio, aun en los casos en que no haya sido alegado por los sujetos procesales o lo haya sido, pero en forma equivocada.

PEYRANO dice del aludido principio que: <<Se traduce en la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan el caso. Libertad que subsiste aun en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones>>. HINOSTROSA MINGUEZ (2012)

- Principio de Tutela Judicial Efectiva

Este principio se traduce en el derecho subjetivo de acudir libremente al sistema jurisdiccional en satisfacción de las pretensiones y a ejercer en el mismo, todos sus derechos y obtener una resolución motivada de los órganos jurisdiccionales. ESPINOZA GARCÍA (2008)

Conforme lo señala CARRIÓN LUGO, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es inherente a toda persona por el solo hecho de serlo. Constituye la manifestación concreta de por qué la función jurisdiccional es, además de un poder, un deber del Estado, en tanto no puede excusarse de conocer tutela jurídica a todo el que se lo solicite. HINOSTROSA MINGUEZ (2012)

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el inciso tercero del art. 139° de la Constitución Política y art. I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y cuya cualidad de “efectividad” se desprende de su interpretación, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos, como es el caso del art. 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es un atributo subjetivo que responde a la necesidad de que el proceso cumpla realmente con sus fines a los que está llamado a cumplir, en la medida que el proceso supone el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.

Cabe señalar, que la tutela judicial efectiva no resulta vulnerada por rechazar una demanda ante la no subsanación de observaciones subsanables. No implica un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional, sino que requiere el cumplimiento de requisitos previos e indispensables a través de las vías procesales legalmente establecidas. Ello tampoco podría llevar a hablar de indefensión, cuando el recurrente ha tenido abiertas todas las instancias y recursos para hacer valer sus derechos; sin embargo, este derecho solo podría ser limitado en virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que suponga incompatibilidad con el mismo. LEDESMA NARVÁEZ (2008)

En este supuesto, es necesario la concurrencia de una causa legalmente establecida, conjuntamente con la imposibilidad de realizar una interpretación favorable al ejercicio del derecho de acceso, para poder denegar el mismo, sin vulnerar por ello el derecho a la tutela judicial efectiva.

- Principio del Debido Proceso LEDESMA NARVÁEZ (2008)

El debido proceso es apreciado como principio general del derecho, como garantía constitucional y como derecho fundamental. Para quienes sostienen que es un principio general, señalan que el proceso justo inspira todo el ordenamiento jurídico – político y no requiere de un reconocimiento positivo para que pueda producir sus efectos; sin embargo, para el sector que califica como derecho fundamental le atribuye no solo funciones propias de un principio general sino que trasciende, a valores superiores que provienen de la dignidad del ser humano y del logro de una sociedad justa y libre; además tampoco requiere de una norma positiva para existir. Los que conciben como garantía le atribuyen una función instrumental o garantizadora de los derechos fundamentales y del ordenamiento jurídico político en su conjunto, sin embargo, integran el derecho fundamental de justicia a través del proceso que tradicionalmente es catalogado como derechos fundamentales de la persona.

En tal sentido, HOYOS, califica al debido proceso no solo como derecho fundamental, sino que además cumple una función de garantía de los demás derechos fundamentales y del ordenamiento en su conjunto, atribuyéndole la calificación de un derecho fundamental de carácter instrumental.

- Principio del Interés Superior del Niño

Este principio es una pauta que debe observarse para proteger los derechos fundamentales de la persona, pues busca garantizar el respeto de los derechos de los niños y adolescentes, siendo la guía indiscutible en la toma de cualquier decisión, especialmente en los procesos de alimentos, por lo que, a continuación, detallaré todo lo que engloba este principio, partiendo de sus antecedentes.

i. Antecedentes

El 20 de noviembre de 1989 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, el primer código universal, legalmente obligatorio, que contiene normas que entregan orientaciones éticas, valóricas y operativas destinadas a la protección y cuidados necesarios para lograr el bienestar de los niños. Su obligatoriedad radica en la aceptación que cada Estado Parte hace de las estipulaciones de la Convención y en la obligación asumida de informar periódicamente a un comité de los derechos del niño acerca de sus avances en estas materias.

El sujeto de la Convención es el niño y su objeto es que los niños sean sujetos plenos de derechos, conscientes y activos también en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. La Convención, en su artículo 1°, define al niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

En cuanto a la situación y tratamiento del niño que está por nacer, la Convención no se inclinó por una postura determinada, sea esta considerarlo niño desde la concepción, o bien, desde el momento del nacimiento, dejándolo a criterio de las legislaciones internas de cada Estado Parte.

La Convención destaca que los menores deben desarrollarse en un ambiente familiar que los proteja, oriente, guíe y conduzca a su pleno desarrollo, reconociéndolo el derecho del niño, a vivir con su padre y madre, a menos que la separación sea necesaria para el interés superior del niño, siendo deber del Estado garantizar su cumplimiento y, si fuere procedente, el del régimen de visitas correspondientes. BAEZA CONCHA (2001)

ii. Definición

Gramaticalmente, el Interés Superior del Niño se define, según el Diccionario de la Real Academia Española, en virtud de los tres conceptos que abarca:

- Interés: es la conveniencia o necesidad de carácter colectivo en el orden material o moral. Inclínación más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, persona, etc.;
- Superior: es aquello que está más alto y en un lugar preeminente respecto de otra cosa;
- Niño: que tiene pocos años, que tiene poca experiencia.

Al analizar el sentido gramatical que tiene la expresión referida, constatamos su intención de proteger al menor de edad, esto es, que frente a situaciones adversas en las que este se vea involucrado, cualquiera sea su naturaleza, se deben tomar en primer lugar todas las medidas necesarias y pertinentes, basadas en su bienestar. Es primordial otorgarle el conjunto de elementos necesarios para su buen vivir, lo cual incluye toda clase de beneficios, cuidados y asistencia para que posteriormente pueda asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. De ahí que la Convención impone al Estado el deber de asegurarle al niño una adecuada protección y cuidado, cuando el padre, la madre o la persona responsable de él ante la ley, no tengan capacidad para hacerlo. BAEZA CONCHA (2001)

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior tiene un concepto triple:

- Derecho sustantivo. Al ser la consideración primordial, se deberá evaluar y tener en cuenta al valorar distintos intereses, para tomar una decisión sobre una cuestión debatida que afecte a una niña o niño, o a un grupo de ellos.
- Principio Jurídico interpretativo. Cuando una disposición jurídica admita más de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga el interés superior de la niña, niño o adolescente.
- Norma de Procedimiento. Cuando se deba tomar una decisión que afecte a una niña, niño, adolescente, o a un grupo de ellos, es necesario realizar una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) sobre su vida y explicar por qué se tomó esa decisión.

El interés superior es, por lo tanto, un deber de carácter moral que ha sido elevado o consagrado por el legislador a la categoría de norma jurídica, para así lograr su máxima eficacia y seguridad. En consecuencia, las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, en todas las medidas que adopten en relación con los menores, deberán considerar en forma primordial este principio. BAEZA CONCHA (2001)

iii. Determinación del Interés Superior del Niño

La Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño (comité) detalla el procedimiento para aplicar ese principio en un caso concreto:

1.- La evaluación de las circunstancias específicas de la vida de cada niña, niño o adolescente, para observar en qué medida tienen acceso al goce y ejercicio de sus derechos, habrá de efectuarse a

la luz de los principios de la CDN (derecho a la no discriminación, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a ser escuchados);

2.- La determinación de medidas razonadas y adaptables, de acuerdo a la edad y grado de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, que garanticen el disfrute pleno y efectivo de sus derechos.

La evaluación y determinación del interés superior deberá efectuarse bajo ciertos parámetros, cuya aplicación, asegurará que el análisis y resultado de este procedimiento sea apropiado y eficaz.

iv. La Funcionabilidad del Interés Superior del Niño

Se puede afirmar que la noción del interés superior del niño, tal como está definida en la Convención sobre Derechos del Niño, es una noción que tiene dos funciones “clásicas”: el de controlar y el de encontrar una solución (criterio de control y criterio de solución).

Así, es criterio de control determina que el interés superior del niño sirva para velar que el ejercicio de derechos y obligaciones respecto de los niños sea correctamente efectuado. Es todo el dominio de la protección de la infancia que está concernida por este aspecto de control.

De otro lado, el criterio de solución importa que la noción misma del interés superior del niño debe intervenir para ayudar a las personas que deben tomar decisiones hacia los niños a elegir la buena solución. Esta es la que será elegida puesto que es “en el interés superior del niño”. Es la pasarela indispensable entre el derecho y la realidad psicológica.

v. El principio del Interés Superior del Niño como principio garantista

El Interés Superior del niño es un principio jurídico garantista, entendiéndolo como una obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los derechos subjetivos individuales. Lo cual, implica que los principios jurídicos garantistas “*se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades*” CILLERO BRUÑOL (2017)

Una vez determinada su función, su contenido resulta ser la satisfacción de todos los derechos del niño. Agregándose que “*reconocido un amplio catálogo de derechos de los niños no es posible seguir sosteniendo una noción vaga del interés superior del niño*”. De esta manera, se establece el contenido del principio sobre la base de todos los derechos enumerados en la Convención, objetivación necesaria para preservar el paradigma de la “protección integral”. CILLERO BRUÑOL (2017)

De esta manera, el principio del interés superior del niño se constituye en un mandato dirigido al Estado para privilegiar determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas, en las que el Estado deba restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivos. De este modo, el principio tendría contenido normativo específico implicando que determinados derechos de los niños son de un “interés superior” al contraponerse con otros derechos individuales y ciertos intereses colectivos.

No obstante, la propia Convención sobre los Derechos del Niño establece que hay ciertos derechos de los niños que ceden frente a determinados intereses colectivos y a derechos individuales de terceros. Por ello mismo, no se puede afirmar la verdad de una proposición normativa que diga que “todos los derechos de los niños prevalecen sobre el resto de intereses colectivos y sobre los demás derechos individuales”. Más allá de lo que nos parezca deseable, esta proposición no se correspondería con el texto consagrado en la Convención y que limita la interpretación.

Por ello, cuando nos encontramos a un procedimiento judicial este principio se enfoca al debido proceso en la adecuada aplicación y análisis de todos los derechos que contiene un caso concreto para determinar qué derechos se pueden afectar o en un futuro pueden ser afectados de manera conjunta por la resolución o sentencia que dicte la autoridad, con la finalidad de que llegue a dar una seguridad tanto de sus derechos afectados como también la satisfacción de ellos.

b) Principios Procesales

- Principio de Inmediación

En virtud de este principio, se exige que haya una relación directa entre las partes y el juzgador, es decir, que, entre ellos exista una interacción personal e inmediata, en donde el Juez reciba directamente la actuación de las pruebas aportadas por las partes, por los terceros u ordenadas de oficio, en su calidad de director del proceso. Este principio consiste en que el Juez dirija todos los actos del proceso, tratando de eliminar la delegación de actos procesales en auxiliares, cuyo resultado es de mucha importancia, con la precisión de que si no cumpliese producirá la nulidad insalvable.

Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones procesales por comisión fuera de la competencia territorial del juzgado. Por este principio, el Juez debe prescindir, en lo posible de los auxiliares jurisdiccionales; para que tenga el mayor contacto posible con todos los elementos del proceso. Al optar por la inmediación, el CPC ha privilegiado “la oralidad” por ser éste el medio a través del cual se produce el contacto directo entre el Juez y los justiciables. CAMARGO ACOSTA (2010)

Hay quienes aseguran que la inmediación es una garantía de la oralidad pues es indispensable para que la oralidad despliegue su máxima eficacia. Sólo con inmediación, las actuaciones procesales realizadas oralmente se efectúan ante el destinatario de las mismas, esto es, con la inmediación del juez. El contacto directo de éste con los sujetos intervinientes en el proceso da seriedad al acto oral, y en cierta medida, hacen que la justicia sea más cercana al justiciable, ya que se permite a las partes “ver la cara al Juez”, en quien en definitiva han confiado la resolución de su conflicto. Este contacto permitirá al juez hacerse una recreación de la realidad lo más real posible, pues tendrá acceso directo a las declaraciones de todas las personas que conocen los hechos litigiosos, pudiendo formularles precisiones o aclaraciones que contribuyan a realizar su enjuiciamiento fáctico.

- Principio de Concentración Procesal

Derivado del principio de celeridad, consiste en darle al proceso una orientación que permita una concentración en los actos procesales; la concentración de pruebas en un solo acto (dentro de una audiencia), es decisiva según este principio. Este principio exige que el proceso se lleve a cabo en un periodo breve, en una sesión o en el menor número de sesiones o audiencias; es decir, que en una diligencia se realicen la mayor cantidad de actos procesales. La concentración permite al Juez participar en todos ellos, otorgándole además una visión de conjunto del conflicto que va a resolver.

Parte de la doctrina señala que el principio de concentración apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad procesal en la menor cantidad de actos y a evitar, la dispersión de dicha actividad. Por otro lado, señalan que la concentración procesal no consiste en reducir a la unidad, las etapas procesales, transformando, tal vez el proceso en un caso; sino reconociendo los límites infranqueables de las fases procesales y procura dentro de cada una de ellas, reducir el desgaste de la actividad y energías procesales.

ECHANDIA citado en HINOSTROSA MINGUEZ (2012), acerca del principio de concentración, señala que <<...tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mejor unidad. Para esto se debe procurar que el proceso se desenvuelva sin solución de continuidad y evitando que las cuestiones accidentales o incidentales entorpezcan el estudio de lo fundamental...>>

Se afirma que el principio de concentración es el que mayor influencia tiene sobre la brevedad de los procesos. En este principio es donde mejor se manifiesta la diferencia entre proceso oral y escrito: mientras en el primero la sustanciación se reduce a una o pocas audiencias próximas unas de otras, el proceso escrito se extiende a una serie indefinida de fases, importando poco que un acto se realice mucho tiempo después del anterior, pues el juez debe juzgar en base a escritos. Además, en el proceso oral, la sentencia debe seguir inmediatamente al debate, pudiendo concederse por causa grave que sea debatida y publicada en un término sucesivo breve.

- Principio de Economía Procesal

Por este principio de economía, debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal. Es la simplificación del proceso, tendiendo a una reducción de los actos procesales, suprimiendo trámites superfluos o redundantes y aminorando por tanto el trabajo de los jueces y auxiliares de justicia. Se busca así, simplificar cada proceso en particular, lo que incide de forma decisiva sobre la buena administración de justicia.

Resultado de este principio, es el rechazo de la demanda que no reúne los requisitos legales, para que al ser corregida desde un principio no vaya a ser la causa de la pérdida de mayores actuaciones; la inadmisibilidad de las pruebas inútiles y de incidentes inconducentes o que la ley no permite para el caso; la acumulación de pretensiones para que en un mismo proceso se ventilen varias y evitar, en consecuencia; la restricción de los recursos de apelación y casación y otras medidas semejantes. CAMARGO ACOSTA (2010)

Consiste en el ahorro de tiempo y dinero en la actividad procesal; esto es, realizar el derecho con el mismo gasto y esfuerzo. También, significa entre nosotros, aplicar por los Tribunales Superiores, la “integración” de las resoluciones, convalidándose actos de nulidad en la resolución inferior materia de apelación. Todo esto para que el trabajo del juez sea menor y el proceso más rápido. Justicia lenta es injusticia grave. Es necesario señalar que el principio de economía procesal no persigue la mera simplificación de los procesos; porque, si tal simplificación va en desmedro de la justicia, específicamente del Derecho de Defensa de las partes, este principio no avala la abreviación de los trámites. CAMARGO ACOSTA (2010)

Según GUASP citado en CAMARGO ACOSTA (2010), el principio de economía procesal se ha edificado sobre tres aspectos:

- Economía del Tiempo. - COUTIURE señala, en el procedimiento “el tiempo es más que oro, es justicia”. Es claro, una justicia tardíamente administrada, importa una parte de injusticia que recibe el demandante cuando se ejecuta la sentencia a su favor, al haberse declarado la legitimidad de su pretensión;

- Economía de Esfuerzos. - Importa una simplificación técnica de los trámites, para evitar el despliegue innecesario, de actividades y conductas procesales ineficaces en beneficio de una óptima administración de justicia, el CPC en sus artículos 465 a 467 regula el saneamiento del proceso, como una de las aplicaciones de este principio; y

- Costos. - La justicia no puede ser onerosa, bajo riesgo de crear una desigualdad entre las partes, en donde la parte solvente estará en mejores posibilidades de victoria sobre la insolvente.

- Principio de Celeridad Procesal

Mediante este principio se trata de agilizar el desarrollo de un proceso; pero, sin sacrificar otros principios, lo que importa es que el anhelo de celeridad concuerde con la realidad compuesta por múltiples factores.

El principio de celeridad, es la realización diligente del proceso dentro de los plazos establecidos por la ley. Se expresa en la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos; recordando siempre la máxima “*Justicia tardía, ya es menos justicia*”. Está representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos y onerosos. Así, se resalta que este principio de celeridad implica la perentoriedad de los plazos legales o judiciales. CAMARGO ACOSTA (2010)

- Principio de dirección judicial del proceso

El principio de dirección o dirección judicial del proceso, recibe también el nombre de “principio de autoridad de juez”. Por este principio, se le asigna al Juez, un rol activo, dirigiendo el proceso de modo eficaz, para que éste cumpla su función pública; es decir, como medio utilizado por el Estado para hacer efectivo el derecho objetivo y concretar finalmente la paz social en justicia. Este principio de dirección judicial del proceso, es la expresión que mejor caracteriza al sistema procesal publicista (opuesto al privatista, donde el Juez asumía un rol pasivo); pues, se privilegia el análisis e importancia del proceso desde la perspectiva de su función pública.

CHIOVENDA acerca de este principio señala, “en el proceso civil moderno el Juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del derecho civil público moderno, que el Estado se hallase interesado en el proceso civil; no ciertamente en el objeto de cada pleito, sino en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible. El Juez, por lo tanto, debe estar provisto en el proceso civil de una autoridad que careció en otros tiempos.” CAMARGO ACOSTA (2010)

Para PALACIO, citado en LEDESMA NARVÁEZ (2008), la dirección del proceso puede definirse como el conjunto de actos que corresponde cumplir para colocar al proceso en cada una de las etapas que lo integran, resolver las diversas situaciones que en ellas se susciten, reexaminar actos defectuosos o injustos, comunicar a las partes o a los terceros las resoluciones que se dicten formar materialmente el expediente, dejar constancia escrita de actos verbales, expedir certificados o testimonios y asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva.

- Principio de Gratuidad

QUINTERO y PRIETO, acerca del postulado del libre acceso de los justiciables al órgano jurisdiccional, dicen que: <<...Su afirmación corresponde a la siguiente: todos pueden acudir al servicio de jurisdicción, o a éste: las puertas de los tribunales deben estar abiertas para todos. Es evidente que la igualdad de las personas, de los habitantes de un territorio nacional, se ve vulnerada si por su situación económica o social, se le obstaculiza este acceso. El legislador de todos los países busca reestablecer el equilibrio, roto no solamente por la diferente condición económica social de los justiciables sino también por el progresivo incremento del costo de la actividad jurisdiccional, y por ello tiene que asistir a las partes económicamente débiles, bien sea liberándolas de los gastos del proceso o creando procedimientos especiales de acelerada tramitación>>. HINOSTROSA MINGUEZ (2012)

El art. VIII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, concordante con el inciso 16 del art. 139° de la Constitución Política de 1993 (según el cual es principio y derecho de la función jurisdiccional el principio de gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos, y para todos, en los casos que la ley señala), consagra el principio de gratuidad en el acceso al servicio de justicia, aunque establece ciertas limitaciones como aquellas que se refieren a las costas, costos y multas, cuyo pago es impuesto a las partes en los casos que corresponda. HINOSTROSA MINGUEZ (2012)

Es por ello que, en el proceso de alimentos, la demandante se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal.

- Principio de Impulso Procesal

Este principio consiste en que las partes esenciales y accesorias del proceso tienen a su cargo la responsabilidad de que el proceso no se paralice y concluya dentro de los plazos legales, se fundamenta en el principio de dirección del proceso, tiene como finalidad legitimar la actividad de las partes haciéndola más dinámica, funcional y directriz, permitiendo poner en movimiento el proceso, de tal manera que no se detenga hasta que se ponga fin a la instancia, bien sea a petición de parte, de oficio por los órganos jurisdiccionales o por disposición expresa de la ley, para obtener una rápida definición de los procesos. ESPINOZA GARCÍA (2008)

El Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Por este principio, el magistrado tiene la aptitud y deber de conducir en forma autónoma el proceso hacia el logro de sus fines; es decir, de promoverlo sin necesidad de la intervención de las partes. Este principio de impulso procesal, le confiere facultades discrecionales que puede emplear cuando está preocupado por la sospecha de que las pruebas aportadas al proceso por las partes no son suficientes para esclarecer la verdad real o “histórica”.

- Principio de Oralidad

Al definir la oralidad nos encontramos frente a la delgada línea que distingue la definición de la oralidad como principio y la oralidad sistema. A mi parecer, la oralidad engloba todo ello, por lo que, a continuación, desarrollaré cada una de ellas.

i. La oralidad como principio

Notable sector del procesalismo moderno, afirma que la oralidad se configura como un principio, determinando de esta manera una apreciación clara al sentido atribuido al concepto.

Se afirma que la oralidad es el primer principio del procedimiento, mediante el cual se adopta la forma oral para exteriorizar la voluntad de las partes en los actos procesales. Como tal principio del procedimiento responde a una necesidad de orden, certeza, eficiencia y su observancia absoluta representa una garantía de regular el desarrollo del proceso.

No obstante, la importancia que puede notarse en el principio de oralidad, para algunos autores no se erige en fundamento o base del proceso, sino que es un simple arte instrumental que deviene en un elemento con que cuenta el legislador en el trance de tener que componer un procedimiento que satisfaga a los fines y aspiraciones del proceso. La oralidad, para los autores que opinan de esta manera es entonces, una técnica como lo es la escritura; el juez se entiende con las partes de dos formas: verbalmente o por escrito; de tal manera que la oralidad o escritura, como principios a tener en cuenta, son meramente procedimentales. HERNÁNDEZ AGUILAR (2004)

Contrario a la opinión anterior, está la de Fairén, quien ha afirmado que, el principio oral no es meramente técnico, no sirve simplemente para resolver un problema de viabilidad procedimental y adecuación del procedimiento a los deseos sociales requeridos por el proceso, sino que reviste, además de su carácter técnico, uno eminentemente político, consistente en que el Estado tiene no sólo interés en que la máquina de la justicia marche bien, sino que, lo que ella decida sea justo, según la idea convenida que el Estado tiene de lo que es la justicia. HERNÁNDEZ AGUILAR (2004)

Como bien lo señala Chiovenda, el principio de oralidad no exige prescindir de la escritura en el proceso ya que esta es el medio perfecto de expresar el pensamiento y de conservar duraderamente esa expresión, tal y como sucede en todas las relaciones de la vida humana; pero esto significa que la escritura tiene el sitio que le corresponde, de acuerdo con las condiciones de la vida moderna.

En algunas legislaciones, el principio de oralidad tiene rango constitucional. Tal es el caso de la Constitución española, que lo ha formulado en el art. 120 inciso 2 de la siguiente manera: “El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal”.

El nuestro ordenamiento jurídico, el principio de oralidad no tiene rango constitucional, pero ha sido adoptado dentro del proceso penal mediante el Nuevo Código Procesal Penal, y más recientemente en los procesos laborales mediante la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

ii. La oralidad como sistema VILLALBA BERNIE (2007)

Hay otra parte de la doctrina que señala que, la oralidad debe ser interpretada con mayor amplitud que como es interpretada como un principio, sus bondades van más allá, pues también implica un sistema procesal, una forma de hacer proceso.

Esta naturaleza se concibe, al profundizarla desde lo teórico y lo práctico, autorizando sintetizar que no estamos ante un simple método de comunicación entre partes y el Juez, o de una expresión verbal en el proceso, sino que la cuestión es más profunda al constituirse en un modo de hacer el proceso, que además cuenta con principios, características, consecuencias y objetivos propios.

Este género o modo de hacer el proceso, se difunde en la oralidad cuando analizamos la audiencia, que sería incompatible sin la comunicación intelectual verbal de las partes y el juez. También repercute en la técnica utilizada por los jueces al orientar, dirigir y conducir el proceso, en especial la audiencia, concediendo el manejo del debate al juez, a abrirlo, impulsarlo y cerrarlo. Transige en eliminar las trabas preclusorias, facilitar el ataque y la defensa, excluyendo las habilidades e intento de lucha desleal. En la etapa probatoria, todos los medios probatorios son conocidos vía oralidad, confiriendo a las partes y al juez un acceso directo a las mismas. Inclusive en lo que respecta a la sentencia con sus fundamentos, esta será dictada en forma oral, creándose entorno al método un ambiente favorable para el diálogo y el entendimiento, con mayor razón si en la audiencia se previona el saneamiento del proceso, a más de introducir una etapa conciliatoria dialogada, otorgando al juez una mayor comprensión de la casuística presentada.

La concepción de la oralidad como sistema, más allá de entenderlo como una profusión de la palabra hablada, de la expresión verbal en la mayoría de los actos procesales que domina, también dota de una calidad estructural y formal específica, en la que la palabra hablada no es más que una circunstancia. Excede la concepción de la oralidad, la simple utilización de la expresión verbal, para constituirse en un modo y forma estructurada de llevar adelante el proceso que tiene un funcionalismo propio, tal cual ocurre con un sistema, por eso, la oralidad debe comprenderse en su concepción amplia de sistema procesal.

Conforme lo señala LOPEZ GONZALES, la oralidad, desde el punto jurídico procesal, es un sistema procesal con lo cual “hacemos alusión a ese conjunto de ideas, caracteres, principios inseparables que le dan una conformación especial al procedimiento...”. Igualmente, señala dicho autor que “pertenecen a la categoría de procesos con oralidad sistemática, aquellos que conforme a la doctrina..., garantizan no sólo la interacción entre el juez y las partes en las etapas fundamentales del proceso, sino que cumplen los demás presupuestos que hacen realidad el cumplimiento del principio de oralidad. Es decir, cuando el sistema procesal se configura de tal manera que se garantiza en su recto sentido el cumplimiento de los principios de inmediación, concentración y publicidad”. LÓPEZ GONZÁLES (2001)

iii. Antecedentes Históricos sobre la Oralidad en el Proceso

Para el análisis de los antecedentes, es necesario destacar que la oralidad ha sido la manifestación primaria de comunicación entre los hombres, convirtiéndose en una necesidad indispensable para la vida, lo que posibilitó que se desarrollara a partir de las necesidades y las relaciones que se establecían en la sociedad.

La oralidad se presenta como una solución del siglo XIX a unos modelos procesales europeos con graves falencias heredadas de una tradición romano – canónica que se difundió por todo el continente europeo durante el siglo XII. CAPPELLETTI (1972). Así, entonces, los países del denominado *civil law* presentaban sistemas procesales con una serie de formalidades y requisitos que dilataban y obstruían los procesos. A raíz de las críticas que surgieron frente a esta problemática, surge un movimiento reformista en el continente europeo que buscaba suplir las falencias del proceso jurisdiccional mediante la implementación de la oralidad.

El estado francés fue el primero en lograr una renovación procesal a mediados del siglo XIX. De esta manera, se eliminó el monopolio de la escritura en el proceso y con esto la inclusión de la oralidad en determinados actos procesales. Sin embargo, el intercambio de escritos siguió siendo clave en dicho país. De igual manera, los actos orales estaban cargados de formalismos que

conducían a la inadmisión de las pruebas, lo que resultaba desfavorable para la búsqueda de una mejor verdad formal en el proceso. CAPPELLETTI (1972)

En Alemania, con la expedición de dos obras legislativas, se introdujo la oralidad en dicho país a mediados del siglo XIX, los cuales fueron: el Código de Procedimiento Civil de Hanóver (1850) y la Zivilprozessordnung (1877). Estos códigos, si bien implementaron la oralidad en el proceso, lo hicieron de una manera rígida, generando así unos actos procesales cargados de excesos y defectos de forma. De esta forma, se estructuró un sistema procesal en el cual se consideraban inexistentes todos los actos no comunicados al juez oralmente en la audiencia de las partes. Asimismo, la decisión se debía limitar únicamente a la palabra de las partes, las cuales se ponían en la tarea de recitar todas las pruebas en el proceso a efectos de generar su validez.

Austria, tomó un papel fundamental en esta ola de reformismo procesal que vivió Europa, en la medida que sirvió de inspiración para otros estados europeos en la puja por la oralidad. Así con la Zivilprozessordnung austriaca de 1895 se reformó el sistema procesal bajo el ideal de la oralidad, evitando los errores de los alemanes. De allí que también se utilizara la escritura en los procesos, generando así un sistema mixto con actos procesales escritos y orales.

La Constitución Española ha recogido la oralidad en su artículo 120.2, y en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, lo ha asumido en la regulación de los dos procesos declarativos ordinarios.

La ley de Enjuiciamiento Civil del 7 de enero de 2000, en su Exposición de Motivos afirma sus objetivos: “La Ley diseña los procesos declarativos de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas”.

La doctrina en este sentido ha dicho que la nueva “... ley de Enjuiciamiento Civil ha optado con claridad por estructurar la primera instancia de los dos procesos declarativos ordinarios bajo el principio de oralidad, utilizando para ello la técnica de las audiencias. En concreto, para el juicio ordinario se producen al menos dos: a) la “audiencia previa” que, con carácter obligatorio, prevén los arts. 414 y ss. con cuatro claras finalidades, a saber, la conciliadora –al inicio y al final del acto, la subsanadora de defectos procesales, la delimitadora de las cuestiones litigiosas, y la probatoria -proponiéndose y admitiéndose las pruebas-; y b) el “juicio”, para la práctica de las pruebas y la formulación de las conclusiones”.

iv. Proceso Oral SUNTAXI PAREDES (2014)

Es el medio más exacto de expresión de la realidad de los hechos, pues en cuanto a las pretensiones y argumentos de las partes, los abogados defensores en el debate podrían lograr las aclaraciones o rectificaciones que darán lugar a disipar muchas dudas. Y el señor juez tendrá mejor visión para la apreciación de la verdad de los hechos, pudiendo captar fácilmente la sinceridad o credibilidad.

El proceso oral se construye sobre principios como inmediación, concentración y publicidad; diversos a aquellos que son foco en el sistema escrito, que por su parte se nutre de principios como preclusión, precisión y conservación de los actos.

Asimismo, el proceso oral se caracteriza por la comunicación simultánea de los actores procesales, la presentación y el análisis oral de las pruebas, la interrelación oral directa e inmediata entre los litigantes y el juez en todos los actos procesales, al menos los fundamentales, que deben ejecutarse en presencia del juzgador y de las partes.

Esto permite someter al análisis directo e inmediato de sus afirmaciones o negaciones, pruebas, contrapruebas, peritajes, informes, y alegatos. Y aquello que parece un defecto censurable de la oralidad en la administración de justicia, se convierte en importante y significativa virtud de la economía del tiempo y proximidad en el espacio.

No se puede dilatar el trámite y hacerle interminable; ni se puede abusar de la oralidad para hacer lo que permite el lenguaje escrito: transferir actos procesales fuera de la jurisdicción del juzgador, receptar y cumplir diligencias sin la presencia de éste. Con este método el abogado o abogada que intervenga en la causa debe poseer mayor esfuerzo, preparación, diligencia y capacidad.

v. Características del proceso oral (VILLALBA BERNIE, 2007)

Siguiendo a CHIOVENDA en la descripción de las primordiales características del sistema de la oralidad, se descompondrán las principales aplicaciones y virtudes que se obtienen una vez implementadas en el proceso.

- Predominio de la palabra como medio de expresión: No figura erradicar lo escrito, pues es difícil concebir un proceso que no admita en mayor o menor grado, actos escritos, pero otorgándole a la escritura el sitio que le corresponde no dándole ni más ni menos importancia que la que se merece. La inclinación es que internamente en el proceso se asuma una etapa especial donde se produzca el debate oral de la causa, en el que, por medio de la palabra hablada, de la expresión verbal, se discuta la causa y de ser factible se resuelva la misma.

- Relación directa entre órgano decisor y las personas que intervienen en el proceso: Es lo que la doctrina denomina inmediación, permitiendo al juez un contacto directo y dialogado con las partes, con los demás intervinientes del proceso, y con las pruebas sin intermediarios y sin papeles de por medio, admitiendo la percepción directa de los hechos desencadenados en el expediente.

- Substanciación de la causa en un momento único: El debate de la causa se concentra en la menor cantidad de actos posibles, tramitándose en una sola audiencia, o en el menor número viable de audiencias. La concentración constituye una de las principales características del proceso oral, que influye positivamente en la brevedad de los litigios.

vi. La oralidad en América Latina

En Latinoamérica, países como Brasil, España, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, Andorra, México, Venezuela y Perú, contemplan la oralidad en su sistema jurisdiccional o tienen proyectos para implementarla. Por otra parte, cabe señalar, que en los juicios ordinarios, sumarios y sumarísimos es donde está previsto el procedimiento oral.

También se destaca que la forma más empleada para registrar las audiencias sigue siendo a través de medios escritos. En general, están previstos mecanismos de conciliación con posibilidad de efectuar antes y durante el proceso la presencia del juez en la audiencia oral y en la recepción de las pruebas es una condición obligatoria en todos los países. Evidentemente que todos los países con ordenamientos que prevén procedimientos orales en materia civil, expresan que la oralidad contribuyó a la transparencia en el sistema. SUNTAXI PAREDES (2014)

Así, la oralidad en el mundo entero no es algo nuevo, sino que a través de su introducción cronológica se ha ido implementando como es el caso de los países de Latinoamérica donde se ha tomado como base el código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica.

La estructura procedimental del Código Modelo hizo gran énfasis en la oralidad como vía para lograr la inmediación, concentración y publicidad, privilegiando la actividad procesal en audiencia y configurándose así un verdadero proceso por audiencias. Con este modelo de proceso por audiencias, los autores del Código Modelo pretendían lograr materializar en la realidad los principios de inmediación y concentración para acercar la justicia a la gente, al conflicto real y simplificar los procesos, con miras a su rápida resolución. REYNA VARGAS (2017)

Es así que, podemos señalar que el Código Modelo tuvo una presencia decisiva para la modernización procesal alcanzada, pues los principios que lo estructuraban adquirieron carta de ciudadanía legislativa en toda América. Por eso, la dirección del proceso la oralidad la contracción la buena fe procesal, la audiencia preliminar, entre otros conceptos, constituye lenguaje procesal común, por lo que cabe resumir los informes de algunos países.

a) Uruguay:

En la República de Uruguay se implementó la oralidad en los procesos civiles. Los principales objetivos de la reforma fueron los siguientes:

- Revertir el alto grado de ineficiencia por la demora en la resolución de los conflictos.
- Simplificar y reducir el número de las estructuras procesales y sus trámites. La simplicidad se obtiene al limitar el número de tipos de procesos a su mínimo indispensable. Así, fuera de la necesaria previsión de procesos preliminares, cautelares e incidentales, se redujo el proceso de conocimiento a tres formas: la ordinaria, extraordinaria y monitoria. Luego, la simplicidad se verifica dentro de cada estructura procesal, al eliminarse actos innecesarios y actuar los principios de inmediación y concentración, fundamentalmente en la audiencia que funciona como elemento central del proceso.
- Un Código Procesal que tuviera vocación general, abarcando el mayor número de materias no penales.
- Lograr el contacto directo del juez con las partes y la prueba.
- Convertir al juez en verdadero director del proceso.
- Moralizar el proceso evitando conductas desleales y dilatorias. La probidad se logra mediante mecanismos que aseguren que los sujetos actúen con lealtad y buena fe, entre los cuales asume fundamental importancia la carga de anticipar en la demanda y en la contestación toda la prueba que se intenta producir, evitando el ocultamiento y las maniobras. En el mismo sentido, el otorgamiento al Tribunal de trascendentes poderes-deberes, y un régimen impugnativo en el cual el efecto suspensivo sea la excepción, evitan conductas maliciosas.
- Priorizar lo sustancial sobre lo formal: que las formas –siempre necesarias para garantizar el debido proceso– sean instrumentales al derecho sustantivo.
- Priorizar la autocomposición del litigio.
- Lograr la eficacia del proceso de modo que todo sujeto de derecho tenga acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones.

b) Brasil:

La legislación sobre materia procesal es siempre federal, de modo que la disciplina del derecho procesal, en el sistema brasileño, es uniforme para todo el país (art. 22, inc. I, de la Constitución de la República). De todas maneras, con respeto a la oralidad, prevé el Código de Proceso Civil la realización, vía de regla, de dos audiencias en el rito ordinario. La primera de ellas, denominada audiencia preliminar dentro de sus objetivos se encuentra el de conciliar y de sanear el procedimiento entre otros. En segundo lugar, determina el Código la designación de una audiencia de instrucción y juzgamiento. Se consagra la inmediatez y un juez instructor del proceso, pero se cuestiona en la práctica la falta de concentración

vii. Ventajas y desventajas de la oralidad PARMA (2016)

Para los procesalistas es posible establecer que hay casos sencillos donde la discusión oral puede ser más rápida, menos costosa y más sencilla que una discusión escrita; en otras palabras, más eficiente. La oralidad puede implicar eficiencia, también, en cuanto a la presentación de la prueba, mientras no se rompa el principio de inmediación ni el de concentración, ante un pronunciamiento tras la audiencia donde, tras practicar pruebas, el juez está listo para emitir sentencia. TARUFFO (2009)

También se puede plantear que el sistema oral da rapidez y simplifica la actuación procesal; además de promover la publicidad y accesibilidad. La oralidad implica el desarrollo de los actos procesales en el escenario público, tanto de cara a las partes como a la sociedad. Adicionalmente, la oralidad promueve la economía procesal ya que se eliminan actuaciones y dilaciones innecesarias. Esto es una ventaja siempre que se respeten los principios de lealtad, responsabilidad y transparencia.

Pero en el contexto de la oralidad no todo se trata de ventajas: es también posible plantear ciertos inconvenientes procesales que la implementación de la oralidad puede tener en un contexto general. Algunas actuaciones se presentan típicamente de forma escrita, o bien se transcriben tras la presentación oral. Así sucede con la presentación de la demanda, ya que esto permite una presentación detallada del caso que no siempre se da en un contexto oral.

Un inconveniente adicional en cuanto a la implementación de la oralidad es su instauración inconstante y poco uniforme. En casos complejos se recurre a la escritura buscando evitar una resolución precipitada, o evitar el desgaste logístico que implica un proceso oral de alta complejidad.

Como desventaja en cuanto al análisis del material probatorio, en ocasiones la oralidad puede causar ineficiencia porque en algunos casos la naturaleza de la prueba no permite un análisis en el contexto oral, como la prueba documental, o resulta demasiado exigente en tiempo por la preparación requerida, como sucede en los interrogatorios a las partes, los testimonios y los dictámenes periciales sobre materias complejas.

2.4.4. LA ORALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO PERUANO

2.4.4.1. Implementación de la oralidad en el Proceso Penal

El Nuevo Código Procesal Penal ha sido caracterizado desde su concepción como expresión de un proceso penal acusatorio en el que la esencia del juicio es la oralidad, por lo que, estamos ante un modelo de juicio oral.

El NCPP, además, ha previsto la utilización de audiencias para la adopción de decisiones que afectan derechos fundamentales, como es el caso de la prisión preventiva, entre otras. La importancia de las audiencias previas tanto por razones sistémicas como por la naturaleza de los derechos que están en juego, ha conducido a extender la oralidad a las mismas. RIOS MOSTAJO (2016)

Es así que, el principio de oralidad en el proceso penal se manifiesta en dos escenarios: En el desarrollo del proceso penal y en la culminación del proceso penal.

En el primer escenario (desarrollo del proceso), el principio de oralidad se configura como una regla determinante del modo en que se articula la dialéctica procesal penal. En virtud a esta regla, las decisiones judiciales que se emiten en el curso del proceso penal deben ser pronunciadas en Audiencia y como consecuencia del debate oral producido entre las partes.

En el segundo escenario (culminación del proceso), sirve para fundamentar una sentencia, aquella prueba verificada oralmente durante el juicio oral, por esa razón no puede considerarse un simple mecanismo de realización de otros principios o un medio de comunicación, el principio de oralidad tiene corporeidad y trascendencia autónoma.

Cabe señalar que, la vigencia del principio de oralidad tampoco supone que la actividad escrita sea excluida, conviene tomar en consideración que la propia actuación jurisdiccional se contiene de forma escrita. No es que se pueda prescindir de las formas escritas, de lo que se trata es pues de un predominio de la oralidad sobre la escritura.

Por lo que, recapitulando, el principio de oralidad, tras la puesta en vigencia del NCPP viene adquiriendo importancia trascendente, haciéndose realidad las afirmaciones de algunos autores en el sentido que el principio de oralidad es condicionante de la operatividad de los principios de inmediación, publicidad o concentración. En el modelo que propone el NCPP, el juzgamiento oral se convierte en el momento culminante del proceso penal, lo que significaría finalmente un predominio real de la oralidad, por lo que, a continuación, detallaré lo que implica la oralidad en el juicio oral penal. REYNA ALFARO (2016)

- Juicio Oral en Materia Penal:

El nuevo modelo procesal instauro al juicio oral como la etapa principal del proceso común. Si bien como lo he señalado anteriormente, todos los imputados tienen derecho al juicio oral, también tienen la facultad de renunciar a este a través de las distintas fórmulas de simplificación procesal que prevé el NCPP, dando lugar a audiencias previas al juicio oral. RIOS MOSTAJO (2016)

En nuestra normativa el principio de oralidad está reconocido en el NCPP como esencial al juicio oral. Es así que, en el título preliminar en el art. I inciso 2 señala: “Toda persona tiene derecho a un juicio oral, público y contradictorio (...)”. Igualmente, el art. 356° del NCPP establece: “1. El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. (...)”. Por último, el art. 361 del mismo cuerpo normativo señala que: “1. La audiencia se realiza oralmente, pero se documenta en acta. (...). 3. Toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al

igual que la recepción de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes participan en ella. (...).”.

Es así que, el proceso penal aparece como el terreno de enfrentamiento dialéctico de las partes procesales con el propósito de convencer al Juez sobre su pretensión, será la oralidad el instrumento más adecuado para tal propósito. Esta característica es notoria en el NCPP que ubica al juicio oral como la etapa central del proceso penal y privilegia la solución de las controversias en audiencia pública. En efecto, debe recordarse cómo el art. 356° del NCPP reconoce expresamente que “El juicio oral es la etapa principal del proceso”. REYNA ALFARO (2016)

La definición más certera de juicio público y oral es aquella que lo presenta como el escenario apropiado o natural para la contraposición legítima y transparente de la pretensión punitiva del Ministerio Público y la pretensión libertaria del imputado y su patrocinador, ámbito, además, en que estos sujetos procesales actúan la prueba pertinente para producir información de calidad que, valorada por el tercero imparcial, esto es, por el órgano jurisdiccional, constituido por los Juzgados Penales Unipersonales o Colegiados; soporte el fallo de absolución o condena, puesto que toda sentencia habrá de sustentarse sólo en lo actuado en juicio, bajo estricta inmediación.

El Juicio Oral se desenvuelve como un triángulo equidistante: a la cabeza tendremos al Juzgador y debajo de éste, al Fiscal sosteniendo la tesis de culpabilidad del acusado y frente a éste al acusado con su abogado defensor, que replicará el ataque del Ministerio Público. NEYRA FLORES (2005)

Como bien lo señala BINDER, el Juicio Oral es “un acto realizado por un juez que ha observado directamente la prueba, que ha tenido contacto directo con las partes fundamentales, acusador y acusado, que se hace de un modo público, tal que los ciudadanos pueden ver por qué razones y sobre la base de qué pruebas un conciudadano será encerrado en la cárcel, y donde se garantiza la posibilidad de que el acusado se defienda”. NEYRA FLORES (2005)

La centralidad del juicio oral radica en que las partes podrán argumentar y probar sus pretensiones frente a frente, ya no ante un juez de control o garante (cuya actuación opera en la fase de investigación), sino ante el juez de conocimiento, quien tiene la potestad de resolver el conflicto suscitado. NAKASAKY SERVIGÓN (2004)

En conclusión, considerar al juicio oral como la etapa principal del proceso también se debe al haz de principio y garantías que lo envuelven a fin de lograr una calidad de información al juzgador que le permita resolver la Litis puesta en su conocimiento. Por calidad de información se entiende el conjunto de datos filtrados, seleccionados, depurados, tendientes a probar, por un lado, si se ha cometido o no ilícito penal y, por otro lado, determinar las consecuencias punitivas y, si fuese el caso, civiles derivadas del delito; información que es percibida por el juzgador de manera inmediata e imparcial, a través de una actividad contradictoria de las partes. NAKASAKY SERVIGÓN (2004)

2.4.4.2. Implementación de la oralidad en el Proceso Laboral

Desde el 15 de julio de 2010 en nuestro país se marcó un gran hito al entrar en vigencia, específicamente en el distrito judicial de Tacna, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, la misma que fue publicada el 15 de enero de 2010.

Como hemos podido notar, el nuevo proceso promovido por la NLPT, con principios procesales propios, ha sido implementado de manera progresiva en función a diversos criterios normativos, aspectos administrativos, logísticos, operativos, entre otros. Incluso, las demoras en su correcta implementación y ejecución han diferido la aplicabilidad de esta norma en algunos distritos judiciales, como es el caso de Piura, donde se aplicó el 26 de noviembre de 2018. Unas de estas limitaciones, además de los problemas ya conocidos, fue la adaptación a los planteamientos audaces y agresivos de este nuevo modelo, así como la dinámica de la oralidad que en sí mismo representaba un gran reto para todos los participantes pues el sistema judicial peruano es eminentemente escriturado. AMPUDIA BELLING (2019)

Hoy en día resulta una tendencia la modernización de nuestro sistema de justicia laboral, alimentada por la especialización y la oralidad. En Latinoamérica, todas las reformas en materia judicial impulsadas han tenido como claro norte la reducción de la duración de los procesos, buscando reinventar el proceso laboral y reformarlo para brindar esplendor, concreción y durabilidad en el tiempo. Como podemos apreciar, la oralidad se encuentra motivada en la búsqueda de la seguridad jurídica, la protección de derechos de las partes de la relación laboral, la celeridad, equidad, justicia y certidumbre jurídica. AMPUDIA BELLING (2019)

Es por ello que, la NLPT, se sustenta en los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad; contemplado diversas normas, principios y directrices garantistas que están orientados a recortar los procesos, simplificarlos, disminuir su costo y permitir un mecanismo de defensa integral que otorgue a los actores del derecho laboral conseguir la tutela de sus derechos de manera eficiente y eficaz. De esta manera, se evita dilaciones indebidas, temeridad, improvisación e incertidumbre jurídica. AMPUDIA BELLING (2019)

En relación a la oralidad, no resulta difícil inferir que, en el actual diseño del proceso laboral busca agilizar la resolución de las pretensiones haciendo uso de los principios de inmediación y concentración de los actos procesales. La oralidad busca la sustentación del proceso recurriendo a la herramienta oral simple y de manera transparente con lo cual se asegura la verdad real, sencillez en las formas, la economía procesal y la veracidad. Aquí, el Juez conoce a profundidad el proceso, a las partes y las pretensiones accediendo a detalles mínimos del mismo.

Bajo este entendido, no resulta una coincidencia que el nuevo proceso consagrado a la luz de la NLPT sea eminentemente oral salvo la demanda y su contestación. Con este aspecto, se produce un debate oral de las posiciones de las partes para asegurar igualdad de oportunidades entre las partes y garantizar el vínculo del juez en el proceso.

a) El juicio oral en el proceso laboral RUEDA FERNÁNDEZ (2011)

La NLPT ha establecido una nueva estructura procesal laboral con juicio oral que se encamina a la eficiencia y cumplimiento de la finalidad de todo proceso judicial (la solución del conflicto de intereses), teniendo por principal instrumento y características la oralidad, la cual hace efectivo el principio de inmediación.

Las audiencias se registran totalmente en video y se levanta un acta dejando constancia de su realización, la cual contiene un resumen, pues las incidencias y actuaciones judiciales producidas en las audiencias constan en su totalidad en forma fidedigna en las grabaciones de video, por lo que, en caso de apelación de la sentencia, el juez o sala superior resuelve revisando el contenido de las grabaciones de video.

El art. 12 de la NLPT establece la prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencia, disponiendo que las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas (sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia la sentencia).

En la actuación de la prueba oral, como es la declaración de testigos, las partes, en la ratificación pericial y en las tachas contra documentos y testigos, el juez conducirá la actuación de esta prueba, respetando él mismo las técnicas de litigación oral, impuestas a las partes, como regla o principio general del derecho, sin que ello signifique que no tenga toda la libertad de preguntar a las partes y testigos durante toda la secuela del proceso, inclusive hasta antes de dictar el fallo oral.

En las audiencias se destacará el abogado que mejor maneje las técnicas de litigación oral, la capacidad de expresar oralmente la defensa.

Es así que, las principales actuaciones se sustentan y exponen ante el juez en una sola audiencia, se privilegian las actuaciones orales sobre las escritas y el juez director del proceso tiene un papel protagónico en el desarrollo de este “proceso célere”, al final de las intervenciones orales culmina comunicando su decisión en el acto de la audiencia. La sentencia en su integridad y con la expresión escrita de la debida motivación se notifica posteriormente.

Cabe señalar que, adicionalmente en el proceso ordinario laboral existe la audiencia de conciliación, donde el juez conoce a las partes y los escucha por una línea directa entre ambos, tratando de encaminar el conflicto a una solución ágil y sencilla, actuando como un conciliador – mediador (rol protagónico). La norma ha señalado que esta audiencia trata sobre intercambio de posiciones (alegaciones orales). Luego de fracasada la etapa de conciliación dentro de la audiencia de conciliación, el juez de creerlo conveniente y cuando efectúa un proceso inmediato o juzgamiento anticipado, otorga alegatos orales a las partes, donde éstas deben efectuar en un único alegato la exposición de su pretensión y los fundamentos de hecho que la sustentan, así como enunciar de forma directa y precisa la prueba documental que sustenta y prueba su posición.

En conclusión, la oralidad se encuentra expuesta en su mejor fase, en la audiencia de conciliación. Las audiencias son un intercambio de posiciones, existe un diálogo entre las partes, cuando el juez invita a conciliar y cuando éste pide explicaciones a las partes sobre las razones de su renuencia a conciliar, por lo que a continuación pedirá que expongan, cuáles son los fundamentos de la pretensión y de la contradicción de manera oral y breve, pudiendo el juez determinar en esta audiencia inicial: si el proceso es simple (efectuará juzgamiento anticipado), si es oscuro (ordenará al abogado del demandante reformular su demanda para poder comprenderla), si tiene competencia (podrá resolver, previo traslado oral de verificación a la otra parte y mediante juzgamiento anticipado), si la pretensión caducó (la improcedencia de la demanda), si existe alguna cuestión de forma que ataque a la pretensión y que haga que esta no pueda seguir con vida en el proceso laboral; es decir, una verdadera oralidad en su máximo expresión.

b) Ventajas y beneficios de la litigación oral en la NLPT AMPUDIA BELLING (2019)

La técnica oral en su configuración ha sido la pieza clave de la reforma por la claridad de sus fines y propósitos que no son más que permitir un desarrollo de los procesos laborales más expeditivo, justo, transparente, simple y sin espacios de corrupción. Sin duda alguna, este ha sido un gran acierto por partes de los encargados de proponer esta norma como para quienes decididamente la aprobaron y promulgaron posteriormente.

Como es evidente, esta reforma que propugna la litigación oral, permite la instauración de una justicia laboral más accesible, gratuita, sin sobre costos, rápida y con procesos más eficientes en tiempo y dinero. Asimismo, el sistema fundado bajo la nueva Ley N° 29497, permite al Juez salirse de las formas y esquemas tradicionales inoperantes en los que sólo se limita a apreciar la verdad material, sino que ahora puede desentrañar el caso con criterio, sano juicio, conocimiento y experiencia, ayudado de un buen recurso audiovisual, adecuada preparación normativa, académica y práctica, con impulso discrecional en un proceso público, transparente y fundado en derecho que resuelva las causas en un tiempo corto y de manera asertiva. Siguiendo esta línea, este nuevo esquema audaz, entusiasta, económico, moderno y atractivo propugnado por la nueva ley laboral, nos permite avizorar un horizonte esperanzador para los justiciables, el debido proceso, la sociedad y la seguridad jurídica, porque permite a través de la oralidad recortar los procesos hasta simplificarlos, disminuyendo los plazos y actos procesales garantizando la paridad de las partes y una justicia basada en la primacía de la realidad lejana a los documentos que podrá ser detectada por los jueces en aras de alcanzar la verdad real en los procesos laborales para la cautela de los derechos de las partes.

En suma, podemos decir que la reforma actual se ha podido traducir en las siguientes palabras: imparcialidad, probidad, oralidad, celeridad, gratuidad, economía procesal, simplificación en las formas, intermediación y especialización. Todo proceso para ser adecuado, eficiente y eficaz debe de traducirse en celeridad, seguridad jurídica, publicidad y debido proceso. Esto nos lleva a señalar, que la celeridad que clama el proceso es satisfecha directamente por el uso de la oralidad, la discrecionalidad del juez y demás garantías procesales que buscan la concentración y simplificación de la mayor cantidad de actos procesales. Es así, que se puede afirmar que el sistema oral ha superado largamente el rancio y vetusto sistema escriturado, pues cuenta en teoría con una unidad de etapas que evitan interrupciones que generan desapego, desconocimiento y frialdad para el juez de la causa, ya que el magistrado al ser el proceso oral se verá obligado a resolver la causa en el menor tiempo posible escuchando a las partes siempre en contacto íntimo con la pretensión y los hechos y analizando la conducta de cada parte.

Otro aspecto ventajoso y beneficioso del sistema oral que es no menos relevante, es que con el nuevo proceso oral cuenta con la facilidad de tener registros virtuales, visuales y escritos de todo lo actuado en el proceso. De esta manera, todos estos registros audiovisuales y de soporte tecnológico les agregan seguridad y certeza a los juzgadores para emitir sus fallos. De esta manera, se pone de lado la tradicional y absurda mecánica de llevar expedientes escritos, foliados y unificados que suelen ser encarpados hasta nuevo aviso. Es así, que se recurre a la fuente oral en apelación e incluso en casación sin prescindir de los registros audiovisuales.

Otro aporte de la oralidad, es el hecho de permitir que el juez interprete a las partes, sus actos, dichos y detalles y tenga protagonismo para decidir en base a criterios de hechos y de derecho.

2.4.4.3. Implementación de la oralidad en el Proceso Civil

Nuestra realidad judicial indica que, pese a las reformas introducidas en el antiguo Código de Procedimientos Civiles, no existió una actitud de los operadores del derecho y, fundamentalmente, del Juez, de propiciar la oralidad a través de las audiencias. Nuestro denominado juicio ordinario, no sólo contenía una predominancia de la escritura, sino que los pocos actos orales, como eran algunas pruebas que debían actuarse en el juzgado mismo, no las realizaba el juez, sino el secretario de la causa, con lo que el principio de intermediación que es consecuencial del principio de oralidad, no se cumplía. MORALES GODO (2009)

El proceso civil se había convertido en una ruma de papeles. El juez resolvía sobre papeles, había perdido contacto con la realidad, con la vida humana, desconocía a las partes, había perdido contacto con la realidad, con la vida humana, desconocía a las partes, sus reacciones, sus actitudes, es decir, todo el elemento vital que le puede permitir al juzgador tener una apreciación de la conducta de las partes, y coadyuvar en sus convicciones al momento de resolver. MORALES GODO (2009)

Posteriormente, como ya lo señalé anteriormente en los antecedentes históricos de la oralidad en el proceso, surgieron en Europa los primeros Códigos que toman como idea central el principio de oralidad: El Código de Procedimientos Civiles de Hannover de 1850, el Código Alemán de 1877, y fundamentalmente el Código Austriaco de 1898.

Nuestra realidad procesal exigía un cambio. La justicia civil requería de una transformación radical y se apostó por el sistema oral. El Código Procesal Civil Peruano de 1992, que entró en vigencia el 28 de julio de 1993, recoge esta tendencia que ha venido luchando desde la segunda mitad del siglo XIX.

El código antes mencionado, incorpora sustancialmente el principio de oralidad, diseñado a través de las distintas audiencias por las que se desenvuelve el proceso. No se limitó a establecer el desarrollo de las pruebas a través de una audiencia, sino que las etapas anteriores, llámese saneamiento y conciliación, también se desarrollan oralmente a través de sendas audiencias. MORALES GODO (2009)

Se puede afirmar el carácter predominante del sistema oral, frente a lo estructurado, porque éste último no es rechazado, ya que tanto la demanda como la contestación y los alegatos opcionales deben plantearse por escrito. Después de todo, ninguno de los dos sistemas tiene expresión completa total, pura, sino de predominancias, y en el caso del Código Procesal de 1992, existe la predominancia del sistema oral. MORALES GODO (2009)

El art. 204° del CPC vigente, establece que la audiencia de pruebas debe ser registrada en audio o video y la excepción es que en el supuesto que no sea posible su grabación, se continúe levantando el acta con la descripción de las incidencias desarrolladas durante la audiencia, sin embargo, dicha excepción viene siendo la regla que se viene aplicando en los diversos órganos jurisdiccionales a nivel nacional.

Por la falta de implementación en las judicaturas de especialidad civil, de las videocámaras o equipos de grabación que permitan registrar en audio las audiencias; por el tema recurrente y creo que principal que es la falta de presupuesto que permita que los despachos de la especialidad civil, puedan ser modernizados, siendo adecuados para poder registrarse las audiencias de pruebas en audio o video conforme se encuentra vigente normativamente y así también, debido a una falta de interés por parte del órgano de gobierno del Poder Judicial, de querer modernizar la justicia civil como se ha venido realizando en otras especialidades, que ha sido dejada de lado, por muchos años, pese a que es la que genera casi la mayor parte de los aranceles judiciales para la tramitación de los procesos judiciales civiles.

Sin embargo, pese a dichos inconvenientes, se tuvo la iniciativa de realizar la primera audiencia civil de pruebas a nivel nacional registrada en audio, sin que para su desarrollo se requieran de recursos adicionales del Poder Judicial.

Se utilizó la Sala de audiencia del Nuevo Código Procesal Penal, específicamente, la Sala de Apelaciones del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho ubicada

en su sede central, la cual brindó las facilidades técnicas para dicha finalidad, pero tuvo que haber una coordinación previa con el Administrador del Módulo Penal, para que no agendaran la fecha en la cual se encontraría desocupado uno de las Salas de audiencias, sin diligencias programadas por parte de los órganos jurisdiccionales en materia penal, lo cual permitió registrar dicha audiencia en audio y posteriormente dicho audio pudo ser ingresado en el Sistema Integrado Judicial para que pueda estar al alcance de las partes del proceso.

La audiencia desarrollada era sobre un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, proceso en el cual tenía que actuarse las declaraciones testimoniales, de tres personas ofrecidas como testigos por la parte accionante con las cuales el mismo acreditaba el cumplimiento de los presupuestos establecidos por el art. 950° del Código Civil para la usucapión del bien inmueble materia de pretensión, realizándose dicho interrogatorio de manera directa, por parte del abogado de la parte proponente de la prueba, sin el empleo de pliego interrogatorio alguno, lo cual permitió que pudiese tener contacto más directo con dicho medio probatorio mediante la observación y permitió profundizar algunos aspectos sobre los cuales había cierta duda en las respuestas escuchadas en la audiencia, generando en mérito a lo actuado una mayor convicción de la futura decisión que se podría emitir en dicho proceso.

Debe resaltarse que el empleo de la grabación por audio de dicha audiencia de prueba, permitió que esta culminara inmediatamente, ya no hubo que esperar tiempo adicional alguno para que se redactara el acta de audiencia en la cual se detalla las incidencias desarrolladas, tales como las preguntas y respuestas, sino que solo se suscribió un acta en la cual se consignaron la concurrencias de las partes procesales y testigos a la audiencia realizada, dado que a su finalización cada uno de los concurrente llevó una memoria USB en el cual se grabó el audio registrado de la audiencia, sin generarse gasto adicional alguno a la Corte Superior de Justicia, asimismo, se encontraba ingresado el audio de la audiencia en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) el cual permite a los justiciables poder acceder a revisar las resoluciones emitidas en el proceso a través de consulta de expedientes en la página web del Poder Judicial.

Conforme lo indica fue importante esta experiencia de la aplicación de audiencias de pruebas registradas en audio conforme a la norma vigente del CPC, porque permitió materializarse la inmediación, al estar el juez en contacto directo con las partes, así como permitir la formulación y reformulación espontánea de preguntas de la información recabada durante el desarrollo de la audiencia, lo cual fue sumamente útil al momento de expedir sentencia en dicho proceso.

Posteriormente se optó por desarrollarse esas audiencias en otros procesos, principalmente aquellos que se tramitaban en la vía sumarísima con el registro en audio, para efectos de emitirse sentencia en el mismo día o en algunos casos durante la misma audiencia conforme a lo regulado por el art. 555° del CPC¹⁴, dado que la idea de la oralidad es que ya no se genere más demora procesal.

Afortunadamente, el Poder Judicial ya ha iniciado una reforma procesal civil, sosteniendo que: “La oralidad civil es un proceso que busca que los juicios de conocimiento en materia civil y

¹⁴ Art. 555. Del CPC- Actuación: “Al iniciar la audiencia, y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el Juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, sin encontrar infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso. El juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba.

A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato.

Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el Juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten. Luego expedirá sentencia.

Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no excederá de diez días contados desde la conclusión de la audiencia.”

comercial se tramiten a través de dos audiencias; la preliminar y de vista de causa, en las cuales se concentran las pruebas conducentes, ambas dirigidas personalmente por el juez, quien es el director del proceso. Las claves del éxito reposan en dos elementos; por un lado, el involucramiento directo del juez en la contienda y por otro, la completa oralización del trámite, ya que las audiencias son videograbadas íntegramente, sin necesidad de producir actas ni registros por escrito”.

Es así, que, como objetivos de la oralidad civil, podemos señalar que los habitantes confíen en un instrumento fundamental para garantizar el bienestar y el desarrollo, de tal modo, un país con solidez institucional, requiere que se cumplan las leyes y para ello es fundamental que la justicia funcione adecuadamente y garantice soluciones rápidas, confiables e imparciales, además de resultar accesible y tener cercanía con la gente. En tal sentido, la premisa de que la oralidad, implementada en un proceso por audiencias, con inmediación y conciliación, transforma un sistema lento e ineficiente en uno más ágil, sencillo y accesible.

El sistema procesal permite obtener una mayor y mejor calidad en la recolección de la prueba que se produce, es decir, genera una mayor concentración procesal, la selección de la prueba procedente en juicio y la celeridad en la sentencia por parte del magistrado.

La oralidad en los procesos civiles, materializa el principio de inmediación del juez. Asimismo, el magistrado cumple una tarea trascendental por el compromiso y colaboración que asume con los profesionales litigantes.

En tal sentido, la inmediatez permite al magistrado conocer a las partes, observar la declaración de testigos, plantear nuevas preguntas, como herramienta fundamental para el arribo de la verdad objetiva. Asimismo, la nueva estructura procesal brinda eficacia, previsibilidad, y seguridad, no solo para los justiciables y litigantes, sino para la sociedad quien es la destinataria del servicio de justicia.

Cabe mencionar que la oralidad civil representa economía procesal, puesto que la disminución de plazos implica una reducción de insumos y costos y publicidad de las decisiones que el juez toma durante la tramitación del proceso.

En lo correspondiente a las etapas del proceso, la oralidad en el proceso civil consta de dos audiencias: la preliminar y la de vista de causa, luego de trabada la Litis. En la primera, el juez escucha a las partes, trata de acercar posiciones y conciliarlas: de no lograrlo, se establece con las partes los hechos a probar y la prueba pertinente que ha de producirse. En la segunda audiencia, se producen efectivamente las pruebas y la causa queda en condiciones de ser resuelta por el juez.

Cabe mencionar, que en la organización de la prueba y en la audiencia de vista de causa, el juez procede como un cabal director del proceso y lo organiza, junto con las partes, teniendo en mira el desenlace final; la sentencia que resolverá el conflicto. Asimismo, la videograbación de audiencias de vista de causa, otorga informalidad, rapidez y confianza en el diálogo, características que no poseen las actas escritas que, en los sistemas tradicionales documentan burocráticamente las posiciones y dichos de las partes.

En tal sentido, la inmediación del juez, permite no solo que éste domine el expediente y los términos de la discusión en profundidad, lo que facilita el dictado de la sentencia final, sino que también les da a los litigantes la confianza cierta de que la justicia, encarnada en la figura del juez, escucha y atiende sus reclamos. Una justicia próxima al litigante, pero, sobre todo, transparente.

Además, el trámite se inicia por Mesa General de Entradas del Poder Judicial, el que opera bajo entorno web e incluye ingreso y la colocación de la carátula mediante un sorteo aleatoria que

garantiza transparencia en el sistema, al tiempo que controla la carga de trabajo en los respectivos juzgados.

La implementación de la oralidad, también implica cambios organizativos y de trabajo, para lo cual tanto magistrados, como funcionarios, empleados y abogados deben ser capacitados para el ejercicio idóneo de las tareas que a cada cual le corresponde desempeñar.

En tal sentido, el STJ tomó la decisión de promover la actualización permanente de jueces, secretarios, agentes judiciales y litigantes en pos de la capacitación informática para hacer más práctica la dinámica del trabajo diario en la gestión de la oralidad. De tal modo, se realizaron talleres sobre plan piloto de oralidad civil para abogados del foro local y capacitación informática.

La oralidad en materia civil, llevada a cabo primero en Ayacucho, posteriormente se ha desarrollado en Arequipa y Lima, por lo que, a continuación, describiré como se ha ido desarrollando este sistema en estas ciudades.

a) Arequipa

Desde diciembre del año 2018, Arequipa ha comenzado a implementar progresivamente la oralidad en la tramitación de sus procesos, por lo que se ha implementado un programa piloto, en el que tres Juzgados Civiles (el Primer, Tercer y Séptimo Juzgado) se ocupan a exclusividad de la etapa trámite del proceso y derivándose los procesos en etapa de ejecución de sentencia que contaban dichos juzgados a los órganos jurisdiccionales restantes (contando la sede central de dicha Corte con 10 juzgados civiles), para que al conocer los procesos en la etapa de trámite del proceso, al contar con una menor carga procesal, puedan dar mayor celeridad a los procesos, programándose sin dilaciones un mayor número de audiencias diariamente para así poder desarrollarse la audiencia de prueba conforme a lo regulado por el art. 204 del Código Procesal Civil, siendo el objetivo principal el de acelerar la solución de los juicios y darle una pronta respuesta a la ciudadanía.

Así, por ejemplo, conforme a los datos de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil del Poder Judicial:

- En los procesos de conocimiento (los más complejos por el monto de la pretensión en litigio) que antes demoraban 78 meses, gracias al sistema de la oralidad ahora tardan 15 meses, es decir, la quinta parte de lo que duraban antes.
- En los juicios sumarísimos (alimentos, desalojo, entre otros) el tiempo de duración disminuyó de 12 a 03 meses en promedio.
- En los procesos abreviados (expropiación, tercera, impugnación de acto o resolución administrativa), que antes demoraban 36 meses, con el nuevo modelo duran 11 meses.
- En los procesos ejecutivos (promovidos en virtud de títulos ejecutivos: sentencias judiciales y laudos arbitrales firmes, actas de conciliación, entre otros) de 05 a 02 meses en promedio.

Los resultados dados a conocer por la Corte Superior de Justicia de Arequipa son prometedores: los tres juzgados civiles orales tuvieron una producción de 196 expedientes durante el mes de enero, lo que supera en un 70% la producción habitual de los juzgados civiles.

El éxito de la oralidad en Arequipa enmarcada en el “Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles” ha permitido su réplica en las Cortes de la Libertad y Lima.

b) Lima

A través de la Resolución Administrativa N° 310-2019-CE- PJ, el Poder Judicial declaró en emergencia a los órganos jurisdiccionales civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima por un plazo de cinco meses, y dictó disposiciones tales como la puesta en funcionamiento del Primer Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima, a partir del 13 de agosto del presente año. Este módulo está conformado por dos juzgados de ejecución, seis juzgados de trámite y un juzgado transitorio de ejecución y descarga.

La estructura del Primer Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima está conformada por el área jurisdiccional integrada por los Jueces de trámite y de ejecución, y sus respectivos asistentes de jueces; luego está la Oficina de Apoyo Judicial, conformada por el área de apoyo de causas, de audiencias, de atención al usuario y técnico administrativo, así como el archivo modular. Por último, está el área de administración del Módulo que cuenta con su personal de apoyo.

Sin perjuicio de la aplicación de la ley adjetiva regulada en el CPC, los abogados y operadores de justicia en general deberán tener en cuenta el protocolo de actuación del módulo de litigación oral, pues regula las reglas aplicables dirigidas a los jueces, a las partes y a los abogados en el trámite de los procesos civiles especialmente en las Audiencias Preliminares, de Pruebas y Únicas.

Se regulan tres tipos de audiencia: la preliminar, la de pruebas y la única. De modo que, en el trámite del proceso, luego de contestada la demanda o declarada en rebeldía, en el caso de los procesos abreviados y de conocimiento, el Juez citará a la celebración de la Audiencia Preliminar cuyo propósito será la de esclarecer los hechos. En la misma se realizará en el saneamiento procesal, la fijación de puntos controvertidos, de hechos no controvertidos, convenciones probatorias, admisión de medios probatorios y se fijará fecha para la audiencia de pruebas, en caso no exista Juzgamiento Anticipado. De observarse este último supuesto, el proceso quedará expedito para ser sentenciado en un plazo no mayor a cinco días.

Para los procesos sumarísimos se realizará la audiencia única que comprenderá el trámite de la audiencia preliminar y el de pruebas.

Con respecto a la audiencia preliminar, el juez deberá hacer de conocimiento a las partes de todos los elementos que componen el conflicto y explicar a priori los riesgos y ventajas de llegar a un proceso judicial, así como en caso la sentencia sea favorable o desfavorable para cada una de las partes.

De manera que como parte de la actividad conciliatoria el juez podrá seguir los siguientes pasos:

- Consultar las posibilidades conciliadoras: Aquí deberá indagar las razones por las que no llegaron a un acuerdo extrajudicial, tratar que ambas partes revelen sus intereses ocultos y expliquen sus posiciones. Además, conocerá la disponibilidad que las partes demuestran para lograr llegar a un acuerdo.
- Proponer fórmulas conciliatorias: Primero deberá poner en conocimiento de las partes algunos precedentes, los cuales deben tener similitud con el caso o con los puntos controvertidos del mismo, y el juez deberá explicar las ventajas de un posible acuerdo y proponer puntos razonables.

Segundo, deberá proponer una solución sobre el conflicto y derecho de las partes, realizando un consenso sobre las modalidades de cumplimiento y sobre la satisfacción de lo autocompuesto.

- Acuerdo total o parcial: El juez aprobará la conciliación total y declarará concluido el proceso. El proceso continuará con relación a los puntos o personas no comprendidas. En el caso que las partes arriben a un acuerdo total o parcial, el juez tiene el deber de homologarlo en el acto con excepción en aquellas audiencias en donde se requiera la intervención del Ministerio Público, casos de menores de edad o personas con capacidad restringida, y este no haya asistido.

Por lo que se refiere a la audiencia de pruebas, se contempla la proposición de los alegatos de apertura momento en el cual los abogados expondrán su teoría del caso, la sustentación de la prueba ofrecida y de exposición de los alegatos finales.

Cabe señalar que en el caso de que los testigos no asistan, no se reprogramará la audiencia, simplemente se prescindirá de dicho medio probatorio. Por otro lado, vale mencionar que no se debe presentar pliegos interrogatorios pues el Juez está facultado para hacer las preguntas que considere convenientes en aras de formar su convicción. Concluida la audiencia, la causa estará expedita para sentenciar en un plazo no mayor a quince días, salvo que el caso sea complejo, en cuyo caso regirán los plazos señalados en el Código Civil.

Como reglas comunes aplicables a las audiencias podemos señalar:

- Las intervenciones no podrán ser sustituidas por escritos.
- El contenido de la grabación podrá ser objetado por las inasistentes hasta 24 horas después de notificadas con la audiencia.
- Está prohibido grabar en audio y/o video, tomar fotografía o registrar de cualquier otro modo, la totalidad o parte de la audiencia.
- La presentación de certificados médicos no origina que se vuelva a convocar la Audiencia Preliminar nuevamente, pues en caso no asista se le otorgará tres días para que presente sus puntos controvertidos.
- Se puede solicitar una copia de las grabaciones o del acta digital, proporcionando los medios necesarios para ello.
- En caso de inasistencia injustificada de las partes a la audiencia, el juez celebrará la audiencia y hará efectivos los apercibimientos y presunciones de ley.

Es por ello que, se puede afirmar que esta nueva forma de resolver los procesos trae también otras ventajas, como la de que el juez está en contacto directo con las partes y las pruebas, además se facilita el cumplimiento del principio de concentración, pues en las audiencias se trata de resolver la mayor parte de los asuntos, y además éstas son públicas, por lo que favorece la transparencia en la solución de los procesos.

Por otro lado, es importante mencionar que el proceso civil oral basado en el sistema de audiencias es un proceso de naturaleza compuesta, que algunos denominan mixto, en la medida que necesita de actos eminentemente escritos, como los de iniciación procesal y otros eminentemente orales como los probatorios. En efecto, en un sistema legal regido por el principio de oralidad, deben redactarse por escrito los actos preparatorios del examen del proceso, tales como la demanda, la

contestación, las excepciones, el ofrecimiento de prueba, aunque las declaraciones contenidas en ellos, para ser jurídicamente eficaces, deben ser oralmente confirmadas en la audiencia.

Sobre lo anterior se pronuncia el maestro Chiovenda afirmando que es equívoca la expresión “proceso mixto” al referirse al proceso oral, pues todo proceso moderno es mixto al admitir la oralidad y la escritura. Pero un proceso mixto debe ser llamado oral o escrito, según el sitio que reserve a la oralidad y a los escritos y, sobre todo, según la manera como esté desenvuelta en él la oralidad, que da eficacia jurídica sólo a lo que se hace en la audiencia y en el que la escritura únicamente constituye el anuncio de lo que va a hacer en dicha audiencia.

A manera de conclusión, podríamos señalar que, la oralidad es una realidad inminente, siendo innegable las bondades que encierra y su superioridad al sistema tradicionalmente escrito y conforme lo expresado por el presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil, el juez supremo Héctor Lama More, se destaca que la oralidad elimina la papelería, da dinamismo al proceso y permite la concentración de actos procesales, lo cual genera celeridad y transparencia, con la oralidad, el juez dirige el proceso, escucha a las partes en audiencia, las interroga, interactúa y decide frente a ellas.

2.4.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DE “AUDIENCIAS ORALES” EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

2.4.5.1. Plan Piloto desarrollado en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura

El 26 de julio de 2018, mediante informe N° 74-2018-GAD-CSJPI/PJ, la Lic. Johana Aparicio Ruiz, solicitó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Dr. Jorge Hernán Ruiz Arias, la aprobación de la propuesta de implementación de buenas prácticas en la gestión del despacho judicial en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura, idea originaria de la Mg. Mary Mercedes Meca Querevalú, jueza del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, en donde se propuso implementar un plan piloto.

Por lo que, luego de la revisión de los actuados y de la evaluación de la propuesta, el 10 de setiembre de 2018, mediante Resolución Administrativa N° 944-2018-P-CSJPI/PJ, la Corte Superior de Justicia de Piura, resolvió aprobar el proyecto denominado “Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión del Despacho Judicial en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura”, seleccionando al Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, a cargo de la Mg. Mary Mercedes Meca Querevalú, como el órgano jurisdiccional que durante el periodo de tres meses ejecutaría el plan piloto, llevándose a cabo la primera audiencia única oral el 03 de diciembre de 2018, teniendo una duración aproximada de 30 minutos, permitiendo así que en el mes de diciembre se puedan programar 108 audiencia a comparación del mes de noviembre donde sólo pudieron programarse 86 audiencia.

Cabe señalar, que actualmente el Juzgado antes mencionado continúa con la aplicación de esta buena práctica, dirigida a hacer más eficiente la actuación de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales dentro de los procesos de alimentos en trámite y ejecución, brindando un servicio de calidad para las partes procesales.

2.4.5.2. Plan Piloto desarrollado en el Juzgado de Paz Letrado de Paita

Luego del resultado positivo alcanzado con el Plan Piloto del proyecto denominado “Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión del Despacho Judicial en los Juzgados de Paz

Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura”, llevado a cabo en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura; el 15 de enero de 2019, en el Facebook oficial de la Corte Superior de Justicia de Piura, se informó lo siguiente: “JUEZA REALIZA AUDIENCIA ORAL Y EMITE SENTENCIA DE ALIMENTOS EN MENOS DE MEDIA HORA”, señalando el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, que dicho plan piloto se aplicaría próximamente en la jurisdicción de la provincia de Paíta y que estaría a cargo de la magistrada Mary Mercedes Meca Querevalú, quien había sido destacada ese Juzgado.

Por lo que, el 16 de enero de 2019, mediante Resolución Administrativa N° 073-2019-P-CSJP/PJ, la Corte Superior de Justicia de Piura dispuso que el proyecto denominado “Implementación de Buenas Prácticas en la Gestión del Despacho Judicial en los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura” sea aplicado en el Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Paíta, implementación que se realizó a partir del 21 de enero del 2019, realizándose audiencias únicas orales en los procesos de alimentos, con una duración de 30 minutos, permitiendo así, programar de 09 a 10 audiencias diarias; teniendo este plan piloto, la misma finalidad con la que se implementó en el Juzgado de Paz Letrado de Piura, teniendo como sus beneficiarios a las demandantes, demandados y abogados litigantes; así mismo los magistrados y auxiliares jurisdiccionales.

2.5. HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis General

La implementación de la oralidad en los procesos de alimentos coadyuvaría a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura, debido a que, lograría que se impartiera justicia de manera más oportuna y se materializaría eficazmente el derecho alimentario de los alimentistas.

2.5.2. Hipótesis Específica

El predominio de la oralidad en los procesos de alimentos, convertiría a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos, toda vez que, garantizarían los derechos fundamentales de las partes procesales, ello en mérito a la aplicación del Interés Superior del Niño.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE

La presente tesis es de carácter cualitativo, porque tiene como finalidad explicar los motivos que hacen necesaria la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura, con la finalidad de analizar las deficiencias que atraviesan los procesos de alimentos donde predomina la escritura y como esta nueva práctica conllevaría a una pronta y eficaz administración de justicia en beneficio de los alimentistas.

3.2. DISEÑO

El diseño de investigación es cualitativa y documental, porque los datos que servirán para poder responder al problema de investigación, en principio lo vamos a obtener de fuentes de información como los “Plan Piloto de Audiencias Orales” ya implementados en dos Juzgados de Paz Letrado de Piura, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el Nuevo Código Procesal Penal y los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral; asimismo, de los distintos actos procesales desarrollados en los procesos de alimentos y artículos relacionados al tema de investigación. Por último, como sujetos de la investigación, serán los jueces y abogados entrevistados para afianzar la probanza de mis hipótesis.

3.3. NIVEL

La presente tesis es de carácter descriptivo, ya que se analizó y recolectó información que permitió desarrollar y determinar que la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos de los Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, va a garantizar una rápida y eficaz administración de justicia contrarrestando la excesiva demora que existe en este tipo de procesos en cuanto a materializar los derechos alimentarios de sus beneficiarios.

3.4. TIPO

El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación fue básico, con la finalidad de demostrar que la oralidad es aplicable en los procesos judiciales, siendo factible la existencia de un proceso donde predomine la oralidad sobre la escritura; considerando que debe garantizarse los derechos fundamentales de los beneficiarios.

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

- Método deductivo, toda vez que se partió del predominio de la escritura en los procesos de alimentos, que conlleva a un proceso caracterizado por la falta de prontitud y eficacia en la materialización de los derechos de los beneficiarios, llegando a plantear la propuesta de la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos a efectos de eliminar todas las deficiencias con las que cuentan estos procesos actualmente.

- Método inductivo, a través del cual se analizó fallos judiciales y diversas opiniones emitidos relacionados a que los procesos de alimentos tienen la calidad de ser un instrumento rápido y eficaz para cautelar los derechos de los alimentistas, a fin de poder aplicar la oralidad en los procesos de alimentos, con el fin de convertir dichos procesos en un instrumento procesal rápido y expeditivo que permita la pronta satisfacción de las necesidades básicas de los alimentistas.

- Método analítico, a través del cual se pudo identificar las principales dificultades y deficiencias que experimentan los procesos de alimentos, analizando si procede la implementación de la oralidad en estos procesos, lo que conllevaría y que buscaría garantizar.

- Método histórico, por medio del cual se efectuó una breve referencia respecto a la oralidad en los procesos judiciales, desde sus inicios y diferentes etapas en la normatividad sustantiva a través de sus fuentes, pudiendo determinar las características que tuvo en su época primigenia hasta la actualidad, esto es su trayectoria en los diferentes periodos de la historia y de esta manera conocer cómo ha evolucionado, pues aplicación se haya sujeta a los cambios que reclama la evolución social.

- Método dogmático, por medio del cual se utilizó la doctrina jurídica relacionada a la oralidad, los procesos de alimentos, derechos fundamentales, según la Constitución Política y los Códigos Laboral, Penal y Civil, para de esta manera dar respuesta al problema planteado. Se efectuó una actividad ordenada dentro de la investigación jurídica encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación...), en mérito a la doctrina de los más destacados autores nacionales e internacionales, las principales expresiones jurisprudenciales con la finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su utilización.

El procedimiento utilizado en la presente investigación fue el de Análisis documental – bibliográfico; a fin de fundamentar científicamente nuestra investigación. Se hizo uso de libros, informes, estadísticas, periódicos, revistas, entrevistas y publicaciones.

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica que se empleó en la presente investigación, fue aquella que privilegió los documentos, a fin de analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de investigación, por lo que se empleó lo siguiente:

- Fichaje: A través del fichaje bibliográfico se compiló todo lo que se ha escrito directa o indirectamente sobre la oralidad en los procesos civiles y de familia, su implementación en materia laboral y penal, sus ventajas y desventajas frente a la escritura, sus críticas y defensas, llegando a tener una postura respecto a la investigación.

- Recolección y Análisis de datos: Por medio de esta técnica se analizará minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación.

- Entrevistas: A través de entrevistas realizadas a jueces y abogados litigantes, logrando afianzar la probanza de mis hipótesis.

La información que se recopiló se procesó de acuerdo a los logros obtenidos mediante las técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la recolección de la información. Asimismo, los datos obtenidos se analizaron detalladamente con la finalidad de dar validez a las hipótesis planteadas.

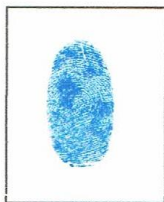
3.7. ASPECTOS ÉTICOS

UNP-VRI-OCIN-DJ-N°.../2019

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: ANA LUCIA VARGAS VALLADARES identificada con DNI N° 76155338, en la condición de Egresada, de la Facultad de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**, Escuela Profesional de **DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS** y domiciliada en **AV. SULLANA NORTE N° 208 AA.HH. PACHITEA**, Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: 973387222, Email: fabiola327@hotmail.com.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. N° 411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley N° 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura 29 de Junio... del 2019

DNI N° 76155338

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD

CAPÍTULO IV: PROBANZA DE HIPÓTESIS

La presente investigación se justificó por cuanto trató de analizar de que forma la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos garantizará una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Piura y determinar si el predominio de la oralidad en los procesos de alimentos, convertiría a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos, que garantizarán los derechos fundamentales de las partes procesales en mérito de la aplicación del Interés Superior del Niño, ya que, actualmente, al predominar la escritura en este tipo de proceso, conlleva a excesivos tardíos y la impregnación de formalismos inútiles que contravienen por sí mismos la naturaleza de estos procesos; generando una demora innecesaria en la administración de justicia e impidiendo a las partes procesales, quienes en su gran mayoría son personas en condición de vulnerabilidad, tener acceso a un sistema de justicia eficiente; fomentando la búsqueda de nuevos mecanismos a efecto de lograr que los procesos sean resueltos con mayor prontitud y eficacia.

Asimismo, teniendo en cuenta la marcada tendencia de que todos los procesos judiciales deben estar orientados por la oralidad, como actualmente se viene desarrollando con el Nuevo Código Procesal Penal, la Nueva Ley Procesal de Trabajo y progresivamente en Derecho Civil; los procesos de alimentos no deben ser ajenos a esto, siendo que esta buena práctica, permite reducir el tiempo de los actos procesales, promoviendo una gestión más eficiente del despacho judicial e impartiendo justicia de manera más oportuna, siendo pues la presente investigación de trascendencia en nuestro ámbito social.

Después de haber desarrollado los capítulos precedentes, en el presente capítulo se analizarán y se demostrarán las hipótesis de la investigación.

4.1. PROBANZA JURÍDICO SOCIAL – DOCTRINAL

Para la presente investigación analizaremos y determinaremos:

Primero: Resulta aplicable la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos porque coadyuvaría a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura, materializando eficazmente el derecho alimentario de los alimentistas:

Respecto a ello, debemos señalar que, una pronta y eficaz administración de justicia, comprende procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones, la restitución de la controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con pleno respeto al debido proceso, la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia de todas las personas en condición de vulnerabilidad y que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional.

Es así que, concordando con lo señalado por MECA QUEREVALU (2019) en su artículo “La Oralidad en los Procesos de Alimentos y su registro en audio”; los procesos de alimentos, si bien con apariencia de procesos simples por su rápida tramitación en la vía sumarísima y en el proceso único, son los procesos con mayor incidencia y demora en su trámite en el Poder Judicial; sumado a ello, estos Juzgados enfrentan dificultades para efectuar una correcta administración de justicia,

existiendo una dilatación excesiva en la tramitación de los procesos de alimentos, generado en gran medida debido al sistema escrito imperante en este tipo de proceso.

Asimismo, la carga procesal en los procesos de alimentos constituye el principal y mayor obstáculo para una pronta y eficaz administración de justicia, afecta directamente al principio de celeridad procesal, el cual no es un principio abstracto, sino por el contrario, es el alma del servicio de justicia, la misma que no debe prolongarse innecesariamente al momento de defender los intereses de las partes procesales, en especial cuando se trata de derechos fundamentales para menores de edad.

Dicho situación se ve reflejada, por ejemplo, en la gran cantidad de procesos que se tramitan en los 3 Juzgados de Paz Letrado de Piura con competencia exclusiva en materia de familia; pues en el 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 ingresaron 868 demandas y en el 2018 ingresaron 987 demandas; en el 3° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 ingresaron 1046 demandas y en el 2018 ingresaron 982 y en el 7° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 ingresaron 358 demandas y en el 2018 ingresaron 819 demandas; por lo que, la sumatoria total de demandas ingresadas en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura en el 2017 sería de 2272 demandas y en el 2018 de 2788 demandas, evidenciando así la excesiva carga procesal con la que cuentan estos Juzgados. Asimismo, se estima que en el 2019 ingresaron un aproximado de 2500 demandas.

GROSSO señala que: “El Principio de Celeridad intenta impedir la prolongación innecesaria de los plazos y eliminar trámites procesales superfluos y/u onerosos” asimismo, considera que “la incidencia del tiempo tiene una garantía genérica en el plazo razonable que se exige para todo tipo de proceso”. En otras palabras, los procesos deberán producirse evitando demoras innecesarias e imprudentes sin otra justificación que la propia actuación, garantizando el derecho al debido proceso; el mismo que tiene un cierto ritmo y necesita que su conclusión resulte oportuna, considerando que toda conducta que altera ese ritmo, prolongando el proceso más de lo razonable, atenta contra la seguridad jurídica.

Por lo que, pensar en la implementación de un sistema oral en los procesos de alimentos solo puede tener su justificación en el mayor reconocimiento del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso. De ahí, la vinculación indispensable de la oralidad con los principios de inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. La relación de estos además resulta bastante singular, pues es de dependencia mutua. Es decir, la oralidad permite la aplicación de tales principios, y, a su vez, requiere de la consagración y respeto de estos para cumplir el objetivo de su implementación que no es otro que una pronta y eficaz administración de justicia.

Así mismo, antes de señalar todo lo que ha implicado la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos, considero conveniente precisar que la implementación de la oralidad en nuestro país comenzó a aplicarse con la entrada en vigencia de manera progresiva en varios departamentos del Nuevo Código Procesal Penal y de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, que han venido dando óptimos resultados en su aplicación en cuanto a la celeridad de los procesos, en los cuales se han acortado los plazos de su tramitación, con la consecuente reducción de la carga procesal que como ya lo señalé anteriormente, es uno de los principales problemas que aqueja a las diversas salas y juzgados del Poder Judicial; generándose con ello un significativo cambio procesal, que actualmente también se viene aplicando progresivamente en el ámbito civil con la creación de los Módulos Civiles Corporativos de Litigación Oral y con la implementación del Plan Piloto de Audiencias Orales en los Procesos de Alimentos.

En lo referente al Plan Piloto de Audiencias Orales en los procesos de alimentos, debemos señalar que dicho proyecto, que es idea originaria de la Dra. Mary Mercedes Meca Querevalú, se implementó con la finalidad de reducir tiempo y actos procesales, ya que propone un procedimiento más ágil y promueve una gestión más eficiente del despacho judicial, impartiendo justicia de manera más oportuna. Es así que, a partir del 03 de diciembre de 2018 se implementó en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura y posteriormente con fecha 21 de enero de 2019 se implementó en el Juzgado de Paz Letrado de Paita, sin embargo, en la actualidad, y habiendo cumplido un año desde su implementación, sólo el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura está desarrollando este Plan Piloto.

Siendo así, resulta necesario analizar cómo eran los procesos de alimentos antes de la implementación del Plan Piloto de las Audiencias Orales y de qué forma dicha implementación garantizará a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura.

Regularmente, en los procesos de alimentos cuando se admite la demanda se señala fecha para audiencia única en un periodo aproximado de 04 a 05 meses, llegado el día de la audiencia única y luego de haber resuelto excepciones y defensas previas (si es que las hay) el juez resuelve por escrito y dependiendo del resultado continúa o no la audiencia, en el caso que resuelva continuar, declara saneado el proceso, invita a la etapa de conciliación, fija los puntos controvertidos, admite o rechaza los medios probatorios, emitiendo una resolución por escrito y dispondrá de la actuación de los mismos; si dado el transcurso del tiempo (las audiencias se programan cada hora) y a la existencia de medios de prueba de actuación inmediata se puede sentenciar, concediéndole el uso de la palabra a las partes y/o abogados para que realicen sus alegatos, los mismos que son transcritos por el juez, luego de ello, si hay tiempo (ya que el juez debe transcribir todos los actos suscitados en audiencia) se procede a emitir sentencia por escrito, elaborando un acta de audiencia única y sentencia de 07 a 08 páginas; caso contrario, se emitirá sentencia dentro del plazo de ley, lo que nunca sucede pues con la carga procesal que enfrentan estos Juzgados la sentencia se emitirá en un plazo de 03 meses aproximadamente. (Dirigirse a apéndice N° 01)

Es por ello que, que se puede afirmar que, las audiencias únicas desarrolladas en los procesos de alimentos han desnaturalizado la correcta aplicación de los principios de oralidad, intermediación y celeridad procesal, por cuanto los magistrados se han convertido en transcriptores (en audiencia) de los documentos obrantes en el expediente judicial y de lo que alegan las partes en audiencia; y las demandantes y demandados en simples espectadores de dichas transcripciones, generando una demora innecesaria en la realización de las audiencias (esto es de una hora), lo que conlleva a programar sólo 06 audiencias diarias, y peor aún, frustrar las ya programadas, generando así que el libro de audiencias esté constantemente saturado y se extienda el plazo para fijar las fechas de audiencias, desnaturalizando así la figura de los procesos de alimentos, pues estos deben ser un instrumento procesal rápido y expeditivo que permita la pronta satisfacción de las necesidades básicas de los alimentistas, contraviniendo también a lo establecido en las normas procesales que regulan el proceso de alimentos.

La situación antes descrita dio origen a la creación de buenas prácticas para agilizar este tipo de procesos, en pro de los alimentistas que en mayor medida son niños y adolescentes; así tenemos como buena práctica el Plan Piloto de Audiencias Orales en los procesos de alimentos y afines, implementado mediante Resolución Administrativa N° 944-2018 emitida por la Corte Superior de Justicia de Piura, iniciada en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura y en el Juzgado de Paz Letrado de Paita; generando así, cambios positivos en la tramitación de los procesos de alimentos.

Así pues, actualmente en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, la audiencia única es grabada en audio, iniciándose con la acreditación de las partes y abogados, luego se declara saneado el proceso (resolviendo de forma oral excepciones o defensas previas si las hubiera), se promueve la etapa de conciliación, se fija los puntos controvertidos, se admite y actúa los medios de prueba, se presenta los alegatos de las partes, quedando todo registrado en audio para luego emitir la sentencia correspondiente, aplicando realmente los principios de inmediación y celeridad procesal, teniendo las audiencias una duración máxima de entre 15 a 20 minutos, permitiendo así programar entre 9 a 10 audiencias diarias, lo que permitió que, en el mes de diciembre de 2018 se pudieran programar 108 audiencias y en el mes de enero de 2019 se programaron 117 audiencias, aumentando la programación de las audiencias en comparación del mes de noviembre de 2018 donde se programó sólo 86 audiencias, acortando así el plazo que transcurría desde la admisión de la demanda hasta la realización de la audiencia, siendo este de sólo 2 meses y no de 5 meses como ocurría anteriormente, conservando así los procesos de alimentos su calidad de instrumento rápido y eficaz para cautelar el derecho alimentario de los alimentistas. Sin dejar de mencionar además que, los procesos que culminaban en conciliaciones, o donde asistía una sola parte a la audiencia, estas podían realizarse en un plazo menor a 10 minutos. MECA QUEREVALU (2019)

Asimismo, el mismo día de la realización de la audiencia, se descarga en el sistema integrado judicial el acta de audiencia con su respectiva sentencia, la cual contendrá los datos de las partes que intervienen y el resumen del desarrollo de la audiencia con sentencia, transcribiendo solo la parte del fundamento que el juez utilizó para fijar la pensión de alimentos (necesidades de quien solicita la pensión de alimentos y posibilidades del obligado a prestar esa pensión), logrando que los litigantes y/o abogados puedan extraer el acta de sus sentencias desde la página web de la Corte Superior de Justicia, en el ítem de consulta de expedientes, logrando reducir el uso de papel bond, en aplicación del principio de economía procesal. (Dirigirse a apéndice N° 02)

Hay que hacer notar que, la regulación de actuaciones orales debe tomar en cuenta la preparación e inmediación que tenga el Juez con la controversia. Y es que de nada sirve que el Juez pueda escuchar a las partes, si es que el mismo no tiene conocimiento del caso, ya que de lo contrario la audiencia será un mero ritual.

Es por ello que, debe tenerse claro cuáles son las facultades tuitivas del juez de familia en los procesos de alimentos, para lo cual debemos recurrir a lo establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil, que alude que en los procesos de familia los principios y normas procesales deben ser flexibilizados, básicamente se refiere a que debe entenderse que dichos procesos, por su especial naturaleza, no pueden estar sujetos a normas estrictas o trabas que impidan administrar justicia desde la perspectiva de la solución a un problema humano, más aún el rol tuitivo que corresponde al propio juzgador.

El juez en nuestro sistema procesal es el director y conductor del proceso, desde el inicio del proceso hasta su finalización, por consiguiente, el legislador le confiere un haz no solamente de deberes y derechos sino también de amplias facultades para el cumplimiento de su noble y delicada función pública: emitir una decisión objetiva y materialmente justa, que haga posible los fines del proceso así como los fines y valores consagrados por la Constitución y las leyes.

La condición de director del proceso es una atribución que tiene el juez, no para darle más poder o importancia, sino para que el proceso sea llevado de la manera más eficiente, respetando las reglas del debido proceso.

Y dado que, con la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos, el juez tiene un rol más activo, ya no se limitará a transcribir lo que ocurre en la audiencia, sino que este deberá haber estudiado previamente el proceso sobre el cual va a desarrollar la audiencia, para efectos de evitar incurrir en errores durante su desarrollo y, al estar en contacto con las partes, podrá recibir datos relevantes y podrá formular las preguntas que estime pertinentes, que le podrán ser de suma utilidad para formarse su futura convicción en la decisión que adopte finalmente. Se comprende por ello que, por un lado, el proceso tenga una estructura con componentes flexibles y, por otro lado, el juez de familia tenga amplias facultades, para hacer efectivos aquellos derechos.

De todo lo antes expuesto, podemos llegar a la conclusión, de que la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos sí coadyuvará a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura, pues logrará que se imparta justicia de manera más oportuna, pues existe una reducción considerable en los tiempos, empero creo que ése no es el único aspecto importante en que se está ganando con la implementación de las audiencias orales, sino también en la oportunidad para la defensa y calidad de la sentencia, esto por la inmediatez que tiene el juez para dictarla, contribuyendo no sólo a una justicia más oportuna, sino de mejor índole.

Se resalta además que este gran paso se cumplirá sin ninguna reforma legislativa, sólo gracias al esfuerzo de jueces y colaboradores judiciales y el apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Sin embargo, cabe dejar claro que la oralidad por sí sola no extirpa de raíz los males de ningún proceso judicial, por lo que la oralidad ha de plantearse como una de las finalidades a satisfacer por una buena reforma procesal, pues va a permitir que se materialice eficazmente el derecho alimentario de los alimentistas en el menor tiempo posible, resaltando y dejando en claro la importancia del derecho alimentario que está en el fin que persigue, el cual consiste en cubrir un estado de necesidad de quien lo solicita, por eso se le denomina derecho de urgencia porque sin los alimentos adecuados las personas no podrían sobrevivir y si hablamos especialmente de niños y adolescentes, se estaría afectando gravemente su integridad.

Es así que, mientras los juicios penales y laborales han avanzado hacia la efectiva oralidad, esta sigue siendo una deuda pendiente en el resto de los procesos. Incorporarla en el área civil (específicamente hablando de los procesos de alimentos) es tanto una garantía de los derechos fundamentales de las partes procesales, reduciendo los tiempos totales de inicio a fin de un caso.

Segundo: El predominio de la oralidad en los procesos de alimentos, convertiría a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos, garantizando los derechos fundamentales de las partes procesales, en mérito de la aplicación del Interés Superior del Niño:

En primer lugar, debemos señalar que el tiempo de duración de los procesos de alimentos es una preocupación constante no solo de los operadores habituales del derecho sino de los propios integrantes de la comunidad, que lo ven como un factor determinante, tanto para decidir si utilizar o no el servicio de la jurisdicción, como cuando se ven constreñidos a someterse a esta. En cualquiera de los dos casos se pretende una solución no solo justa sino también rápida de la controversia, pues no podemos olvidar que los procesos de alimentos, están llamados a garantizar derechos fundamentales de las partes procesales, siendo uno de ellos el derecho alimentario, que en mayor medida es solicitado por niños y adolescentes.

Al respecto, la Constitución Política del Perú impone al Estado y a la comunidad el deber de brindar una especial protección a los niños, adolescentes, a los ancianos y madres en situación de abandono. Si revisamos la normativa relacionada con los temas de familia, tanto en el Código de los

Niños y Adolescentes, el Código Civil y el Código Procesal Civil, podemos llegar a la conclusión de que las normas jurídicas referidas a los derechos, deberes y obligaciones derivados de las relaciones familiares están inspirados en la cláusula compleja del Estado democrático y social de Derecho, todo ello, en base a la aplicación del principio del interés superior del niño.

Es así que, la génesis de la labor judicial en la protección de los derechos fundamentales de las partes procesales que busca una tutela jurisdiccional efectiva, parte de la base esencial de aceptar y comprender los “principios” como pautas rectoras que hacen parte del Derecho.

Decantado pues, que en la actualidad jurídica, los principios generales del derecho, y en general los principios rectores que caracterizan las diferentes instituciones, hacen parte del Derecho, es preciso destacar que la oralidad emerge al mundo jurídico como un principio regulador del procedimiento tanto civil como de familia, así como desde la orilla del proceso penal y laboral, el cual juega un papel importante en la resolución del litigio que conmina a los ciudadanos ante la administración de justicia.

Asimismo, la oralidad es una institución que lleva lustros de debate y análisis, y a partir de allí, se ha discutido si realmente se le puede implementar como un principio utilizado o apropiado por los procesos judiciales para la consecución de un fin que no es otro que procesos rápidos y expeditivos, que respeten y garanticen los derechos fundamentales de los intervinientes, permitiendo fortalecer la confianza de los administrados en el Poder Judicial.

Sin embargo, cabe resaltar que es difícil imaginar hoy en día un proceso judicial que no admita en algún grado la escritura. El modelo oral no exige que se prescinda de la escritura, pero es necesario que esta última asuma el lugar que le corresponda de acuerdo a las condiciones modernas, respondiendo con utilidad a los requerimientos del sistema. Al referir a la oralidad, se está simbolizando mucho más de lo que el simple concepto encierra, concibiéndolo como un verdadero sistema de principios inseparables, al cual es necesario extenderse para comprender la amplitud de la expresión.

Mayoritariamente el dogma procesal considera a la oralidad como una mejor forma de hacer el procedimiento, porque contribuye a su humanización y al acercamiento de la justicia al justiciable, además de garantizar una justicia de mejor calidad que la que se ofrece por los medios escriturales.

Con la oralidad, no con la oratoria, se trata de utilizar la comunicación oral entre los sujetos del proceso, pero sin prescindir de los elementos escritos que puedan dar una mayor firmeza, y hasta solidez entre los sujetos del proceso. La escritura es indispensable precisamente para establecer aquellos que se debe tratar oralmente.

Así pues, cabe dejar en claro que, todos los procesos son mixtos, tienen la característica de orales o escritos, según prevalezca una formalidad sobre otra. Al apuntar a la oralidad o al proceso oral, en realidad no estamos sugiriendo un método totalmente oral, sino un proceso mixto con preeminencia de la oralidad.

En efecto, cuando un país o sociedad deciden pasar de un tipo procesal a otro, como se daría en el caso de los procesos de alimentos, pasando de un proceso predominantemente escrito a otro, donde prevalece la oralidad, existe un obstáculo a superar, el cual es la vigencia de una nueva cultura de litigio judicial, que impone a los operadores del servicio justicia el acostumbrarse a los nuevos paradigmas que regirán al proceso, estos operadores habituados a escrituralizar todos los actos orales, deberán mudar este comportamiento comprendiendo que la tendencia de la reforma, como lo he señalado en el marco referencial, propone oralizar los actos escritos, y no al revés.

En mi opinión, es una necesidad primordial el establecer la oralidad en los procesos de alimentos, como un mecanismo de enjuiciamiento idóneo para la satisfacción de derechos constitucionales, y alcanzar el objetivo primordial en la impartición de justicia familiar, que no es otro que una justa y pronta decisión de los conflictos, logrando procesos más sencillos, breves y eficaces, garantizando derechos fundamentales de los alimentistas y en aplicación del Interés Superior del Niño.

Y es que, el principio del Interés Superior del Niño, conforme lo define BAEZA CONCHA (2001): “Es un conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona menor de edad y, en general de sus derechos que buscan su mayor bienestar”.

Por lo que, el ISN, es base no solo de toda decisión final si también de la aplicación de todos los principios de derecho que se aplican al Proceso Único; por lo tanto, los beneficios que generan los principios de celeridad y economía procesal, se dan en base al ISN, que es el fin último.

Vale decir además que el Principio del Interés Superior del Niño debe indiscutiblemente ser la guía en la toma de cualquier decisión pública o privada, más aún en sede judicial; sin embargo, su sola enunciación no constituye razón ni justificación suficiente de la decisión; peor aún, no puede instituirse como herramienta de la arbitrariedad, sino que, por el contrario, debe ser la consecuencia lógica de la valoración de todo el caudal probatorio aportado al proceso, a partir del cual el Juzgador utilizando su apreciación razonada determinará lo mejor para el niño.

Por eso, al ser los niños y adolescentes personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad frente a los demás, el derecho les brinda protección no solo nacional, sino también internacionalmente.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N° 03744 - 2007 - PHC/TC establece que:

“La atención que los órganos jurisdiccionales, como se desprende del Art. 4° de la propia constitucional debe ser especial en la medida en que un niño o un adolescente no se constituye en una parte más del proceso, sino que posee características singulares y particulares respecto a otras, por lo que, más allá del resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento y respecto de sus derechos durante el proceso. Asimismo, la atención debe ser prioritaria, pues el interés superior del niño y del adolescente tiene precedencia en la actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales en las que no se encuentran comprendidos sus derechos fundamentales”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que la protección a la infancia, máxime si se encuentra en situación de abandono, dentro de la jerarquía interior que existe en la constitución, constituye un valor superior a cualquier otro para el Estado y su colectividad, cuyo fundamento se encuentra previsto en el artículo 1° de la Constitución.

Por tal motivo, el ISN es un principio necesario e ineludible para el Estado, la familia y la sociedad ya que posee un valor superior y especial no solo en el momento de la producción de normas sino también en el momento de interpretarlas.

Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que la oralidad es dinámica, da simplicidad a la tramitación, evita la pesadez o los formalismos de los escritos y, por su naturaleza, acerca a las partes procesales. Con todo ello es posible conseguir un procedimiento expedito y con mayor conocimiento del juzgador respecto de la materia litigiosa.

Sin embargo, y conforme lo señala gran parte de la doctrina, son básicamente tres las condiciones mínimas para conseguir la correcta operación de la oralidad:

- Debe existir el necesario número de jueces debidamente cualificados para hacer efectiva la oralidad, se requiere un dominio de los jueces sobre la materia de familia, para dar solución debida y expedita a los distintos incidentes u otras circunstancias que se produzcan en la audiencia, así como para la pronta resolución de los casos.
- Debe dotarse a los órganos jurisdicciones de todos los recursos materiales que la forma oral requiere, tales como grabadoras, reproductores, medios de almacenamiento, etc., así como de adecuados edificios en los cuales los juzgados cuenten, además de con las oficinas de los funcionarios, con las respectivas áreas para las audiencias.
- Debe darse un cambio de mentalidad, una plena concientización de las ventajas, pero, sobre todo, de las exigencias de la oralidad, en los diferentes sujetos que deben hacerla efectiva, esto es, jueces, funcionarios judiciales y abogados. Estas personas son quienes dan vida al proceso, por lo que, la comodidad que les puede reportar el no cambiar de hábitos puede frustrar la oralidad.

Se hace la precisión y se reitera que lo que se busca con el predominio de la oralidad sobre la escritura en los procesos de alimentos, es que las audiencias orales, conforme se ha implementado con el Plan Piloto de Audiencias Orales, se desarrollen en el menor tiempo posible, donde el juez tenga un contacto directo con las partes y los medios de prueba que se actúan, convirtiendo a la audiencia más dinámica y que permita al juez no distraerse con la mera transcripción de lo que sucede en audiencia sino que exista un contacto directo con las partes, pues se precisa que el trámite de la audiencia única oral es el mismo que establece el Código Procesal Civil o Código del Niño y Adolescentes, con la salvedad que queda registrado en audio casi toda la realización de la audiencia, excepto la etapa de conciliación, permitiendo al juez una mayor concentración en el caso que resuelve.

Asimismo, este predominio de la oralidad, convierte a los procesos de alimentos en instrumentos rápidos y expeditivos, pues permite sentenciar en el acto de audiencia, convirtiendo el proceso de alimentos en dos actos procesales: el admisorio y la audiencia única con su respectiva sentencia, logrando mayor rapidez en los trámites procesales, conllevando a la simplicidad del procedimiento que es considerado breve, pues en comparación con el sistema escrito, el proceso oral es mucho más rápido, enfatizando que la función de juzgar se realice en un corto espacio de tiempo, siendo provechoso para todos aquellos que solicitan tutela jurisdiccional.

A continuación, y con la finalidad de afianzar la probanza de mis hipótesis, realicé las siguientes entrevistas:

a) Entrevista 01:

Entrevista realizada a la Juez Rommy Erika Zapata Benites, quien tiene a cargo el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, que es actualmente el único juzgado que ha implementado las audiencias orales en los procesos de alimentos.

Pregunta 01: ¿De qué forma se tramitan actualmente los procesos de alimentos en su Juzgado?

Respuesta: Los procesos de alimentos se tramitan según lo establecido en el Código Procesal Civil, señalándose fecha para audiencia en el auto admisorio y desde el mes de diciembre de 2018 se vienen desarrollando todas las audiencias de forma oral conforme lo establecido mediante Resolución N° 944-2018-P-CSJPI/PJ.

Pregunta 02: ¿Cuánto tiempo genera la tramitación actualmente de los procesos de alimentos?

Respuesta: Aproximadamente 03 a 04 meses.

Pregunta 03: ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa su Juzgado en la tramitación de los procesos de alimentos?

Respuesta: La demora en la notificación a los demandados en su domicilio real y como problema principal la elevada carga procesal con la que cuentan.

Pregunta 04: ¿En qué consiste la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos?

Respuesta: Consiste principalmente en abreviar los procesos y lograr la celeridad procesal sentenciando en el mismo acto de la audiencia.

Pregunta 05: ¿Cuántas audiencias diarias realiza?

Respuesta: 08 a 09 audiencias.

Pregunta 06: ¿Cuánto tiempo conlleva la realización de las audiencias orales?

Respuesta: 15 a 21 minutos. Excepcionalmente puede durar 05 minutos más si hay pliego interrogatorio o excepciones que resolver en el acto.

Pregunta 07: ¿Le es complicado dictar sentencia en el mismo acto de la Audiencia Única?

Respuesta: No es del todo complicado, pero si amerita su tiempo, más aún cuando se debe realizar el pliego interrogatorio o admitir medios de prueba de oficio. La elaboración de la sentencia resulta complicada por el corto tiempo con el que se cuenta, pero no es imposible. La inmediación colabora a la elaboración de la sentencia, sin embargo, resulta un poco tedioso.

Pregunta 08: ¿Cómo era el papel que desarrollaba como juzgadora antes de la implementación de las audiencias orales y como es ahora?

Respuesta: Antes tenía que transcribir todo el acto de la audiencia y la sentencia en el plazo máximo de 01 hora, por lo que, las audiencias tenían una duración mayor, en cambio, ahora con las audiencias orales, como juzgadora tiene un papel más activo pues las audiencias orales propician la inmediación real del juez con las partes y la celeridad procesal, permitiéndole elaborar una sentencia debidamente motivada que se dicta en el acto y no teniendo que transcribir todo lo ocurrido, pues sólo se elabora un acta con los aspectos más resaltantes de la audiencia.

Pregunta 09: ¿Qué ventajas podría señalar de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: La principal ventaja de la oralidad en estos tipos de procesos es que permite que la tramitación de los procesos se realice en un menor tiempo, más breve, permitiendo la celeridad procesal y económica procesal pues no se entrega copia física del acta de audiencia, pues las partes procesales pueden acceder a ella de forma virtual a través de la página web de la Corte Superior de Justicia.

Pregunta 10: ¿Qué dificultades se presentan en la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Se necesita implementar logística adecuada pues no se cuenta con un sistema de audio, asimismo se requiere de personal, en específico de un asistente de audio y un ambiente adecuado. Por otro lado, a los abogados les falta técnicas de litigación oral, no tienen experiencia y no coadyuvan.

Pregunta 11: ¿Por qué cree usted que no se ha implementado de manera general la oralidad en los procesos de alimentos?

Respuesta: Depende del presupuesto y por la carga procesal elevada que enfrentan los Juzgados.

Pregunta 12: ¿Cree usted que es necesaria una reforma legislativa para la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: No es necesario, pues se realizan las audiencias de acuerdo a lo establecido en el Código, sólo varía el método en que se sustenta el acta (forma oral).

b) Entrevista 02:

Entrevista realizada al abogado Stalin Vladimir Ilich Carrasco Gómez con ICAP N° 4280, abogado litigante en procesos de alimentos.

Pregunta 01: ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa en la tramitación de los procesos de alimentos?

Respuesta: No existe celeridad procesal en este tipo de procesos, generando un grave perjuicio al menor alimentista. Los demandados no toman conciencia de la obligación jurídica y moral con sus hijos, por lo que muchas veces tratan de entorpecer el proceso.

Pregunta 02: ¿Cuánto tiempo genera actualmente la tramitación de los procesos de alimentos?

Respuesta: Depende muchas veces de la competencia territorial del demandado, por lo que, aproximadamente 04 a 05 meses. Debiendo en el auto admisorio notificar al demandado por edictos con la finalidad de tener un proceso más célere.

Pregunta 03: ¿Cuánto tiempo conllevaba antes la realización de las audiencias únicas y cuánto duran actualmente las audiencias únicas orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Antes tenían una duración de 45 minutos a 01 hora; ahora tienen una duración de 20 a 30 minutos, dependiendo de lo que se tenga que merituar en la audiencia.

Pregunta 04: ¿Qué opinión tiene sobre el Plan Piloto de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos desarrollados en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura?

Respuesta: De acuerdo a su experiencia, si es recomendable su implementación, pues se ve reflejados principios como la inmediación y celeridad procesal, permitiendo que los procesos concluyan en menor tiempo.

Pregunta 05: ¿Qué retos ha traído para usted la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Para algunos abogados, principalmente los que no tienen experiencia, resulta complicado oralizar sus alegatos; siendo que esta implementación de la oralidad en los procesos de alimentos genera en los abogados una preocupación por prepararse mejor para una audiencia y así poder sustentar mejor la postura que defienden.

Pregunta 06: ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Su aspecto más positivo es que permite la inmediación del juez con las partes y celeridad procesal.

Pregunta 07: ¿Qué dificultades enfrenta usted con la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Realmente ninguna, pero como lo dije anteriormente, he observado el nerviosismo de algunos colegas que no tienen experiencia en litigación.

Pregunta 08: ¿Qué cree usted que se necesita para la implementación de manera general de la oralidad en los procesos de alimentos?

Respuesta: Se necesita presupuesto para poder implementar estos tipos de proyectos y la facultad de los jueces de aceptar o no este Plan Piloto.

Pregunta 09: ¿Cree usted que la implementación del sistema de oralidad en los procesos de alimentos sería más ventajosa que el actual sistema de escritura que predomina en estos procesos?

Respuesta: Efectivamente es mucho más ventajosa que el actual sistema de escritura, pues se aprecia más celeridad en los procesos de alimentos.

c) Entrevista 03:

Entrevista realizada al abogado Gabriel Derly Torres Flores con ICAP N° 4254, abogado litigante en procesos de alimentos.

Pregunta 01: ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa en la tramitación de los procesos de alimentos?

Respuesta: La carga procesal que argumentan, por lo que, para la tramitación de cada acto, depende del seguimiento que se le haga o del orden de la fecha respecto a los demás procesos también en trámite.

Pregunta 02: ¿Cuánto tiempo genera actualmente la tramitación de los procesos de alimentos?

Respuesta: En promedio 06 a 08 meses, dependiendo el tiempo en que se señale fecha para audiencia, el seguimiento o impulso de alguna de las partes.

Pregunta 03: ¿Cuánto tiempo conllevaba antes la realización de las audiencias únicas y cuanto duran actualmente las audiencias únicas orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Antes tenían una duración de una hora y hasta hora y media; ahora tienen una duración de 30 minutos máximo.

Pregunta 04: ¿Qué opinión tiene sobre el Plan Piloto de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos desarrollados en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura?

Respuesta: Es una innovación favorable, sobre todo porque se hace más corta la duración de la diligencia, además en todas las audiencias que he ido se ha sentenciado en el acto.

Pregunta 05: ¿Qué retos ha traído para usted la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Que el cliente verifique en tiempo real el proceder del abogado, así como el conocimiento de la estrategia planteada, además de lo mismo de la otra parte.

Pregunta 06: ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Que, así como la implementación de las audiencias orales, el proceso en sí también tendría como consecuencia el empleo de menor tiempo.

Pregunta 07: ¿Qué dificultades enfrenta usted con la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Respuesta: Ninguna, porque todo se desarrolla en menor tiempo, sin necesidad de trámites innecesarios.

Pregunta 08: ¿Qué cree usted que se necesita para la implementación de manera general de la oralidad en los procesos de alimentos?

Respuesta: Su procedencia en la norma procesal y formalidad correspondiente.

Pregunta 09: ¿Cree usted que la implementación del sistema de oralidad en los procesos de alimentos sería más ventajosa que el actual sistema de escritura que predomina en estos procesos?

Respuesta: Si, porque con las audiencias orales existe una verdadera celeridad procesal en este tipo de procesos y se sentencia en el acto.

Al respecto, podemos concluir que la principal dificultad que enfrentan los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura es la abundante carga procesal que manejan, lo que conlleva a que la tramitación de los procesos de alimentos se prolongue por encima de los plazos establecidos en la ley.

Situación que ha mejorado considerablemente con la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos, convirtiéndolos en procesos rápidos y eficaces que garantizan una pronta y eficaz administración de justicia y se materializa los derechos fundamentales de sus beneficiarios.

La experiencia del “Plan Piloto de Audiencias Orales en los Procesos de Alimentos” en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura es un claro ejemplo de una estrategia innovadora a la hora de la generación de una reforma profunda en un sistema judicial, aún sin reformas legales, modificando las prácticas de la gestión judicial, por lo que, la implementación de esta buena práctica constituye un gran aporte por racionalizar, garantizar y hacer expeditivo el derecho a la tutela judicial efectiva en los procesos de alimentos en trámite y ejecución porque los procesos con predominio de la oralidad, significan una garantía para el usuario de justicia.

Es por ello que, una de las soluciones para lograr mayor celeridad en este tipo de procesos es que se efectivice el proceso de audiencias orales en los procesos de alimentos como bien se ha señalado en el VII Encuentro Nacional de Evaluación de Resultados del PpR 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” Año Judicial 2019, en el cual se han evaluado los indicadores de desempeño y ejecución del presupuesto, así como las proyecciones para el ejercicio 2020, evento donde además se realizó la premiación del concurso "Reinventando mi Despacho Judicial 2019" donde la Corte Superior de Justicia de Piura obtuvo el primer lugar con el plan piloto: Audiencias orales con sentencia en los procesos de alimentos y afines, del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, y al haber pasado ya un año de su implementación y apreciado sus buenos resultados debería generalizar su aplicación, pues como ya se ha descrito anteriormente, las bondades de la oralidad son innegables.

CONCLUSIONES

1. Los procesos de alimentos presentan dificultades y deficiencias que, en la actualidad, conllevan a que las demandantes, en su mayoría madres solteras en representación de sus menores hijos, se enfrenten a los ritualismos de un procedimiento meramente escrito, donde no se materializa de manera efectiva sus derechos fundamentales.

2. Con Plan Piloto de implementación de audiencias orales en los procesos de alimentos del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, se logró procesos que concluyan en tiempo y forma oportuna, garantizando el cumplimiento de las prestaciones y salvaguardando la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y adolescentes.

3. El Juez en las audiencias únicas orales puede percibir el sentir de las partes sin distracción alguna, desaparece el juez transcriptor y se convierte en un juez humanitario, activo en el proceso, al igual que las partes y abogados, desaparece el monólogo.

4. La oralidad muestra celeridad y eficacia en los procesos de alimentos, proyecta mayor seguridad jurídica al darse de forma casi inmediata la resolución del conflicto, por cuanto las partes se encuentran presentes y pueden aportar la sustanciación para los razonamientos oportunos, permitiendo que se realicen los principios de inmediación y celeridad procesal.

5. El Interés Superior del Niño es una pauta que debe observarse para proteger los derechos fundamentales de la persona, pues busca garantizar el respeto de los derechos de los niños y adolescentes, siendo la guía indiscutible en la toma de cualquier decisión, especialmente en los procesos de alimentos.

RECOMENDACIONES

1. La comisión encargada del seguimiento del proyecto de Implementación de Audiencias Orales en los Procesos de Alimentos deberá evaluar mensualmente la marcha de cada juzgado, con indicadores de avance para verificar si los resultados iniciales van en el sentido esperado y mantener alineadas las acciones y expectativas de jueces, funcionarios y abogados; con el fin de registrar evidencia anecdótica y empírica para ratificar o rectificar los resultados que arrojan los indicadores, y detectar obstáculos a resolver, para mantener el avance.

2. La Corte Superior de Justicia de Piura deberá disponer el apoyo inmediato en materia de infraestructura y tecnología, equipando salas de audiencia con equipos de grabación en los Juzgados de Paz Letrado de Familia.

3. Capacitar a los jueces de distintos departamentos judiciales de la Provincia de Piura en dinámicas de oralidad y grabación de audiencias. En los talleres de capacitación se debe estimar la carga de trabajo que significa para cada juez tomar audiencias orales, para analizar su viabilidad.

4. Los abogados deben entender las reglas básicas de la retórica, de partición del discurso, de la preparación del tema, de la ordenación de los argumentos, de la exposición de los mismos, de la puesta en escena. Un efecto inmediato de la adopción de la oralidad, obliga a los abogados a acumular experiencias en el uso de la palabra, antes de poder realizar su trabajo.

5. Solicitar al Colegio de Abogados de Piura la programación de seminarios dirigidos a abogados, estudiantes de derechos y empleados de la función judicial sobre la aplicación del procedimiento oral en materia civil.

6. Realizar la divulgación progresiva entre los abogados y otros jueces de las características y ventajas de la oralidad civil, con exposiciones en los colegios de abogados y de magistrados de los distintos departamentos judiciales, buscando que esta experiencia sea replicada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABANTO TORRES, J. D. (18 de Septiembre de 2019). *LA LEY*. Obtenido de LA LEY: <https://laley.pe/art/8555/lama-more-la-litigacion-oral-requiere-que-el-abogado-exponga-su-caso-de-forma-sencilla-directa-y-ordenada>
- ABANTO TORRES, J. D. (27 de junio de 2019). *LA LEY*. Obtenido de LA LEY: <https://laley.pe/art/8127/entrevista-al-juez-carlos-polanco-gutierrez-coordinador-del-proyecto-piloto-para-la-modernizacion-del-despacho-judicial-en-los-juzgados-civiles>
- AGUILAR LLANOS, B. (2016). *Tratado de Derecho de Familia*. Lima: LEX & IURIS.
- AGUILAR LLANOS, B. (2018). *Causales de Separación y Divorcio un Enfoque Doctrinario y Jurisprudencial*. Lima: Gaceta Jurídica.
- AMPUDIA BELLING, M. (6 de abril de 2019). *Peruweek.pe*. Obtenido de Peruweek.pe: <https://www.peruweek.pe/litigacion-oral-en-la-nueva-ley-procesal-del-trabajo-ley-29479-beneficios-ventajas-analisis-y-propuestas-de-mejora/>
- ARRUNÁTEGUI CHÁVEZ, Á. (12 de Abril de 2011). *Revista Vinculando*. Obtenido de http://vinculando.org/documentos/el_razonamiento_juridico_del_derecho_alimentario.html
- BAEZA CONCHA, G. (2001). El Interés Superior del Niño: Derecho de rango constitucional, su recepción en la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia. *Revista Chilena de Derecho*, 8.
- BARRIOS GONZÁLES, B. (2016). Manual Práctico de Litigación Oral y Argumentación. En B. BARRIOS GONZÁLES, *Manual Práctico de Litigación Oral y Argumentación* (pág. 215). Azcapotzalco: UBIJUS.
- BERMUDEZ, V. H. (1995). La oralidad y el proceso penal. *Revista Uruguaya de Derecho Procesal*, 277.
- BERRÍOS RODRÍGUEZ, D. S. (2018). *La unificación de los Procesos de Familia en el Perú*. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, (Facultad de Derecho). Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- CABANELAS DE TORRES, G. (2003). *Diccionario Jurídico Elemental*.
- CABANELLAS DE TORRES, G. (1972). *Diccionario de Derecho Usual*. Buenos Aires: Heliasta S.R.L.
- CAMARGO ACOSTA, Johan S. (2010). *Código Procesal Civil Comentado - Tomo I*. Arequipa: ADRUS.
- CAMPOY ROBLES, A. M., RODRIGUEZ VALERA, F., & CABADA JACOBO, J. P. (2016). *Hacia los Juicios Orales en Materia Familiar en Sonora*. Revista de Investigación Académica sin Fronteras, (División de Ciencias Económicas y Sociales), Sonora.
- CAPPELLETTI, M. (1972). La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil. En M. CAPPELLETTI, *La Oralidad y las Pruebas en el Proceso Civil* (pág. 482). Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europeas - América.

- CILLERO BRUÑOL, M. (2017). El Interés Superior del Niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos de los niños. *El Interés Superior del Niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos de los niños*.
- Consejo General del Poder Judicial. (2016). *Real Academia Española*. Obtenido de Diccionario del español jurídico: <http://www.rae.es/>
- CUVILLO, A. Á. (2017). *Campus Virtual - Universidad de Cádiz*. Obtenido de https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1271/mod_resource/content/1/Procesal3.pdf
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. (2017). *El Proceso de Alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos*. Lima: Defensoría del Pueblo.
- Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". (2007). *Alimentos en el Derecho de Familia*. Colombia: Grafi-Impacto Ltda.
- ESPINOZA GARCÍA, L. M. (2008). *Principios Especiales del Derecho Procesal de Familia*. Universidad de Costa Rica.
- FAIRÉN GUILLÉN, V. (1992). *Teoría General del Derecho Procesal*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- HERNÁNDEZ AGUILAR, Á. (2004). Proceso Civil y Oralidad en Costa Rica. *Sistemas Judiciales*, 131.
- HERRERA GUERRA, P. (13 de Agosto de 2019). *EL PERUANO*. Obtenido de EL PERUANO: <https://elperuano.pe/noticia-litigacion-oral-generara-procesos-mas-transparentes-82407.aspx>
- HINOSTROSA MINGUEZ, A. (2012). *Comentarios al Código Procesal Civil - Tomo I*. Lima: IDEMSA.
- HINOSTROZA MINGUEZ, A. (2012). *Comentarios al Código Procesal Civil - Tomo II*. Lima: IDEMSA.
- HINOSTROZA MINGUEZ, A. (2012). *Comentarios al Código Procesal Civil - Tomo III*. Lima: IDEMSA.
- JARA, R. S., & GALLEGOS, Y. (2014). *Manual de Derecho de Familia*. Lima: JURISTA EDITORES.
- LEDESMA NARVÁEZ, M. (2008). *Comentarios al Código Procesal Civil - Tomo I*. Lima: Gaceta Jurídica.
- LÓPEZ CONTRERAS, R. E. (2013). Interés superior de los niños y niñas: Definición y contenido. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 51-70.
- LÓPEZ GONZÁLES, J. A. (2001). Teoría General de la Oralidad en el proceso civil. En J. A. LÓPEZ GONZÁLES, *Teoría General de la Oralidad en el proceso civil* (pág. 97 a 101). San José, Costa Rica.
- MORALES GODO, J. (2009). La Oralidad en el Código Procesal Civil Peruano. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, 3(1), 22. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocetal/article/view/2068>
- NAKASAKY SERVIGÓN, C. (2004). Juicio Oral. *GACETA JURÍDICA*, 283.

- NEYRA FLORES, J. A. (2005). Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el Nuevo Modelo Procesal Penal. *Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el Nuevo Modelo Procesal Penal*. Lima, Lima, Perú: Academia de la Magistratura.
- PARMA, N. (2016). La oralidad en el proceso civil. *Revista RyD República y Derecho*, 15.
- Poder Judicial del Perú. (2007). *Poder Judicial del Perú*. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/>
- POLANCO GUTIÉRREZ, C. E. (2019). ¿Es posible la litigación oral en materia civil? *Instituto Pacífico*, 56.
- PRADO, R., & Francisco. (28 de Junio de 2018). *AGNITIO*. Obtenido de <http://agnitio.pe/articulo/al-cesar-lo-que-es-del-cesar-el-principio-de-oralidad-en-el-proceso-civil-peruano/>
- PULIDO CARDONA, J. H. (Julio de 2016). *Impacto de la Oralidad Civil y de Familia en los Derechos Fundamentales de los Intervinientes en el Distrito Judicial de Manizales entre los años 2011 y 2014*. Universidad de Manizales, (Facultad de Derecho), Manizales.
- REYNA ALFARO, L. M. (2016). La Oralidad en el Nuevo Modelo Procesal Penal. *La Oralidad en el Nuevo Modelo Procesal Penal*. Lima, Perú: Academia de la Magistratura.
- REYNA VARGAS, D. (Marzo de 2017). *La Oralidad en el Proceso Civil Peruano*. Universidad de Piura, (Facultad de Derecho), Lima.
- RIOS MOSTAJO, H. B. (2016). Litigación Oral. *Litigación Oral*. Lima, Perú: Academia de la Magistratura.
- RÍOS, N. R. (2013). *Derecho alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el proceso*. Obtenido de [file:///C:/Users/ANA%20LUCIA/Downloads/6433-24829-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/ANA%20LUCIA/Downloads/6433-24829-1-PB%20(3).pdf)
- RUEDA FERNÁNDEZ, S. C. (2011). La oralidad en el proceso laboral. *REVISTA JURÍDICA*, 3.
- SUNTAXI PAREDES, V. P. (2014). *La Implementación de la Oralidad en el Procedimiento Civil*. Quito: Universidad Central del Ecuador.
- TARUFFO, M. (2009). Páginas sobre justicia civil. En M. TARUFFO, *Páginas sobre justicia civil* (pág. 600). Madrid: Marcial Pons.
- UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA. (2010). Manual de Derecho Procesal Civil. *Manual de Derecho Procesal Civil*. Bogotá, Bogotá, Colombia: U.C.C.
- VÁSQUEZ LÓPEZ, L. (2001). *Formulario Práctico de Familia*. San Salvador, El Salvador : LIS.
- VILCACHAGUA, A. P. (2017). EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. (A. D. MAGISTRATURA, Ed.) Lima. Obtenido de <http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/588/MANUAL%20CURSO%20INTER%20c3%89S%20SUPERIOR%20DEL%20NI%c3%91O%20%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- VILLALBA BERNIE, P. D. (12 de mayo de 2007). La Oralidad como eje para la Reforma del Proceso Civil. *La Oralidad como eje para la Reforma del Proceso Civil*. Paraguay.

ANEXOS

Anexos 1. Entrevista 01

Entrevista realizada a la Juez Rommy Erika Zapata Benites, quien tiene a cargo el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura, que es actualmente el único juzgado que ha implementado las audiencias orales en los procesos de alimentos.

Pregunta 01: ¿De qué forma se tramitan actualmente los procesos de alimentos en su Juzgado?

Pregunta 02: ¿Cuánto tiempo genera la tramitación actualmente de los procesos de alimentos?

Pregunta 03: ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa su Juzgado en la tramitación de los procesos de alimentos?

Pregunta 04: ¿En qué consiste la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos?

Pregunta 05: ¿Cuántas audiencias diarias realiza?

Pregunta 06: ¿Cuánto tiempo conlleva la realización de las audiencias orales?

Pregunta 07: ¿Le es complicado dictar sentencia en el mismo acto de la Audiencia Única?

Pregunta 08: ¿Cómo era el papel que desarrollaba como juzgadora antes de la implementación de las audiencias orales y como es ahora?

Pregunta 09: ¿Qué ventajas podría señalar de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Pregunta 10: ¿Qué dificultades se presentan en la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Pregunta 11: ¿Por qué cree usted que no se ha implementado de manera general la oralidad en los procesos de alimentos?

Pregunta 12: ¿Cree usted que es necesaria una reforma legislativa para la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Anexos 2. Entrevista 02

Entrevistas realizadas a los abogados Stalin Vladimir Ilich Carrasco Gómez con ICAP N° 4280 y Gabriel Derly Torres Flores con ICAP N° 4254, abogados litigantes en procesos de alimentos.

Pregunta 01: ¿Cuáles son las principales dificultades que atraviesa en la tramitación de los procesos de alimentos?

Pregunta 02: ¿Cuánto tiempo genera actualmente la tramitación de los procesos de alimentos?

Pregunta 03: ¿Cuánto tiempo conllevaba antes la realización de las audiencias únicas y cuanto duran actualmente las audiencias únicas orales en los procesos de alimentos?

Pregunta 04: ¿Qué opinión tiene sobre el Plan Piloto de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos desarrollados en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura?

Pregunta 05: ¿Qué retos ha traído para usted la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Pregunta 06: ¿Qué aspectos positivos puede resaltar de la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Pregunta 07: ¿Qué dificultades enfrenta usted con la implementación de las audiencias orales en los procesos de alimentos?

Pregunta 08: ¿Qué cree usted que se necesita para la implementación de manera general de la oralidad en los procesos de alimentos?

Pregunta 09: ¿Cree usted que la implementación del sistema de oralidad en los procesos de alimentos sería más ventajosa que el actual sistema de escritura que predomina en estos procesos?

Anexos 3. Matriz de Consistencia

Título del Proyecto:

“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE FAMILIA DE PIURA”

Nombre del Tesista:

ANA LUCIA VARGAS VALLADARES

	PREGUNTAS	HIPÓTESIS	OBJETIVO
General	¿La implementación de la oralidad en los procesos de alimentos coadyuva a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura?	La implementación de la oralidad en los procesos de alimentos coadyuvaría a una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgados de Paz Letrado de Familia de Piura, debido a que, lograría que se impartiera justicia de manera más oportuna y se materializaría eficazmente los derechos alimentarios de los alimentistas.	Analizar de que forma la implementación de la oralidad en los procesos de alimentos garantizará una pronta y eficaz administración de justicia en los Juzgado de Paz Letrado de Familia de Piura.
Específica	¿El predominio de la oralidad en los procesos de alimentos convierte a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos?	El predominio de la oralidad en los procesos de alimentos, convertiría a estos procesos en instrumentos procesales rápidos y expeditivos, toda vez que, garantizarían los derechos fundamentales de las partes procesales, ello en mérito a la aplicación del Interés Superior del Niño.	Determinar de qué manera el predominio de la oralidad sobre la escritura en los procesos de alimentos garantizará que estos procesos sean rápidos y expeditivos.

Anexos 4. Cuadro de Cronograma de Ejecución

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
AÑO	2019							
ACTIVIDADES	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ETAPA DE ANÁLISIS - METODOLÓGICA								
ANÁLISIS PREVIO	X							
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	X							
RECOPIACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DATOS	X							
CLASIFICACIÓN DE DATOS	X							
ANÁLISIS CRÍTICO E INTERPRETATIVO	X							
ETAPA ELABORATIVA								
ANÁLISIS METÓDICO		X						

REDACCIÓN INICIAL		X						
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO		X						
APROBACIÓN DEL PROYECTO			X	X				
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN					X			
SEGUNDA REDACCIÓN					X			
PREPARACIÓN BIBLIOGRÁFICA, CITAS, ANEXOS Y CUADROS ESTADÍSTICOS						X		
CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE LA TESIS							X	
SUSTENTACIÓN								X

Anexos 5. Presupuesto

Para la elaboración de la presente investigación y su correspondiente ejecución se han proyectado los siguientes cuadros de recursos y presupuestos de gastos, los mismos que detallo a continuación.

RUBRO	CONCEPTO	COSTO
BIENES	IMPRESORA EPSON	S/. 500.00
	CARTUCHOS Y TINTAS	S/. 300.00
	HOJAS A4 (SIMILARES)	S/. 100.00
	MATERIAL DIDÁCTICO	S/. 250.00
SERVICIOS	PASAJES Y VIATICOS	S/. 200.00
	SERVICIO DE COPIAS	S/. 100.00
	SERVICIO DE TIPEO	S/. 100.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	S/. 200.00
	INTERNET E IMPRESIONES	S/. 350.00
ASESORAMIENTO		S/. 3800.00
	TOTAL	S/ 5,900.00

1.1. FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN	S/. 5,900.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS

APÉNDICES

APÉNDICE 01

Se adjunta modelo de acta de audiencia única del proceso de alimentos N° 8-2018, donde se puede apreciar que el acta contiene 06 páginas, pues la juez debía transcribir todo lo que ocurría en la audiencia.

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Calle Tumbes

EXPEDIENTE : 00008-2018-0-2001-JP-FC-03

MATERIA : ALIMENTOS

JUEZ : MECA QUEREVALU MARY MERCEDES

ESPECIALISTA : FARFAN ESPINOZA LIDIA

DEMANDADO : SEMINARIO ATO, MANUEL FERNANDO

DEMANDANTE : CASTRO RIVAS, SILVIA ANALI

ACTA DE AUDIENCIA ÚNICA

En la ciudad de Piura, siendo las 3:30 PM, del 25 de Abril de 2018, ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, que despacha La Señora Juez MARY MERCEDES MECA QUEREVALU, asistido por la Secretaria Judicial que da cuenta, se hizo presente la demandante SILVIA ANALI CASTRO RIVAS con DNI N°40575295, asesorada de su Abogado Christiam Gabriel Alamo Eto con Reg. CALL Nro. 004156, asistió también el demandado MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO con DNI N° 02656912 asesorado por su Abogado Manuel Alejandro Flores Jimenez con Reg. Icap Nro. 4358, con el fin de realizar la audiencia de Saneamiento, Conciliación y Pruebas y sentencia en el expediente N°8-2018 sobre PROCESO DE ALIMENTOS; la que se desarrolló de la siguiente manera.-

I. ETAPA DE SANEAMIENTO PROCESAL. - RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE (07). - AUTOS, VISTOS; y, CONSIDERANDO. - PRIMERO. - Por el saneamiento procesal, el juez realiza una nueva revisión de los aspectos formales del proceso, a fin de que éstos no obsten ni retrasen el pronunciamiento sobre el fondo del mismo. SEGUNDO. - Para que exista una relación jurídica procesal válida se exigen ciertos requisitos esenciales denominados presupuestos procesales, que son los siguientes: competencia, capacidad procesal y requisitos de la demanda. TERCERO. - En el presente caso se encuentran los requisitos antes indicados y las condiciones de la acción; por lo que, no habiéndose deducido excepciones ni defensas previas, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1) artículo cuatrocientos sesenta y cinco del Código Procesal Civil, SE RESUELVE. - DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL VÁLIDA, y en consecuencia SANEADO EL PROCESO.

II. ETAPA DE CONCILIACIÓN. - La misma que no se puede realizar por que las partes se mantienen en sus posiciones.

III. ETAPA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. –

- Determinar las necesidades del menor alimentista: MAIKI MARCELO SEMINARIO CASTRO.
- Determinar las posibilidades económicas del demandado MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO y las cargas familiares con las que cuenta para fijar la pensión alimenticia.

IV. ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS. - Se admiten los siguientes medios Probatorios. - Por la parte demandante. -

- Copia del DNI del menor de fojas 03

- Acta de Nacimiento del menor MAIKI MARCELO SEMINARIO CASTRO de fojas 04. - CONSTANCIA DE ESTUDIOS “COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA DE PIURA” de fojas 05.
- Deuda detallada del cliente de fojas 06.
- Comprobantes de pago de fojas 07 Y 08.

Por parte del demandado. - Tiene la calidad de rebelde.

RESOLUCION NÚMERO OCHO (08). -

AUTOS, VISTOS. - Dado cuenta con la presente causa; y CONSIDERANDO. -

PRIMERO: Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, conforme lo establece el artículo 188 del CPC; asimismo, el artículo 194° del Código Procesal Civil confiere a los jueces la facultad de ordenar pruebas de oficio, señalando que cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales que considere conveniente.

SEGUNDO: Siendo así, si bien el demandado ha sido declarado rebelde, tenemos que el en esta audiencia se ha apersonado por lo que con la finalidad de emitir una sentencia acorde a derecho se le realizara un pliego interrogatorio.

SE RESUELVE. - ADMITIR como medio probatorio de oficio:

- Pliego interrogatorio al demandado.

V. ETAPA DE ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS. -

De la demandante. - Los documentales se tendrán presentes al momento de sentenciar.

Del demandado. - Pliego de preguntas:

- 1.- PARA QUE DIGA CUANTOS AÑOS TIENE? Dijo: 87 años de edad
- 2.- PARA QUE DIGA SI UD PERCIBE OTROS INGRESOS ECONOMICOS APARTE QUE SU PENSION D EJUBILACION? Dijo: No, mis hijos me ayudan.
- 3.- PARA QUE DIGA SI CUENTA CON HIJOS MENORES DE E DAD? Dijo. No.
- 4.- PARA QUE DIGA SI ES QUE LE HA VENIDO ASISTIENDO AL ALIMENTISTA CON UNA PENSION DE ALIMENTOS? Dijo: si, pero ella después me dijo que el niño no era mi hijo y que fuimos a un Notario, enseña recibos, recetas, así como menciona que hace unos días le prestó a la demandante s/.1200.00 soles por que fue con el niño para un negocio, el niño no sabe que soy su padre, cuando ellos fueron la señora no le dijo que era mi hijo.
- 5.- PARA QUE DIGA CUALES SON SUS GASTOS PERSONALES? Dijo: pago de habitación s/.300.00 soles, ocupo un garaje pago s/.120.00 soles, a la persona que me lava le paso s/.300.00 soles, tengo préstamo en el Banco de la Nación pago cuotas de s/.137.00 soles por dos años, así como que pertenezco a una asociación s/.350.00 soles, pago el seguro s/.100.00, mi comida s/.500.00 al mes, enfermedad he gastado mucha plata, pago cable, teléfono, vivo solo
- 6.- PARA QUE DIGA A CUANTO ASCIENDE EL 20% DE ASIGNACION ANTICIPADA QUE SE LE HA FIJADO? Dijo: asciende a s/.473.00 soles, ya me quedo casi.

7.- PARA QUE DIGAS SI TIENE QUE AGREGAR ALGO? Dijo: Yo nunca he tenido una realicen con el niño, ella dice que no soy su padre.

VI. ETAPA DE ALEGATOS. - En este acto se invita a las partes procesales a oralizar sus alegatos, indicando. -

Alegatos de la demandante. -

En el Pte. proceso se precisa que se ha realizado hasta la fecha con dilaciones innecesarias y emitiendo resoluciones sin tener un conocimiento real de autos situación que tuvo que hacer remediada a través de una nulidad habida cuenta que el juzgado desestimo la asignación anticipada alegando que el hijo no se encontraba reconocido craso error, y más que error, la defensa técnica precisa que hay un horror de por medio al no haber verificado que el menor se encontraba debidamente reconocido, lo que obviamente origino que aproximadamente por tres meses no se ha otorgado una asignación anticipada del medio de prueba de oficio ordenado por este juzgado, consideramos con la finalidad de validar la formula conciliatoria, se tiene que el demandado cuenta con una pensión de s/.2500.00 soles, no tiene carga familiares, excepto las personales y propias para su subsistencia no habiendo pues también acreditado menos aun sustentado en forma documental las otras supuestas carga indicadas en esta audiencia por tanto no pueden ni mucho menos deberían ser estimadas por este juzgado, lo que está debidamente acreditado y probado la edad del menor los gastos, las necesidades del menor las mismas que no han sido cubiertas en ningún porcentaje desde su nacimiento hasta la tardía asignación anticipada emitida por este despacho, debe evaluarse también que el monto de las Asignación anticipada equivalente a un monto de s/.480.00 soles no cubre ni siquiera el 25% en promedio de las necesidades básicas del menor, no existe una media ni una proporción, ni un monto que este fijado para un juzgado en particular y así emitir sentencia toda vez que la norma procesal adjetiva como la sustantiva establece pues que en cuanto a la pensión de alimentos estas deben ser emitidas y evaluadas conforme a las necesidades del menor y a las posibilidades del obligado por ello a manera de alegatos nos sorprende la formula conciliatoria y la precisión al monto que sería lo que el juzgado otorga, Sra. juez el objeto de un proceso de alimentos es determinar una pensión y que esta cubra las necesidades del menor y que de la misma forma y que se tramitado con la diligencia , probidad y dilaciones, situaciones que no se han venido dando en el trámite de este proceso, teniendo en consideración la posición de la demandante en la etapa conciliación mantenemos la misma en el sentido que su despacho le declare fundada la demanda y le otorgue una pensión no menor al 40% de los ingresos del demandado en su calidad de pensionista jubilado del Ministerio De Agricultura.

Alegatos del demandado. -

Al momento de decidir debería tenerse en cuenta la edad del señor Manuel así como también las máximas de la experiencia y la probidad del juez al momento de sentenciar, no es solo importante que se acredite los gastos del señor sino que por lógica jurídica uno se puede dar cuenta que una persona que supera los 80 años necesita gastos geriátricos y cuidados especiales, así como también el demandado según lo manifestado en su declaración él ha señalado que padece de una enfermedad de colon y está en tratamiento, así mismo si bien el menor está reconocido en un acta de nacimiento, debería tomarse en cuenta que no acredita la relación paterno filial con el demandado como una prueba de ADN por tal motivo según la norma sustantiva y adjetiva la ley no ampara el ejercicio ni abusivo de un derecho al momento de decidir y los alimentos se otorgan teniendo muy en consideración las necesidades de quien lo solicita, en este caso un menor que tiene a su madre llena de fuerza y vitalidad, así mismo puede ella colaborar con la manutención de su menor hijo.

En este acto, la Señora Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, impartiendo Justicia a nombre de la Nación ha expedido la siguiente. -

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE (09). -
Piura, 25 de abril de 2018.-

I. ANTECEDENTES. -

- 1.1. La demandante SILVIA ANALI CASTRO RIVAS, a través de su demanda, solicita que el demandado MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO acuda a su menor hijo MAIKI MARCELO SEMINARIO CASTRO con una pensión alimenticia mensual y adelantada del SESENTA PORCIENTO (60%) del haber mensual que percibe el demandado en Calidad de Cesante del Ministerio de Agricultura, demanda que fue admitida a trámite mediante Resolución Número Uno, disponiéndose correr traslado al demandado para que la conteste en el plazo de cinco días hábiles.
- 1.2. El demandado mediante Resolución número seis fue declarado rebelde.
- 1.3. El día de hoy se llevó a cabo la audiencia única con asistencia de las partes.

II. FUNDAMENTOS:

2.1.- PRIMERO: El Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, el derecho a ejercer la tutela jurisdiccional efectiva, en defensa de sus derechos, debiendo ejercerla con sujeción a un debido proceso de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 139° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por lo que, el objeto de la presente causa consiste en señalar una pensión de alimentos a favor de su menor hijo MAIKI MARCELO SEMINARIO CASTRO encontrándose obligado para ello el demandado MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO.

2.2.- SEGUNDO: La presente demanda es una pretensión de alimentos, precisándose que para solicitar alimentos tienen que acreditarse conjuntamente los siguientes presupuestos: a) Estado de Necesidad que consiste en la situación de necesidad de quién o quiénes solicitan los alimentos, b) Posibilidad Económica del obligado, es decir que el demandado puede cumplir, en virtud a sus ingresos diarios, semanales o mensuales, el pago de la pensión alimenticia a imponerse y c) Norma Legal que establezca la obligación para su asignación; debiendo observarse para regular la pensión de alimentos los presupuestos legales establecidos por el artículo 481° del Código Civil, esto es en atención de las necesidades de los menores a favor de quien se solicita el pago de la pensión de alimentos y las posibilidades del obligado.

2.3.- TERCERO: Nuestro ordenamiento jurídico vigente establece que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, señalando además que estos deben fijarse en mérito a las necesidades de quien los pide y las posibilidades económicas de quien debe darlos, atendiendo a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor; debiendo además tener presente la realidad socio económica existente a fin de señalar una pensión alimenticia que sea posible materializar y cumplir con la finalidad inmediata para la cual se asigna; precisando que la obligación alimenticia es de ambos padres y no solamente del demandado.

2.4.- CUARTO: Para valorar la prueba en el proceso de alimentos, no es necesario que la misma sea directa a los ingresos del demandado, pues no requiere la demostración exacta de los ingresos de éste o de su patrimonio, sino un mínimo de elementos que den las pautas básicas para establecer el monto de la pensión; pues dicho monto que determina la prestación alimenticia debe tener presente la condición económica y social de las partes, valoradas a través de su sistema de vida; y atendiendo a ello es que la valoración de la prueba en el proceso de alimentos no obedece a cánones rígidos; debiendo la A Quo valorar en su conjunto todos los medios de prueba aportados por las partes y señalar una pensión de alimentos justa y equitativa.

2.5.- QUINTO: Estado de Necesidad de la Menor Alimentista: Conforme se advierte de la partida de nacimiento de folios cuatro, el menor alimentista MAIKI MARCELO SEMINARIO CASTRO tiene actualmente 14 años de edad de las necesidades básicas y necesarias para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación, salud entre otros; conceptos señaladas en el artículo 472° del Código Civil, concordante con el artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes, siendo así el desarrollo evolutivo de los niños trae consigo el incremento de sus exigencias en cuanto a gastos de alimentación, vestido, salud, educación y demás conceptos de lo que se entiende por alimentos; por lo que, si bien en principio este aspecto no requiere de probanza al constituir “El estado de necesidad de los menores una presunción legal iuris tantum”¹ de conformidad con el artículo 278° del Código Procesal Civil; sin embargo, ello no implica que las partes se abstraigan de su deber de probar aquellas situaciones que incidan de manera especial en dicho desarrollo tal como lo ha acreditado la demandante quien a fojas 05 anexo una constancia emitida por el Colegio San Ignacio de Loyola donde acreditaría que el menor alimentista se encuentra estudiando en dicha institución, así como que en el año 2017 curso el segundo grado de secundaria, lo que generaría gastos de trabajo, útiles, refrigerio, transporte entre otros.

2.6.- SEXTO: Posibilidades Económicas del Demandado: En cuanto a las posibilidades económicas del demandado MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO: Se tiene que el artículo 461° del Código Procesal Civil señala que “La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda ...”, concordado con el artículo 282° del mencionado Código que establece “El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a la conducta que éstos asuman en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción...”; entonces, dicha rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, respecto a que el demandado cuenta con posibilidades económicas para acudir a su menor hijo, sin embargo al haber admitido medios de prueba de oficio que acreditaría las posibilidades económicas del demandado es necesario pronunciarse sobre:

Sobre sus ingresos económicos.-En el caso de autos la demandante ha referido que el demandado percibe su pensión de cesante del Ministerio de Agricultura, versión que ha sido corroborada por el demandado cuando se le ha preguntado, en el pliego interrogatorio de oficio, que por el concepto de Asignación Anticipada fijado por este despacho (20%) se le ha descontado s/.473.00 soles, deduciéndose que es verdad que percibe mensualmente una pensión de cesante, con la que cubriría sus gastos personales y el cumplimiento de una pensión de alimentos a favor del menor alimentista.

Sobre su carga familiar. - Del pliego de preguntas formulado al demandado se evidencia que el menor alimentista sería su único hijo, menor de edad de quien está obligado a asistirle con una pensión de alimentos, unido a ello deberá cubrir los gastos personales de sobrevivencia que se le generan diariamente.

Su estado personal.- En aplicación al Principio de Inmediación se evidencia que el demandado es una persona adulta, a quien la juzgadora debió alzar la voz para que pueda escuchársele y poder responder las preguntas que se le formulo en la etapa de actuación de medios de prueba, adultez que se corrobora con su documento de identidad en el que se aprecia que nació el 08 de octubre de 1931, y que actualmente cuenta con 87 años de edad, persona que su calidad de vida se ve deteriorada con la situación de salud propia de su edad, y que si bien no ha acreditado su estado de salud, por la lógica y la experiencia se conoce que una persona a medida que alcanza una edad avanzada su salud se ve desquebrajada, necesitando de otros cuidados, más aun si el obligado es una persona que vive sola, que debe ver por su alimentación, así como de su lavado de ropa, tal como él lo ha referido y que la demandante no objeto su respuesta.

2.7.- SETIMO: Por lo que antes expuesto se CONCLUYE que si bien el estado de rebeldía causaría presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, respecto a que el demandado cuenta con posibilidades económicas para acudir a su menor hijo con una pensión de alimentos, también es cierto que en esta audiencia se admitió como medio de prueba de oficio la declaración del demandado, con la que se ha podido acreditar que es una persona de avanzada edad, que cuenta a la fecha con 87 años de edad, y que requiere de cuidados especiales propios de su edad, y que si bien su estado de salud no ha sido acreditado estas se deducen por la propia edad que tiene, pues la misma se va deteriorando, debiendo tenerse presente su edad avanzada, pues para fijar una pensión de alimentos no solo basta que se tenga en cuenta las necesidades del menor alimentante sino las posibilidades del demandado para acudir con la pensión de alimentos, siendo así y no habiéndose opuesto ninguna de las partes a la asignación anticipada que se fijó en el proceso de forma provisiona, se presume que la misma están de acuerdo. Por último, precisar a la demandante que también está obligada a cubrir las necesidades de su hijo, tal como lo ha venido realizando, más aún si corresponde a ambos padres la responsabilidad de sostener y contribuir al desarrollo integral de ellos, tal y conforme lo dispone el artículo 423° inciso 1° del Código Civil.

Por estas consideraciones, en aplicación de las normas legales citadas, habiendo valorado y meritado la juzgadora los medios de prueba aportados al proceso, la señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de Piura, Impartiendo Justicia a Nombre de la Nación.

IV.- FALLO:

4.1.- Declarando FUNDADA en parte la pretensión incoada por SILVIA ANALI CASTRO RIVAS, en representación de su menor hijo MAIKI MARCELO SEMINARIO CASTRO sobre ALIMENTOS contra MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO; en consecuencia:

4.2.- ORDENO que el demandado MANUEL FERNANDO SEMINARIO ATO; cumpla con abonar a favor de su menor hijo una pensión de alimentos mensuales y adelantados, del VEINTE POR CIENTO (20%) que percibe el demandado en Calidad de Cesante del Ministerio de Agricultura.

4.3.- ORDENO Oficiar al Banco de la Nación, para que se le aperture una cuenta de ahorros a nombre de la demandante, la misma que servirá solo para ser efectivo el cobro de las pensiones de alimentos, para lo cual deberá apersonarse a diligenciar el Oficio correspondiente.

4.4.- HÁGASE de conocimiento a las partes que la pensión de alimentos que fije la sentencia debe pagarse por periodo adelantado y se ejecutada, aunque haya apelación, de conformidad con lo prescrito en el artículo 566 del C.P.C.

4.5.- INFORMESE AL DEMANDADO QUE LA PENSION DE ALIMENTOS EMPIEZA A REGIR DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA CON LA DEMANDA. 4.6.- EXHORTESE A LA DEMANDANTE que el día que realice su propuesta de liquidación de pensiones devengadas anexe el estado de cuenta de la cuenta que se le va aperturar en el Banco de la Nación, ello con la finalidad de que se agilice el trámite al momento de practicar la misma.

En este estado se le pregunta a la parte demandante si está conforme a lo que respondió:

Demandante: IMPUGNAMOS

Demandado: CONFORME

Se le concede el plazo de ley a la demandante para que fundamente su recurso de apelación. Dándose por concluida la presente audiencia, firmando la parte que asistió; Avocándose la secretaria que da cuneta por disposición del superior; lo que doy fe.-. Notifíquese con las formalidades de ley. -

APÉNDICE 02

Se adjunta modelo de acta de audiencia única oral del proceso de alimentos N° 1969-2018, donde se puede apreciar que el acta contiene sólo 03 páginas, pues la audiencia queda registrada en audio y sólo se consigna los aspectos más resaltantes.

3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Calle Tumbes

EXPEDIENTE : 01969-2018-0-2001-JP-FC-03

MATERIA : ALIMENTOS

JUEZ : MECA QUEREVALU MARY MERCEDES

ESPECIALISTA : FARFAN ESPINOZA LIDIA

APOYO DE AUDIO : DANIEL ARTEAGA CAMPOS

DEMANDADO : MERMA HUAYMARCARI, JHONATAN SERGIO

DEMANDANTE : JIMENEZ GARCIA, BETTY LUZ

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA ÚNICA ORAL

INTRODUCCIÓN: Piura, siendo las 10:00 AM, del día 18 de diciembre de 2018, ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Piura, que dirige la Señora Juez MARY MERCEDES MECA QUEREVALU, se realiza la AUDIENCIA ÚNICA en el PROCESO DE ALIMENTOS N° 1969-2018, bajo el modelo de la R. A. Nro. 944-2018-P-CSJPI/PJ. Se solicita a los asistentes su acreditación.

II. ACREDITACION DE LOS INTERVINIENTES DEMANDANTE: BETTY LUZ JIMENEZ GARCIA, con DNI N° 47974666, número de celular 988230964; con correo electrónico luzjimenez0917@hotmail.com; con domicilio real en Urb. Los Tallanes Mz. G, lote 2. DEMANDADO: Se deja constancia de la inasistencia del demandado JHONATAN SERGIO MERMA HUAYMARCARI.

III. ETAPA DE SANEAMIENTO PROCESAL RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO (04). - AUTOS, VISTOS; y, CONSIDERANDO. - En el presente caso se encuentran los requisitos antes indicados y las condiciones de la acción; por lo que, no habiéndose deducido excepciones ni defensas previas, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1) artículo cuatrocientos sesenta y cinco del Código Procesal Civil, SE RESUELVE. - DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL VÁLIDA, y en consecuencia SANEADO EL PROCESO.

IV. ETAPA DE CONCILIACION: La misma que no se puede llevar a cabo por la insistencia del demandado.

V. ETAPA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- Determinar las necesidades de la menor alimentista ZOE ABIGAIL MERMA JIMENEZ.
- Determinar las posibilidades económicas del demandado JHONATAN SERGIO MERMA HUAYMARCARI y las cargas familiares con las que cuenta para fijar la pensión alimenticia.

VI. ADMISION Y ACTUACION DE MEDIOS DE PRUEBA: Se admiten los medios de prueba señalados por la demandante: Acta de Nacimiento de fojas 03. Por parte del demandado: ninguno al haber sido declarado rebelde. (Queda registrado en audio)

VII. ETAPA DE ALEGATOS: De la demandante: (Queda registrado en audio)

SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO (05). -
Piura, 18 de diciembre de 2018.-

PARTE EXPOSITIVA: (Queda registrado en audio)

PARTE CONSIDERATIVA:

1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado, artículo 01 de la Constitución Política del Perú; así mismo el Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, el derecho a ejercer la tutela jurisdiccional efectiva, en defensa de sus derechos. Asimismo, en caso de proceso de familia como en los alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar entre otros, el juez tiene facultades tuitivas y en consecuencia se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil Nro. 4664-2010 PUNO, concordante con el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial del Perú 2016-2021, en el que propone la oralidad, la simplificación procesal en los procesos de filiación y alimentos, en aplicación al Principio de Interés Superior del Niño.

2. El artículo 481 del código Civil, establece los criterios para fijar alimentos: a) Estado de Necesidad que consiste en la situación de necesidad de quién o quiénes solicitan los alimentos y b) Posibilidad Económica del obligado, es decir que el demandado puede cumplir, en virtud a sus ingresos diarios, semanales o mensuales, el pago de la pensión alimenticia a imponerse.

3. Estado de Necesidad de las Menores Alimentistas: Conforme se advierte de la partida de nacimiento de folios 03 la menor ZOE ABIGAIL MERMA JIMENEZ tienen actualmente 02 AÑOS CON 06 MESES DE EDAD, menor que necesita contar con una pensión de alimentos a su favor. Si bien en los medios de prueba la demandante no ha anexado más documentos que acreditarían el estado de necesidad de la menor se puede decir que en aplicación de la presunción Iuris Tantum del que gozan los menores, estas se deducen por la edad que tiene la niña, no siendo necesario acreditarlas en su totalidad.

4. Posibilidades Económicas del Demandado: En cuanto a las posibilidades económicas del demandado JHONATAN SERGIO MERMA HUAYMARCARI: Se tiene que el artículo 461° del Código Procesal Civil señala que “La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda...”, concordado con el artículo 282° del mencionado Código que establece “El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes, atendiendo a la conducta que éstos asuman en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción...”; entonces, dicha rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, respecto a que el demandado cuenta con posibilidades económicas para acudir a su menor hija; sin embargo, a fin de fijar una pensión alimenticia que pueda materializarse y cumpla con la función para la que es asignada es necesario tener en cuenta lo siguiente.-

a) Sobre sus ingresos económicos.- La demandante ha referido que el demandado es Sub- Oficial Técnico de Tercera de la Policía Nacional Perú (PNP), recibiendo unos ingresos de S/ 3,500.00 soles, tal es así que se le ofició a la Dirección de Economía y Finanzas de dicha institución con Oficio N° 1969-2018, que obra a fojas 22, para que proceda a realizar los descuentos ordenados mediante Resolución N° 1, lo que acreditaría que el demandado sí contaría con un trabajo remunerado como efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Si bien la demandante ha referido que los ingresos del demandado son aproximadamente S/ 3,500.00 soles, se debe tener en cuenta que en casos similares que se han ventilado en este juzgado, los efectivos policiales que se han apersonado han adjuntado sus boletas de pago cuya remuneración oscila por el monto antes mencionado, ingresos

económicos que no son necesario averiguar con certeza, bastando tener un mínimo de indicios, ello al amparo del artículo 481 del Código Civil.

b) Sobre su carga familiar. - Al haberse declarado rebelde, no obra ningún apersonamiento por parte del demandado que informe sobre su carga familiar, sin embargo, la demandante en etapa de alegatos a ha referido que el demandado cuenta con otra hija, a quien también se la asiste a través de un proceso judicial, corroborándose de esta manera que si contaría con carga familiar.

c) Su estado personal. - De igual forma, no se ha puesto de conocimiento si el demandado sufre de alguna discapacidad para el trabajo.

5. CONCLUSIÓN: Siendo así, en el presente caso, se ha presentado los dos requisitos para fijar una pensión de alimentos a favor de la menor ZOE ABIGAIL MERMA JIMENEZ, cuyas necesidades se deducen por la edad que tiene. Asimismo, en cuanto a las posibilidades del demandado JHONATAN SERGIO MERMA HUAYMARCARI se encontraría laborando para la Policía Nacional del Perú (PNP), como lo ha mencionado la demandante, contando con un ingreso mensual fijo procedente de ser efectivo policial. Asimismo, en cuanto a determinar la pensión que se le fijará a la menor tenemos que precisar la carga familiar con la que cuenta el demandado y aplicar el inciso 6 del artículo ° 648 del Código Procesal Civil que hace mención el porcentaje embargable que se le puede realizar a los obligados, esto es del 60% de todos sus ingresos, por lo que contando con carga familiar y en aplicación del artículo 6 de la Constitución Política del Perú que establece la igualdad de derechos sobre todos los hijos la juzgadora emite su siguiente fallo.

PARTE RESOLUTIVA: (Queda registrado en audio)

SE RESUELVE:

1.- Declarar FUNDADA en parte la pretensión incoada por BETTY LUZ JIMENEZ GARCIA, en representación de su hija ZOE ABIGAIL MERMA JIMENEZ, sobre ALIMENTOS contra JHONATAN SERGIO MERMA HUAYMARCARI; en consecuencia: se ORDENA que el demandado JHONATAN SERGIO MERMA HUAYMARCARI cumpla con abonar a favor de su menor hija una pensión de alimentos mensuales y adelantados, ascendentes al TREINTA POR CIENTO (30%) DE SUS INGRESOS QUE PERCIBA DE FORMA MENSUAL Y D ELIBRE DISPONIBILIDAD, FUERA DE LOS DESCUENTOS DE LEY; PENSIÓN QUE SERÁ DEPOSITADA EN LA CUENTA DE AHORRO A NOMBRE DE LA DEMANDANTE N° 04-631-857685 QUE SE LE APERTURO EN EL BANCO DE LA NACION.

2.- DEUDOR MOROSO: COMUNÍQUESE al demandado que de incumplir con lo dispuesto en la presente sentencia será registrado en el registro de Deudores Alimentarios Morosos conforme lo dispuesto en la Ley N° 28970. 3.-INICIO DE LAS PENSIONES: INFÓRMESE AL DEMANDADO QUE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS EMPIEZA A REGIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADO CON LA DEMANDA, ESTOE S DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Se le pregunta a la parte asistente su conformidad o no con la sentencia emitida:

Demandante: CONFORME.

Así mismo se deja constancia que podrán solicitar las partes copia del Pte. audio, así como se informa que el acta se podrá visualizar en la página web del Poder Judicial del Perú en la pestaña de consulta de expediente judiciales. Dándose por concluida la presente audiencia y por cerrado el audio. Quedando notificados en este acto los asistentes; Notifíquese al demandado conforme a ley.

APÉNDICE 03

Entrevista realizada por el magistrado Jaime David Abanto Torres al Juez Carlos Polanco Gutiérrez, coordinador del "proyecto piloto para la modernización del despacho judicial en los juzgados civiles". ABANTO TORRES (2019)

Pregunta 01: La esperanza del proceso civil es la oralidad. ¿En qué consiste la práctica de la oralidad?

Respuesta: No sé si sea la esperanza, pero estimo que es mejor que el tradicional proceso escrito. La oralidad consiste en tratar de gestionar el proceso a través de audiencias, bajo el principio de la oralidad, buscando que se obtenga mayor y mejor calidad en la información, lo que permite resultados más céleres, predictibles y transparentes.

La gestión del caso gira en torno a la audiencia preliminar, la que se cita sobre la base del art. 51 inciso 3 del Código Procesal Civil, que faculta a los jueces a citar a las partes para que esclarezcan los hechos. Al concurrir las partes, presentan su caso, se sanea el proceso y luego se procura que se llegue a acuerdos conciliatorios. De no ser posible, con toda la información recibida se fijan los puntos controvertidos y los hechos no controvertidos, en presencia de los abogados presentes, luego se admiten las pruebas correspondientes. Si solo hay prueba documental se dispone el juzgamiento. No todos los casos requieren una audiencia preliminar.

Pregunta 02: ¿Qué es lo que sucede una vez concluida la audiencia preliminar?

Respuesta: Tienes el proceso listo para ser juzgado. Se cita a la audiencia de pruebas o juzgamiento y actuamos las pruebas admitidas a través de la oralidad. Es importante registrar todo en audio y video, pues de lo contrario la redacción del acta quitará fluidez a la actuación, como sucede en el proceso escrito. Con toda la información, estamos listos para sentenciar. La introducción del audio y video es importante para impulsar esta práctica.

Pregunta 03: ¿Qué buenas prácticas se han incluido?

Respuesta: Hay varias que son más fáciles de emplear en un sistema oral. La primera, al calificar las demandas, dependiendo de la materia, se revisa la dirección RENIEC del demandado y, en caso necesario, se dispone notificar de manera adicional en esa otra dirección. Así se han reducido el número de nulidades por defectos de notificación y cambio de domicilio.

Otra, por ejemplo, en los procesos sumarísimos, si en la demanda o contestación se ofrece como pruebas informes de terceros, ellos se solicitan al dictar el auto admisorio de la demanda o de la contestación, para que en la fecha que se lleve a cabo la audiencia única se cuente con todas las pruebas que permitan dictar sentencia en audiencia.

Pregunta 04: ¿Tuvo colegas con las mismas inquietudes?

Respuesta: Hay un grupo humano comprometido en mejorar el servicio que se brinda; el problema es que, pese a todo el esfuerzo, el sistema nos lleva al mismo lugar: metas anuales cumplidas con un retraso creciente y baja aprobación de la labor de los jueces civiles.

Consideramos que el proceso escrito nos llevó a este sitio y como lo dice un principio de la Neurolingüística, si queremos resultados diferentes, no debemos seguir haciendo lo mismo. Sobre esta base se proyectó la oralidad civil. Sabemos que no es una panacea o la solución a todos los males. Es un intento de mejorar la gestión del proceso, apostando por la calidad de información,

transparencia y celeridad. No tenemos un modelo definitivo, necesitamos aportes de todos para ir mejorando, corrigiendo y haciéndolo más eficaz.

Pregunta 05: ¿Y hubo resistencias para aplicar la oralidad?

Respuesta: Todo cambio provoca resistencias, de los de arriba, del costado y abajo. Recuerdo varias voces que decían “que no se puede hacer” y daban mil razones ... nuestra respuesta era... "se está haciendo".

Pregunta 06: ¿Y cómo nació el Plan Piloto?

Respuesta: Tiene una historia algo extensa. En conversaciones con el juez Ramiro Bustamante Zegarra, sobre cómo mejorar la gestión de los expedientes civiles, en Santiago de Chile vimos el modelo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que funciona en varios países. Nos agradó el tema de la gestión del proceso a través del valor agregado, a través de la oralidad: las audiencias tenían sentido, no eran una etapa del proceso.

¿Cómo oralizar si las modificaciones del CPC, le quitaron las audiencias? Una alternativa era utilizar el art. 51.3 del CPC y hacer vigente la intermediación y concentración. Ramiro (que presidía una Comisión Nacional sobre Reforma Civil) estuvo de acuerdo y empezamos a experimentar en mi juzgado, convocando a audiencias preliminares (noviembre 2017) haciendo efectivos los principios del Código Civil y tratando de romper el ritualismo.

El primer resultado alentador fue que luego de concluida la audiencia preliminar, no se presentaban escritos. En el 2015, estuvimos en Madrid, viendo cómo funciona la oralidad en España y el buen ánimo de los jueces cuando la aplican. Bueno, curiosamente, Chile no ha oralizado su justicia civil, aunque sí la penal, laboral y familiar.

Pregunta 07: ¿De qué manera apoyó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ)?

Respuesta: El CEPJ celebró un convenio con el CEJA para ver la posibilidad de sacar adelante el proyecto. Cuando confirmaron que era posible, se pensó en Arequipa y Lima para el Plan Piloto. La logística de Lima es algo más complicada y se decidió que Arequipa iniciara, pues ya veníamos haciendo audiencias preliminares. Luego se elaboraron tres protocolos, de los cuales uno, el resumido, define las reglas principales de la oralidad.

Pregunta 08: ¿La ejecución del Plan Piloto requirió de presupuesto adicional?

Respuesta: El convenio con el CEJA no costó. Ellos enviaron dos consultores para obtener información, tanto jurídica como estadística. El año pasado el presidente de nuestra Corte, Eloy Zamalloa, nos asignó dos salas de audiencias, una equipada con equipos de audio y otra que recién se está equipando y así iniciamos. No hemos tenido un presupuesto especial.

Pregunta 09: ¿Cuál es la clave para lograr resultados positivos?

Respuesta: La clave es el compromiso de los jueces y trabajadores. Si no se cree en la oralidad no funcionará. Como no tenemos cambios normativos, el sistema se sustenta en el valor agregado que se obtiene en la gestión del caso. Los abogados lo sienten.

El CEJA recomendaba que los juzgados deberíamos iniciar con carga cero, pero sabíamos que los demás colegas pondrían el grito en el cielo y decidimos ingresar con carga rezagada (en promedio 950 expedientes por juzgado), allí se aprecia el compromiso. Así empiezan aparecer las anécdotas, litigantes que van a preguntar si se puede llamar en sus procesos antiguos a una audiencia preliminar, judiciales y bueno, todos esos expedientes los estamos ingresando a la oralidad. Han empezado a

reaparecer las conciliaciones. Nuestra meta oficial anual suele ser de 400 expedientes, y al 31 de mayo tenemos un promedio de 260 expedientes resueltos. Trataremos de llegar a los 600 hasta fin de año.

Respuesta 10: ¿Cuán complicado es dictar sentencia en audiencia?

Respuesta: Los expedientes los vamos a tener que sentenciar en audiencia o en solitario. Hacerlo en la audiencia o inmediatamente después tiene la ventaja de tener fresca la información que se obtuvo de la audiencia de pruebas, en la que los abogados "han hecho hablar a sus pruebas". Con la información recabada y la estudiada es más fácil dictar sentencia en audiencia que luego, pues con el paso de los días puedes empezar a olvidar detalles y tienes que volver a estudiar el expediente.

Nos preguntan si terminamos el día cansados y sí, como todos los jueces que en sus despachos batallan contra la carga procesal, pero con una diferencia. El cansancio es diferente, pues no es el agotamiento que genera el trámite engorroso, por escritos y escritos; nuestro cansancio va de la mano con la satisfacción del expediente concluido.

APÉNDICE 04

Entrevista realizada por Paul Herrera Guerra al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miguel Rivera Gamboa. HERRERA GUERRA (2019)

Pregunta 01: El Poder Judicial (PJ) pone hoy en funcionamiento el primer módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Lima. ¿Cuál es su trascendencia?

Respuesta: Se trata de una nueva propuesta de innovación en el área civil del sistema de justicia dentro de los cánones o parámetros que establece el Código Procesal Civil. Se asume un modelo de gestión esencialmente diferente, basado en la oralización del proceso. Se pretende que los procesos civiles no sean 100% escritos y agilizar los trámites para resolverlos más rápido y más eficientemente, mediante concentración de actos procesales.

Pregunta 02: ¿Cómo así?

Respuesta: Uno de los componentes de esta propuesta es la corporativización. Se asume una nueva forma de organización judicial para racionalizar recursos. Los juzgados se agrupan por determinado número en un módulo corporativo para especializar las actividades. En este caso, en un módulo se agrupan seis juzgados que se dedicarán a tramitar los procesos desde la presentación de las demandas hasta la emisión de las sentencias, y otros dos que se dedicarán a la ejecución de los fallos que se emitan. Habrá áreas en las que se desarrollarán actividades para todos los juzgados. Por ejemplo, las áreas de notificaciones y de calificación de demandas.

Pregunta 03: ¿Para este primer módulo se remodeló parte de la infraestructura de la corte?

Respuesta: Hemos adaptado provisionalmente nuestras instalaciones e infraestructura existente en dos pisos de la sede central de la corte para que este módulo funcione. Pero la idea es que funcione en todo un piso, para lo cual se requiere efectuar la remodelación, reestructuración y el equipamiento informático del caso. Ya solicitamos la respectiva partida presupuestaria.

Pregunta 04: ¿A cuánto asciende el costo de estas obras?

Respuesta: Asciende aproximadamente a un millón 700,000 soles que se destinarían para instalar los 8 juzgados del módulo y una sala civil de litigación oral, en un solo piso. De concretarse la transferencia de estos recursos en el corto plazo, haríamos todos los esfuerzos para inaugurar a fines de este año los ambientes definitivos de este primer módulo y en enero del 2020 se trasladarían allí los 8 juzgados y la sala correspondiente. La idea es, más adelante, hacer lo mismo con los otros 16 juzgados civiles que también tenemos.

Pregunta 05: ¿Para cuándo se proyecta concluir la instalación de este modelo de gestión para todos los juzgados civiles?

Respuesta: Probadas las ventajas de este modelo y corregidos los defectos que lamentablemente se darán, la idea es que toda la especialidad civil ingrese paulatinamente a esta nueva manera de gestionar los procesos para que el próximo año o en dos años como máximo los 24 juzgados civiles de Lima trabajen con esta nueva fórmula de organización de módulos corporativos.

Pregunta 06: ¿Qué ventajas tiene este nuevo modelo de gestión?

Respuesta: Imprime mayor celeridad a los procesos, son menos actos procesales, no hay tantos traslados de escritos, las partes pueden oralizar sus cuestionamientos. La idea es que el juez en las audiencias resuelva de inmediato o excepcionalmente reserve la resolución para algunos días posteriores. Las audiencias permiten la inmediación del juez con las partes que allí pueden expresarse

y que el juez tome conocimiento cabal del problema o conflicto. Además, este nuevo modelo permite que los procesos sean más transparentes, más eficientes.

A criterio de Rivera Gamboa, el modelo de módulos corporativos de litigación oral puede adaptarse también en todas aquellas especialidades en las que supletoriamente se aplique el Código Procesal Civil, como por ejemplo en el área de Familia. Considera entonces un salto cualitativo el que se ponga en funcionamiento el primer módulo civil corporativo de litigación oral. Salto que se realiza con base en un modelo o proyecto impulsado y diseñado por el Centro de Estudios para la Justicia de las Américas (CEJA) para abordar la problemática de la justicia civil, no solo en el Perú, sino también en el contexto latinoamericano, refirió.

APÉNDICE 05

Entrevista realizada por el magistrado Jaime David Abanto Torres al Juez Supremo Héctor Lama More, quien es presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil del Poder Judicial. ABANTO TORRES (2019)

Pregunta 01: ¿Cómo surgió la idea de oralizar el proceso civil?

Respuesta: Surgió como respuesta de los propios magistrados para poder agilizar la carga procesal en materia civil, ante la evidencia que el proceso civil, devenido en un proceso escriturado, se convirtió en un proceso lento y farragoso; notoriamente perjudicial a los justiciables.

La incorporación de nuevas modalidades de gestión judicial que rompen con la organización judicial piramidal clásica, ha demostrado que la única forma posible de superar esas dificultades, es el uso e implementación por los jueces, de la oralidad.

Pregunta 02: ¿Cómo fue que el PJ decidió implementar el plan piloto para la modernización de los juzgados civiles?

Respuesta: De acuerdo a la realidad, la justicia civil en el Poder Judicial se encuentra en crisis, por la grave lentitud de respuesta a la solución de los conflictos, así como por la forma ineficiente de la gestión del proceso. Esto se debe no solo a la sobrecarga que padecen sino, principalmente, al método escrito usado en la tramitación del proceso civil; ello ha dado lugar que el proceso marche a impulso de los escritos presentados por los abogados, a los proveídos que los auxiliares proyectan y al agobiante e ineficiente Despacho Judicial. Tal método ha ocasionado el crecimiento innecesario de los expedientes judiciales, convirtiendo en compleja su tramitación; la ausencia de una eficiente supervisión y monitoreo de dichos procesos, ha impedido que en su momento se adopten las medidas correspondientes.

El Poder Judicial y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) celebraron en el mes de noviembre de 2017, un convenio de colaboración para la conversión del sistema de litigación civil escrito a uno de litigación oral. En abril de 2018, se inició formalmente la asesoría y cooperación. Para esto solicitaron información legal, estadística y administrativa de los juzgados de Arequipa iniciándose un trabajo conjunto, en el que luego de la discusión y presentación de diversos estudios, análisis y documentos, terminó con la expedición de la Resolución Administrativa N° 312-2018-CE-PJ dada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprobó como Plan Piloto la Creación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Pregunta 03: ¿Cuáles son los puntos claves del nuevo proceso oral?

Respuesta: La oralidad es una forma de gestión del proceso, es un método, no un principio. A través de él se busca que cada quien cumpla su rol, en un escenario que solo una audiencia pública puede crear; las partes aportando sus teorías del caso y contradicción con sus medios probatorios correspondientes, el Juez dirigiendo el proceso de manera activa y buscando a través de los principios de inmediación y concentración que las partes, en la medida de lo posible, solucionen su controversia a través de la conciliación y de no ser posible ello, le proporcionen mayor información y de mejor calidad, que permita decidir el proceso a su cargo en menor tiempo.

Con el nuevo proceso oral, este se vuelve eficiente, pues permite resolver el conflicto en el menor tiempo y menor costo; lo hace más transparente y célere.

Pregunta 04: ¿Cuáles son las normas administrativas que regulan el nuevo procedimiento oral?

Respuesta: Lo que hay es un protocolo de gestión de cada distrito judicial, muchos de los cuales quieren implementar la oralidad civil en su sede. Al ver los resultados que se están dando en la Corte Superior de Arequipa, han tomado interés en este tema de la oralidad civil, lo que se viene encaminando ahora en la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial.

Así también se tiene que en el Código Procesal Civil la oralidad se regula en los denominados “principios consecuencias”, privilegiando de esta manera el principio de oralidad sobre la escritura. Nos referimos a los principios de inmediación, concentración, economía, celeridad procesal y publicidad, los cuales se maximizan en el proceso civil a través del principio de oralidad.

Pregunta 05: ¿En qué Cortes Superiores está funcionando el nuevo proceso oral? ¿En qué distritos judiciales se implementará próximamente?

Respuesta: Como bien se sabe la oralidad en lo civil viene funcionando ya en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, desde diciembre de 2018; en la de La Libertad desde hace un par de meses; y, en la de Lima, desde hace unas semanas.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordó incorporar al plan de implementación de la oralidad civil, en las Cortes Superiores Del Santa, Ventanilla, Callao, Tacna, Lima Norte, Moquegua, Amazonas, Huancavelica; Junín e Ica.

Pregunta 06: ¿Considera Ud. que era necesario modificar el Código Procesal Civil para aplicar el nuevo proceso oral?

Respuesta: Aunque siempre es bueno que oralidad esté regulada en la norma procesal, en nuestro caso, por ahora, no es indispensable la positivización del citado método, pues el juez puede legalmente, en el marco del actual CPC, convocar a una audiencia y hacer en ella lo que se dispone se realice mediante auto en la soledad de su Despacho. Ello mientras no se afecte ninguno de los derechos fundamentales de las partes, de naturaleza procesal. En la actualidad, la oralidad civil se viene ejecutando en las tres cortes superiores antes señaladas.

El Código Procesal Civil Peruano de 1993, vigente hasta la actualidad, incorpora sustancialmente el proceso por audiencias, escenario natural de la oralidad, diseñado a través de las distintas audiencias por las que se desenvuelve el proceso.

Pregunta 07: ¿Qué aportes podría realizar el nuevo proceso oral a una reforma del Código Procesal Civil?

Respuesta: La evidencia fáctica, sobre la celeridad y transparencia, que emerge de las audiencia preliminar, al que se agrega el método de la oralidad, dará fuerza y sustento para su regulación; el uso del registro de audio y video en la audiencia de pruebas, que elimina el acta respectiva, debe extenderse a la audiencia única y a la audiencia preliminar, en donde se debe prever la técnica de la oralidad; se debe dar prioridad a la oralidad que a la escritura; en la interacción de los sujetos procesales en el desarrollo de las audiencias; deben eliminarse los formalismos innecesarios, permitiendo un debate ordenado y natural;

Todas las reformas al proceso civil, de los últimos tiempos con el método de la oralidad incluido, comparten la implementación de dos audiencias: la preliminar o inicial con sus objetivos clásicos. El intento de conciliación, saneamiento del proceso, la fijación del objeto del proceso y los hechos controvertidos y la exclusión probatoria; y la audiencia del juicio oral, final o de vista de causa, para la producción de los medios probatorios.

Pregunta 08: Desde su experiencia como magistrado ¿qué recomendaciones les haría a los jueces que tramitan los procesos bajo el nuevo modelo?

Respuesta: El juez como director del proceso conducirá la audiencia dentro de un estilo argumentativo, es decir dando razones y pidiéndolas para dirigir el debate que origina. En la audiencia preliminar debe ser ordenado y productivo, es necesario que modere la intervención de las partes con la finalidad de evitar que se dilate innecesariamente la audiencia. Un juez desarrolla en el proceso cuatro funciones que son: autoridad que toma decisiones, facilitador del diálogo, comunicador y educador (instructor).

Pregunta 09: Finalmente, ¿qué recomendaciones les haría a los abogados?

Respuesta: La litigación oral requiere que el abogado, conozca los hechos; debe prepararse para exponer oralmente su caso ante la otra parte y el juez, debe ser sencillo, directo y ordenado. No debe limitarse al estudio del derecho aplicable al caso que patrocina, su actividad es la contrastación en lo posible, de la historia de su cliente, pues este podría no proporcionarle toda la información requerida por no considerarla relevante o por tener una visión diferente de la misma. El abogado debe tener un perfil de investigador de campo en la búsqueda de material probatorio con la ayuda y participación de su cliente. Buscar material relevante que fortalezca la formulación de la teoría que utilizará en los tribunales.